

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PANAMÁ

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
(Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Programa
de Maestría en Derecho Procesal)

Tesis para optar por el Título de
Maestría en Derecho Procesal

“ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL EN
MATERIA DE HABEAS CORPUS, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES”

Presentado por el:
Licenciado Manuel Salvador Oberto

Director de la Ponencia:
Doctor Edgardo Molino Moía

Panamá, República de Panamá

1999

DIGITALIZADO
DEPTO. DE COMPUTO
SIBIUP



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN

DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL

Título del trabajo de tesis "Análisis Crítico de la Jurisprudencia Nacional en
Materia de Habeas Corpus, Conclusiones y Recomendaciones.

Nombre del estudiante Licdo. Manuel Oberto Solanilla Cédula 8-234-455

Miembros del Jurado:

- a Dr. Edgardo Molino Mola (Director)
b Dr. Rigoberto González Montenegro
c Dr. Simeón González

Calificaciones que otorgan:

95

95

95

95

Nota final promedio

Observaciones generales del jurado El tema central de esta Tesis de Maestría, sobre la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con la protección de la libertad personal por parte de nuestro más alto Tribunal, revela los avances que se han producido en nuestro país en defensa de tan precioso derecho natural del hombre. Así se aprecia la creación del Habeas Corpus Preventivo, el Habeas Corpus Correctivo, la protección de la mujer embarazada y la que ampara a su prole, a las personas mayores de 65 años, y el Habeas Corpus por teléfono, y tantos otros aspectos que revelan el grado de protección que ha obtenido la libertad personal en Panamá, pero que aún con todo lo hecho, todavía falta más por hacer, sobre todo en la tramitación más expedita de estos casos, en que no se cumple el principio de la audiencia permanente establecido por la ley.

Firma de los miembros del jurado.

a

b

Firma del coordinador del programa:

Firma del estudiante:

Fecha

8 de junio de 1999

c

Firma del representante de la
Vicerrectoría de Inv. y Postgrado

Firma del decano

Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas

INDICE GENERAL

Página

SECCION PRIMERA

RESUMEN (Traducción).....	2
---------------------------	---

SECCION SEGUNDA

INTRODUCCION.....	6
-------------------	---

SECCION TERCERA.

FUNDAMENTACION TEORICA

CAPITULO PRIMERO: FUNDAMENTO, CONCEPTO, NATURALEZA Y GENERALIDADES DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS

I.	LA LIBERTAD.....	12
II.	RESTRICCIONES A LA LIBERTAD FISICA	14
	A. La Captura	14
	B. La Aprehensión	17
	C. La Retención	19
	D. La Detención Preventiva	21
	E. El Arresto	23
	F. La Prisión	26
II.	CONCEPTO DE HABEAS CORPUS	27
II.	ANTECEDENTES HISTÓRICOS	31
	A. En la Antigua Roma	32
	B. En el Fuero y Manifestación de Aragón	33
	C. En el Fuero de Vizcaya	35
	D. En la Carta Magna del Rey Juan	35
	E. La Ley de Habeas Corpus de Carlos II Rey de Inglaterra	36
III.	NATURALEZA JURÍDICA	37
IV.	CONCEPCIÓN PROCESAL DEL HABEAS CORPUS COMO UNA ACCIÓN Y NO COMO UN RECURSO.....	39
V.	EL HABEAS CORPUS ES UNA INSTITUCIÓN DEL DERECHO	

PROCESAL CONSTITUCIONAL.....	47
------------------------------	----

CAPITULO SEGUNDO: EL HABEAS CORPUS EN LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES PANAMEÑAS

I.	CONSTITUCIÓN DE 1904	52
II.	LA LEY 2 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1908	53
	A. Concepto y Definición de habeas corpus	55
	B. Solicitud de habeas corpus los días sábados, domingos y días fenados.	56
	C. Las partes en el habeas corpus	57
	D. Casos en que no procede la acción de habeas corpus	57
	1. Penas de Policía	57
	2. Sentencias ejecutoriadas	58
	3. Si el detenido esta fuera de Jurisdicción Nacional (Zona del Canal)	59
	E. Formalidad que debe llenar la solicitud de habeas corpus	61
	1. Debe constar por escrito	61
	F. Incumplimiento del mandamiento de habeas corpus	61
	G. Término para resolver la solicitud de habeas corpus.....	63
	H. Efectos de la Resolución que decide la solicitud de habeas Corpus.....	63
	1. Procede la libertad inmediata del detenido.....	63
	2. El detenido no volverá a ser privado de su libertad por la misma causa.	63
	3. Se pasará de lo conducente a quien corresponda para que no haga efectiva la responsabilidad... al detentador de la libertad	64
	4. Si se resuelve que la detención es legal.....	64
	a) Si resultara manifiestamente temerana la pretensión del Querellante este satisfará los gastos extraordinarios que haya causado y pagará a juicio del Juez o de la Corte, una multa de doce cincuenta a cien balboas.	64
	b) Intervención del Ministerio Público	65
	c) Proposición y términos de prueba	66

I.	El Auto que resolvía la solicitud de habeas corpus no admitía apelación	66
J.	Competencia para conocer de la solicitud de habeas corpus.....	67
1.	Competencia especial	69
K.	Sanciones por incumplimiento de mandamiento de habeas Corpus.....	69
L.	Habeas corpus de oficio	71
III.	LEY 8 DE 1914	72
A.	El habeas corpus y la libertad corporal	73
B.	Concepto legal del habeas corpus en 1914	74
C.	Oportunidad del habeas corpus en 1914	75
D.	Representación legal del Funcionario demandado en el habeas corpus de 1914	76
E.	La competencia de la Corte Suprema de Justicia en el habeas corpus De 1914.....	77
F.	No procede le habeas corpus contra penas inferiores a ocho días en 1914	79
G.	Efecto de la sentencia de habeas corpus en 1914	80
H.	Orden verbal en casos urgentes de detención en 1914	80
I.	Improcedencia de la acción de habeas corpus en deportación de extranjeros perniciosos.	82
IV.	CONSTITUCIÓN DE 1941	83
V.	LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1946	86
VI.	LA LEY 46 DE 1956	89
A.	Naturaleza del mandamiento de habeas corpus	90
B.	Objeto del mandamiento de habeas corpus	91
C.	El habeas corpus en penas administrativas, faltas y Contravenciones.....	94
D.	Cese de la acción de habeas corpus y responsabilidad judicial del funcionario que ordena la detención ilegal.....	96
E.	Quién puede interponer el recurso (acción) de habeas corpus	98
F.	Requerimiento de la copia autenticada de la orden de detención Para solicitar el recurso (acción) de habeas corpus	101
G.	Interposición de la acción de habeas corpus en cualquier Momento.....	103
H.	Necesidad de la entrega de un informe escrito por parte del funcionario que ordenó la detención.	104

I.	Si el detenido es puesto a ordenes de la autoridad el demandamiento de habeas corpus se extenderá librado contra el funcionario que tenga el expediente.	106
J.	La sentencia de habeas corpus quedará ejecutoriada 24 horas después de desfijado el Edicto.	109
K.	Competencia para conocer de la acción de habeas corpus	110
VII.	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1972	112
A.	Acto reformativo de 1978	117
VIII.	EL ACTO CONSTITUCIONAL DE 1983	117

CAPITULO TERCERO: ASPECTOS PROCESALES CARACTERISTICOS DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS, REAFIRMADOS POR LA JURISPRUDENCIA DE NUESTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

I.	LA NORMA PROCESAL VIGENTE EN MATERIA DE HABEAS CORPUS.....	122
A.	Análisis comparativo de la Norma Procesal Vigente contenida en el Código Judicial VS la Ley 46 de 1956	123
1.	Cantidad de artículos de la Ley 46 de 1956 VS cantidad de artículos del Código Judicial Vigente.	124
2.	División que hacía la Ley 46 de 1956 VS la división que hace el Código Judicial Vigente.	124
3.	Denominación que hacía la Ley 46 de 1956 VS la.....	124
4.	denominación que le da el Código Judicial Vigente.	124
5.	La Ley 46 de 1956 hace concordancia en su artículo 2º con la Constitución de 1946 VS la concordancia que hace el Código Judicial Vigente con la Constitución de 1972.	125
6.	La Ley 46 de 1956 extendía el habeas corpus a la Contraversiones contenidas en el Código Administrativo VS el Código Judicial Vigente que sólo aplica el habeas corpus a las faltas y contraversiones que contienen los reglamentos de Policía.	126
7.	La Ley 46 de 1956 que permitía que la orden de sentencias fuese oral VS el Nuevo Código Judicial, que sólo permite que la orden sea escrita.	127
8.	La Ley 46 de 1956 establecía que el Tribunal de habeas corpus debía estar en audiencia permanente VS la norma del Código Judicial que es más imperativa y coercitiva en cuanto a mantenerse en audiencia permanente.	127
9.	La Ley 46 de 1956 en su artículo N° 7 incurría en un	

	error gramatical VS el artículo 2575 del Código Judicial Vigente que corrige dicho error.	128
10.	La Ley 46 de 1956 en su texto original incurría en otro error gramatical, el artículo 2572 del Código Judicial Vigente corrige el error	129
11.	El artículo 2576 es creación del Código Judicial Vigente. No estaban contenidos en la Ley 46 de 1956.	130
12.	La Ley 46 de 1956 establecía que sólo el detenido podía refutar oralmente los hechos del informe VS el artículo 2584 que permite que sea el detenido a su apoderado	130
13.	La Ley 46 de 1956 en su artículo 25 establecía un término para práctica de pruebas de 24 horas VS el artículo 2589 del Código Judicial que amplía el término.	131
14.	El artículo 2591 del Código Judicial cambia el término para dictar sentencia y el modo de su notificación contenido en el artículo 27 del texto original de la Ley 46 de 1956.	133
15.	El artículo 2595 del Código Judicial cambia la redacción de la Ley 46 de 1956 en cuanto a que una persona no puede ser detenida nuevamente por los mismos hechos	134
16.	El artículo 2587 del Código Judicial cambia la redacción del Artículo 34 del texto original de la Ley 46 de 1956.	135
17.	El artículo 39 del texto original de la Ley 46 de 1956 que imponía sanciones a la acción temeraria, no fue incorporado por el codificador en el Código Judicial Vigente.	135

II ASPECTOS PROCESALES DE MAYOR TRASCENDENCIA ESGRIMIDOS POR LA JURISPRUDENCIA NACIONAL. 136

A.	No corresponde al Tribunal de habeas corpus calificar la investigación realizada, sólo le corresponde constatar si la privación de la Libertad es legal o ilegal.	136
B.	Viola la lealtad procesal y el principio de contradicción, la falta de material probatorio que justifique la detención preventiva.....	139
C.	La función del Tribunal de habeas Corpus	142
D.	No procede acción de habeas corpus contra orden de conducción Para rendir indagatoria.	145
E.	En materia de droga, no procede detención preventiva cuando la cantidad de droga incautada sea menor a la medida posológica destinada al consumo personal.	149
F.	Requisitos procesales para que exista flagrancia en matena de drogas.....	152
G.	Procede la acción de habeas corpus interpuesta por llamada telefónica.....	157
H.	El Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Dirección de Migración, está facultado para detener y deportar a cualquier	

ciudadano extranjero que ingrese al Territorio Nacional.	159
I. No prospera Acción de Habeas Corpus, contra ordenes de arresto, emitidas por los Jueces y Magistrados del Organo Judicial, o por autoridad del Ministerio Público. Como aplicación del poder de coerción, que enviste al Juez Moderno, cuando le falta el respeto.....	162
J. La detención preventiva debe ser la última de las medidas que debe tomar el funcionario o autoridad que administra justicia, y la misma no debería dictarse los días viernes, ya que coloca al afectado en un estado de indefencia.....	170
K. La mujer culpable de un delito no puede ser encarcelada, si está amamantando a su hijo, no mucho menos detenida preventivamente una mujer embarazada que se le investiga por la comisión de un delito	173
L. Procede acción de habeas corpus contra la negativa de suspensión de ejecución de la pena cuando se trata de mujer recién dada a luz.....	177
M. Procede acción de habeas corpus contra resolución que ordene detención preventiva violando el debido proceso.	179
N. La autoridad que ordena la detención de una persona, está obligada a motivar dicha orden y establecer los elementos probatorios que lo conllevan a dictar dicha medida cautelar. De lo contrario hay base para justificar una investigación criminal contra la autoridad o funcionario que ordenó la detención ilegal.	182
O. Procede acción de habeas corpus por detención ilegal fundamentados en Prueba ilícita.....	187
P. Cabe recurso de hecho, dentro de la acción de habeas corpus por apelación denegada.....	191
Q. Conflicto de competencia.....	196
R. La prueba en apelación, en el proceso constitucional de habeas corpus	201
III. DIFERENTES CLASES DE HABEAS CORPUS.	206
A. Habeas Corpus Reparador o clásico.....	207
B. El Habeas Corpus Preventivo	209
1. Argumentos procesales en que fundamentamos la creación del habeas corpus preventivo y otras modalidades.	217
a. El principio procesal del "Favor Libertatis".	218
b. El artículo 2573 del Código Judicial.	219
c. El artículo 2594 del Código Judicial.	221
d. La teoría del Bloque de la Constitucionalidad.	224

e.	La jurisprudencia Nacional.	226
e.1.	Amparo de Garantías constitucionales propuesto por Constantino Juan Lekas, Thelma Robertson y Manuel Gavrilidis en contra del Señor Fiscal Tercero del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.(Apelación). Magistrado Ponente. Cecilio A. Castillero V.	226
e.2.	Recurso de habeas corpus como una medida preventiva, a favor de Jualian Melo Burbua y contra la Orden de Detención proferida por el Fiscal Auxiliar de la República, por el supuesto delito de falsedad. Corte Suprema de Justicia, Pleno, 24 de junio de 1992.	227
e.3.	Recurso de habeas corpus a favor de Rahfis Cristobal Comellys H. Y en contra del Fiscal Auxiliar de la República Magistrado Ponente. Fabian A. Echevers. Panamá 4 de enero de 1994.	228
C.	El Habeas Corpus Correctivo	230
	Acción de habeas corpus a favor de Domingo Luis Chavez contra La Directora Nacional de Corrección. Magistrado Ponente. Rafael A. González. Panamá 20 de junio de 1997.	233
	Acción de habeas corpus a favor de Jorge Enrique Camaño contra la Fiscal Décima de San Miguelito. Magistrado Ponente: Fabian Echevers. Panamá, 24 de agosto de 1994	235
D.	El Habeas Corpus Rectificador	238
	Habeas corpus a favor de Dionisio Alberto Castrellón contra el Director Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia. Magistrado Ponente: Fabian A. Echevers. Panamá, 12 de diciembre de 1995.....	239
E.	El Habeas Corpus de Oficio	245

CAPITULO CUARTO: LA ACCION DE HABEAS CORPUS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

I.	LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD AMBULATORIA EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	250
----	--	-----

A.	La Declaración Universal de los Derechos Humanos	252
B.	El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	254
C.	La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José)	257
D.	La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.	259
E.	Las Reglas Mínimas Sobre Tratamiento de Reclusos.	261
F.	La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumano s o Degradantes.	262
II	JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA (SENTENCIA DEL 20 DE ENERO DE 1989).	263
III.	OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL HABEAS CORPUS BAJO LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS.....	269
SECCION CUARTA		
	ASPECTOS METODOLOGICOS.....	277
A.	Muestreo.....	277
B.	Medios para la captación y desarrollo de la muestra.....	278
C.	Variable Independiente.....	278
D.	Variable Dependiente.....	278
SECCION QUINTA		
	RESULTADOS Y DISCUSION.....	281
SECCION SEXTA		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
	CONCLUSIONES.....	284
	RECOMENDACIONES.....	293
SECCION SEPTIMA		
	BIBLIOGRAFIA.....	300
ANEXO		
	Modelo Básico para la redacción de una Acción de Habeas Corpus	310
GRAFICAS		
Gráfica # 1		
	Acciones de Habeas Corpus confirmadas y negadas durante 1994 a 1998....	314

Gráfica # 2	
Clases de Acciones de Habeas Corpus Admitidas por la Corte Suprema de Justicia durante los años 1995 a 1997.....	315
Gráfica # 3	
Cuadro Porcentual de las Acciones de Habeas Corpus Confirmadas, Negadas Y desistidas por la Corte Suprema de Justicia en los años 1994 – 1998.....	316
Gráfica # 4	
Promedio de Acciones de Habeas Corpus tramitadas por mes por la Corte Suprema de Justicia en el año 1998.....	317
Gráfica # 5	
Total de Acciones de Habeas Corpus Admitida por la Corte Suprema de Justicia en los años 1995, 1996 y 1997.....	318
Gráfica # 6	
Autoridades Contra las Cuales se Interpusieron la Mayor Cantidad de Acciones de Habeas Corpus en los años 1997 y 1998.....	319
PROYECTO DE LEY	320
Proyecto de Ley N° 88 de 2 de marzo de 1999, “POR EL CUAL SE CREA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA SALA QUINTA DE INSTITUCIONES DE GARANTIA Y DE CASACION LABORAL, SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CODIGO JUDICIAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”, (Presentado al Pleno de la Asamblea Legislativa el 17 de marzo de 1999 a las 11:11 A.M., por la Ministra de Gobierno y Justicia, Arquitecta Mariela Sagel.....	321
I ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY	332
A- Generalidades.....	332
B- Críticas.....	335
C- Nuestra Opinión.....	339

AGRADECIMIENTO

Aún cuando esta sea una de las primeras páginas de nuestra presentación, cronológicamente ha sido la última que redacté, pero no por eso deja de ser la más especial, pues me da la oportunidad de **AGRADECER** a mi Maestro y Director de tesis, Doctor Edgardo Molino Mola, quien pese a estar inmerso en sus múltiples ocupaciones como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, siempre nos recibió con un gesto amable, siempre nos mantuvo abierta las puertas de su despacho, brindándonos su interés, su tiempo y sus conocimientos.

Por todo esto a **"MI MAESTRO POR SIEMPRE "**.
¡GRACIAS!

A la Firma de Abogados **CHEN-ESTRADA Y WONG**, quienes desde mis años de estudiante de Licenciatura siempre me han brindado su apoyo. En esta ocasión en que alcanzo otra meta de mi vida, le reitero **MI ETERNO AGRADECIMIENTO**.

DEDICATORIAS

"A las dos mujeres de mi vida.....

Mi Madre para quien todos mis esfuerzos y conquistas siempre me resultarán insuficientes por toda una vida de trabajo y sacrificios para darme una educación, principalmente en aquellos años difíciles; y

Mi Esposa por su ayuda, comprensión y paciencia, por todas aquellas noches de desvelo y madrugadas de trabajo en esta tesis de grado."

Al recuerdo de mi viejo (q.e.p.d.), que si estuviera aún con nosotros me lo imagino alardeándole a sus amigos de peña diaria en el Parque de Santa Ana..... diciendo: ¡Tengo un hijo master en leyes!

"A todas aquellas personas que en estos momentos, yacen presas en una celda oscura, cumpliendo los rigores de una detención ilegal, ordenada la mayoría de las veces por un funcionario desactualizado e incompetente, que todavía a los albores de un nuevo siglo, aún no ha comprendido que la detención preventiva es la última y más extrema de las medidas, que debe ser dictada, cuando ya no exista otra medida cautelar sustitutiva.

Preocupados por todo esto, esperamos que nuestras letras en este trabajo, se transformen en un grito de protesta desesperado que llegue a los oídos más receptivos diciendo: ¡Basta ya de detenciones ilegales!

SECCION PRIMERA
RESUMEN (Traducción)

RESUMEN

Nuestro trabajo de investigación **ANALISIS CRITICO DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL EN MATERIA DE HABEAS CORPUS, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES**, tiene como finalidad hacer una revisión integral de los últimos fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia, para analizar los criterios de este Tribunal Colegiado en cuanto a las nuevas modalidades y desarrollo del Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus, y así comparar estos últimos postulados de la jurisprudencia, con las opiniones de la doctrina.

LA FUNDAMENTACION TEORICA DEL TEMA LA CONFIGURAMOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMERO: En las generalidades de la Institución, su fundamento jurídico, su concepto y naturaleza.

SEGUNDO: En un análisis retrospectivo en cuanto a la evolución de la acción de Habeas Corpus en las distintas constituciones de nuestra vida republicana.

TERCERO: En el análisis de la figura de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia.

CUARTO: Al análisis de la Institución de Habeas Corpus en el Plano Internacional contenida en los pactos de Derechos Humanos, y por último nuestras conclusiones y recomendaciones en torno al tema.

Al final de nuestra investigación a manera de anexo, presentamos una serie de cuadros y gráficas, que explican la distribución del muestreo, así como un modelo tipo para la redacción de una acción de Habeas Corpus.

SUMMARY

Our investigation report on THE CRITICAL ANALYSIS OF THE NATIONAL JURISPRUDENCE IN THE MATTER OF HABEAS CORPUS, COMMENTS AND RECOMMENDATIONS is to make a complete review fo the latest decisions of ourSupreme Court of Justice, in order to analyze the criteria of this Court composed of several Judges in relation to the new characteristics and development of the Constitutional Procedural Institute of Habeas Corpus, and therefore to compare the latest decisions of the jurisprudence with the opinions of the doctrine.

THE THEORETICAL BASIS OF THE SUBJECT IS AS FOLLOWS:

FIRST: The Institution in general, its judicial basis, concept and nature.

SECOND: A retrospective analysis in relation to the evolution of the action of Habeas Corpus in the different constitutions of our Republic.

THIRD: The analysis of the jurisprudence of our Supreme Court of Justice.

FOURTH: The analysis of the Habeas Corpus Institution in the International field containing the Human Rights Convenants, and finally our conclusions and recommendations on the Subject

At the end of our investigation, we are enclosing as an Addendum a Group of charts and graphics, explaining the distribution of the same, awell as a format for preparing in action of Habeas Corpus.

SECCION SEGUNDA

INTRODUCCION

La culminación del pensum académico del programa de Post-Grado y Maestría en Derecho Procesal que por primera vez se ha dictado en la Casa de Méndez Pereira, exige cumplir los requisitos que nos acrediten con tales grados, con ese propósito presento a la consideración de mis maestros, mi trabajo de investigación intitulado **“Análisis Crítico de la Jurisprudencia Nacional en Materia de Habeas Corpus, Comentarios y Recomendaciones”**. Además de tratarse de un requisito indispensable para completar requerimientos administrativos regulados por la facultad de Derecho de la Universidad Nacional, lo cual representa un elemento imperativo para nosotros cumplir con todas y cada una de estas exigencias, las mismas no resultan más importante que el hecho de contribuir como docente en la producción de un manual que sirva a nuestros estudiantes de derecho, colegas, investigadores y demás personas interesadas en la ciencia jurídica, para el mejor estudio y comprensión de una garantía constitucional, que consagra y protege el bien máspreciado por el ser humano, después de la vida, el **“Derecho de libertad”**.

¿Por qué este tema?, Luego de revisar e investigar diferentes posibles temas a desarrollar sentimos la necesidad de trabajar en un tema que nos involucrara como individuos y nos diera la oportunidad de contribuir con el análisis de un aspecto de creciente vigencia jurídica y social. Por esta razón al revisar el tema del habeas corpus, encontramos en él, un vehículo para elevar enérgicamente nuestra voz de protesta, por las privaciones de la libertad ambulatoria, que a diario dictan autoridades inescrupulosas, ya sea por ignorancia, otras veces por

falta de actualización profesional sobre los últimos criterios de la doctrina y la jurisprudencia y en muchas ocasiones por soberbia e ineficacia de los funcionarios judiciales encargados de administrar justicia, que aún no han comprendido que la detención preventiva es la última alternativa procesal, que debe ser dictada cuando no exista modo sustitutivo alguno, ya sea por la gravedad del delito, o por la peligrosidad del autor, pero pareciera ser que nuestros funcionarios de instrucción encuentran en la detención preventiva, el remedio primario para iniciar la instrucción de un expediente sin tener en consideración que se vulnera uno de los bienes más preciados del género humano, “La Libertad”. Esto no solo demuestra una falta de criterio jurídico, sino que es un mal jurídico social que se agrava día a día.

En cuanto al desarrollo programático del tema, no pretendemos innovar con instituciones jurídicas, lo que hemos pretendido es darle una revisión integral, a aspectos ya revisados, actualizarlos y darle vigencia, sobre todo revisar los aspectos más trascendentales de los últimos fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia con relación al Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus.

Iniciamos, con un primer capítulo donde concretizaremos los aspectos conceptuales, naturaleza jurídica y generalidades de la institución de garantía, donde resaltaremos como fundamento básico, el derecho de libertad, y analizaremos los modos más comunes como se vulnera este sagrado derecho

como lo son: la captura, la aprehensión, la retención, la detención preventiva, el arresto, la prisión y sobre estos delimitaremos su alcance y sus diferencias, ya que existe la tendencia generalizada, incluso en círculos de profesionales de la abogacía, que hablan de estos términos como si fueran sinónimos en su caracterización jurídica. Luego de aclarar algunos aspectos conceptuales, y de semántica jurídica, nos avocamos al capítulo segundo, donde hacemos una revisión general de las diferentes constituciones que distinguen nuestra vida republicana, (1904, 1941, 1946, 1972 y 1983), y comparativamente en cada una de ellas resaltamos la institución del habeas corpus, sus similitudes, diferencias, cambios y postulados, así como la revisión integral de las normas adjetivas que desarrollan procesalmente los principios constitucionales en cada carta política como lo fueron, la ley 2 de 1908, la ley 8 de 1914, la ley 46 de 1956 hasta llegar a nuestro Código Judicial vigente de 1987.

Luego en el tercer capítulo nos detenemos a revisar los aspectos más trascendentales de la acción de habeas corpus, en concordancia con los más recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia donde se resaltan aspectos de importancia, así como también revisamos como la Corte crea nuevas caracterizaciones y modalidades en materia de habeas corpus como lo son el habeas corpus preventivo, el correctivo y el rectificador.

Como corolano a nuestro estudio, en el cuarto capítulo analizamos la Acción de habeas corpus, con respecto a la norma procesal internacional, con

particular atención a la protección de la Libertad Física en los instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal De Los Derechos Humanos, los pactos internacionales de Derechos Humanos, y algunas consideraciones con respecto al Habeas Corpus, vertidas por la Corte Interamericana De Justicia. La parte final de nuestra investigación contiene una serie de conclusiones y recomendaciones en torno al tema, y un anexo donde analizamos estadísticamente por medio de gráficas algunas características de la aplicación de la Institución de la práctica tribunalicia; así, de esta manera trataremos de mejorar su eficacia, y tratar de cambiar la actitud de nuestros funcionarios de instrucción en cuanto a aplicar la figura última y extrema de la Detención Preventiva, como si fuera el primer o único recurso que la Ley dispone para contribuir al trabajo de instrucción e investigación de los delitos, sumado el hecho que con la presión que ejercen los procuradores y fiscales, a través de los medios de comunicación social, se ha creado una especie de tolerancia a la conculcación de un derecho tan importante y delicado como lo es el de **LIBERTAD AMBULATORIA.**

SECCION TERCERA
FUNDAMENTACION TEORICA

CAPITULO PRIMERO

FUNDAMENTO, CONCEPTO, NATURALEZA Y GENERALIDADES

“La Libertad” es aquella facultad, según la cual corresponde al hombre hacer lo que no perturba los derechos de otros; ella tiene por base la naturaleza; por regla la justicia; por protectora la ley; su límite moral es la máxima:” No hagas a otro lo que no quieres que se hiciese a ti mismo...”.

Extracto de la Constitución Francesa de 1793.

I. LA LIBERTAD:

Para dar inicio a este trabajo sobre la acción de habeas corpus y los postulados más significativos de índole procesal marcados por nuestra jurisprudencia, es de rigor comenzar analizando su fundamento cualitativo, es decir el derecho de libertad, derecho este que ha sido elevado por la humanidad a la categoría de derecho humano, ya que su existencia, va concatenada a la propia existencia del hombre. La suma de los derechos del hombre y su mayor conquista social, a mi sentir, es la garantía de su "libertad"; expresión que no puede entenderse en su sentido naturalista, concepto arcaico de movimiento sin ninguna limitación, el cual pugna con la concepción del hombre como ser social y por lo tanto la "libertad" se enmarca dentro de determinados y precisos parámetros impuestos por la sociedad en un momento histórico.

Siguiendo este orden de ideas, podemos decir que la libertad se define como la forma de desarrollar todos nuestros derechos y las garantías legales y constitucionales, los que sólo tienen sentido en la medida en que se preserven esa libertad, la cual tiene como límite hasta cuando se lesione el derecho ajeno. Somos entonces libres para pensar, auto determinarnos, movilizarnos, elegir, amar, expresarnos, etc.

Al respecto el Maestro Castán Tobefías dice: "La libertad se debe condicionar con el orden, a través de normas convenientes que

presuponen una autoridad que las dicte y las mantenga. El ejercicio de la Libertad requiere una serie de instituciones sociales y jurídicas que preparen el clima en el que esa libertad pueda desenvolverse” ⁽¹⁾

Si hacemos un análisis de la concepción de Castán Tobeñas notamos que se fundamenta en que este derecho de libertad tiene que estar garantizado por normas sustantivas y adjetivas, que de una manera coercitiva garanticen este preciado derecho.

Este derecho aparece consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1º que dice:

Artículo 1º: “Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”

El respeto de la libertad, se inicia en el hogar y se refleja en el fomento de un ambiente de libertad entre los miembros de una familia: de los padres hacia los hijos y de éstos hacia los padres; en la comunidad la libertad se practica mediante el uso adecuado de los derechos sin perjudicar a los demás miembros de la sociedad. En el país, se requiere que las autoridades o los gobernantes,

⁽¹⁾ CASTAN TOBEÑAS, José LOS DERECHOS DE LOS HOMBRES. Tercera Edición, Madrid, 1985, p. 64

mediante la creación de instituciones y mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de este derecho. El disfrute de la libertad requiere del respeto mutuo de este derecho por parte de los miembros de la comunidad internacional. Actualmente la libertad como norma social está en crisis por los excesos de violencia y terrorismo que amenazan la autonomía individual y social.

II. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD FÍSICA:

Desde una perspectiva eminentemente procesal son diversas las formas en que se puede ver restringida la libertad física de un individuo, y consideramos de interés diferenciar cada una de ellas como lo son: La captura, La Aprehensión, La Retención, El Arresto, y La Prisión.

A. LA CAPTURA:

Es una medida de carácter policivo que se hace efectiva mediante orden de autoridad competente y que consiste en aprehender materialmente a un individuo, de conformidad con las normas procesales pertinentes.

En el Estatuto Procesal panameño se dan varias circunstancias en las cuales procede la captura:

La mal denominada “Captura en Flagrancia”, contenida en el Artículo 2155 del Estatuto de Procedimiento Penal, el cual crea una confusión con el precepto del Artículo 15 de la Constitución Nacional que se refiere al concepto “aprehensión” en estado de Flagrancia o In Fraganti, en el que faculta a cualquier persona para conducir ante el Juez a un delincuente sorprendido en la ejecución de un hecho punible, pero que difiere de la connotación jurídica de la captura.

Del Artículo 2155 podríamos formalizar la siguiente regla de proceder para el aprehendido en Flagrancia:

Quien sea sorprendido en flagrancia será capturado por cualquier autoridad o persona y conducido en el acto, o a más tardar en el término de la distancia, ante el Juez competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir informe sobre las causas de la captura. De este informe se dejará constancia en un acta que suscribirán el Juez o quien haya realizado la captura. Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a quien hubiere realizado la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el Juez, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición del juez dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el informe de que trata el párrafo anterior. Cuando el hecho punible tenga señalada pena no privativa de la libertad o pena de arresto,

una vez el capturado haya rendido indagatoria se le dejará en libertad, firmando un acta de compromiso de presentación al juzgado cuando se le solicite.

Sobre este particular nuestra norma adjetiva reza así:

Artículo 2149: Existe flagrancia cuando el infractor es sorprendido en el momento de estar cometiendo el hecho punible, lo mismo que cuando es sorprendido después de cometerlo y como resultado de la persecución material a que es sometido.

También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, o el instrumento con que aparezca cometido o presente manchas, huellas o rastros que hagan resumir fundadamente su autoría o participación.

Hay asimismo flagrancia cuando el hecho punible ha sido cometido en el interior de una residencia o cualquier otro recinto cerrado y el morador retiene al infractor a la vez que requiere la presencia del funcionario de investigación o de cualquier para entregárselo y establecer la comisión del hecho.

La captura es facultativa por parte del Juez de lo Penal en los siguientes eventos: En los procesos por delitos sancionados con pena de prisión cuyo

mínimo sea o exceda de dos (2) años, podrá librarse orden escrita de captura contra el imputado para efectos de la indagatoria. De la misma forma procederá cuando en contra de la persona que deba ser indagada se haya proferido en otro proceso medida de aseguramiento de caución o detención.

La Policía Técnica Judicial sólo puede aprehender a las personas en los casos punibles en los cuales el delincuente se encuentre en estado de flagrancia o en la captura públicamente requerida.

También es procedente la captura para el cumplimiento de una pena de prisión o arresto, en los casos que no ha concedido condena.

El capturado tiene como principales derechos: El saber la razón de su captura y los motivos; así mismo se puede entrevistar con un profesional del derecho de manera libre y recibir consejo de éste; también puede exigir se le comunique a una persona determinada sobre su limitación de la libertad física, y por último puede rendir versión libre en presencia de su abogado, ante el instructor sobre los hechos en la declaración indagatoria.

B. APREHENSIÓN:

La aprehensión consiste en la privación física o material de la libertad de locomoción del delincuente sorprendido in fraganti; la cual puede ser ejecutada

por cualquier persona que halle al criminal en tales condiciones y lo conducirá ante el Juez. Este fenómeno jurídico es una excepción a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Nacional que dice así:

Artículo 21: Nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los Ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, si la pidiere. El delincuente sorprendido in fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.

Por lo tanto, debe distinguirse el fenómeno de la "captura" con el de la "aprehensión," pues en el primero se requiere orden escrita de autoridad competente, mientras el segundo surge de la necesidad de evitar la fuga del delincuente sorprendido en la ejecución del hecho punible In Fraganti"; aprehensión que puede ser realizada por cualquier persona e incluso penetrar en su domicilio la autoridad, si se refugia en él, sin previa orden de allanamiento. En concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional, en cuanto al socorro de las víctimas en su domicilio, sin necesidad de orden judicial.

De igual manera La Ley No. 16 de 9 de julio de 1991. "Por la cual se aprueba la ley orgánica de la Policía Técnica Judicial" reafirma este concepto de aprehensión, como una limitación a la libertad física, en casos de flagrancia, cuando en su artículo segundo, numeral cinco (5) dice:

**Artículo 2: Son funciones de la
Policía Técnica Judicial:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. **Aprender por iniciativa propia**
al delincuente sorprendido
infraganti y ponerlo
inmediatamente a órdenes del
respectivo Agente del Ministerio
Público. (Lo subrayado es
nuestro)

De esta manera reiteramos el fundamento del concepto de aprehensión, en el cual no existe una orden escrita de detención, sino que se da oficiosamente para evitar la fuga del delincuente sorprendido in fraganti.

C. LA RETENCIÓN:

Mucho se discute sobre la fundamentación jurídica, de este estado restringido de la libertad ambulatoria, lo cierto es que, expresamente la norma sustantiva no habla de retención, en la práctica, se ha interpretado con base en que la Ley No. 16 de 9 de julio de 1991, la cual aprueba la Ley orgánica de la

Policía Técnica Judicial, le permite a los miembros de la institución “practicar la diligencia preliminar que conduzca al esclarecimiento y aseguramiento del delincuente”, (artículo No. 2 de la Ley 16 de 9 de junio de 1991).

Esta facultad en concordancia con el artículo 21 de la Carta fundamental que en el párrafo final del artículo No. 21 dice:

Nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a ordenes de la autoridad competente.
Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la Ley. (Lo subrayado es nuestro)

De la concordancia de estos dos postulados jurídicos, la Policía Técnica Judicial ha interpretado, que para practicar sus diligencias de investigación preliminar, tienen hasta 24 horas, antes de que el investigado, sea puesto a órdenes de una autoridad competente. De aquí que en este periodo de 24 horas el individuo en investigación no esta detenido, sino “retenido” por investigación hasta por 24 horas.

Nosotros no comulgamos con esta posición la cual, es producto de una interpretación sui generis, por parte de los encargados de la interpretación

jurídica de la Policía Técnica Judicial, pues de una concepción extremadamente extensiva del artículo 21 de la constitución nacional, pretenden justificar una situación a todas luces ilegal de privación de la libertad corporal del individuo.

D. LA DETENCIÓN PREVENTIVA:

Es una orden judicial, ejercida a nombre y representación del Estado, por un Funcionario Público revestido de tal autoridad y la cual tiene como principal finalidad impedir que el presunto culpable se sustraiga a la acción de la justicia y para tal efecto la persona a quien se le decreta tal medida de aseguramiento se le captura y se le restringe de la libertad física a través de su encarcelamiento, hasta que la orden sea revocada o se le conceda la libertad provisional o definitiva, según el caso, o se le sustituya por otra medida cautelar como presentarse cada cierto tiempo... o no salir del país, casa por cárcel, etc.

Este tipo de restricción de la libertad tiene justificación, acorde con la mayoría de los tratadistas en razón de que con ella se pueda proteger la misma seguridad del procesado; se protege la prueba contra posibles manipulaciones del acusado; se facilite el cumplimiento de las diligencias procesales con la comparecencia del acusado al sumario; se garantiza el cumplimiento de la pena, si el reo fuere condenado y así mismo se protege a la sociedad aislando un fáctico delincuente.

En nuestro ordenamiento jurídico la detención preventiva, se encuentra regulada en el artículo 2148 del Código Judicial, donde notamos que su caracterización procesal, es que la misma solo procede cuando se trata de delitos que tienen señalada pena de dos (2) años de prisión, o en caso de flagrancia. Así lo deja establecida la norma adjetiva contenida en el artículo 2148 del Código Judicial cuando dice:

Artículo 2148: Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar su detención preventiva cumplimiento de las formalidades previstas en este Código.
En ningún caso podrá decretarse detención preventiva cuando se proceda por delitos contra el honor.

Cabe destacar del precitado artículo que el mismo excluye los delitos contra el honor, y los artículos concordantes, también exceptúa de la detención preventiva a la mujer embarazada que amamante a su propia prole o una persona que se encuentre en estado grave de salud, o aquellos que hayan cumplido los 65 años de edad (artículo 2147-D).

E. EL ARRESTO:

Es una pena restrictiva de la libertad, pero por periodos cortos de tiempo como máximo un (1) año, tales penas las pueden ordenar los corregidores de Policía, con fundamento al artículo 878 del Código Administrativo que dice:

Artículo 878: Las penas que se imponen por las contravenciones preceptivas y prohibitivas de este libro a los responsables de ellas, son las siguientes:

- 1ª. Trabajo en obras públicas;
- 2ª. Arresto;
- 3ª. Multa; y
- 4ª. Confinamiento (Fue derogado)
- 5ª: Fianza y buena conducta.

También tiene carácter de pena ciertas obligaciones especiales, consiguientes a la falta cometida, como la de disolver un baile o reunión públicas, y otras análogas. El comiso, o sea la pérdida de los objetos empleados en la comisión de la falta, se hará efectivo en los casos a que se refiere la ley, como la indemnización de daños y perjuicios procedentes de la falta cometida.

Cabe destacar que la única pena restrictiva de la libertad, contenida en el Código Administrativo, sería la de "arresto", ya que la pena de confinamiento, que también restringía la libertad ambulatoria, fue abolida, por la Ley No. 71 de 1938. De aquí pues, notamos que la pena de arresto tiene su fundamento, como

una sanción de carácter administrativo, y la misma, no podrá ser mayor de un año. Con base al artículo 898 del Código Administrativo, que lo regula expresamente de esta manera:

Artículo 898: Las penas aplicables en una misma sentencia no ascenderán: de un año las de trabajo en obras públicas, arresto y fianza de buena conducta; (Lo subrayado es nuestro)

Reafirmando el criterio de que el arresto se refiere a penas privativas de la libertad por periodos cortos de tiempo, que según el precitado artículo del Código Administrativo, tiene como máximo de tiempo un (1) año.

En adición a lo expuesto, podríamos establecer que si bien es cierto el arresto, tiene su génesis, como una pena de carácter administrativo, también en el ámbito jurisdiccional existe el arresto, con su virtual característica de una pena privativa de la libertad por cortos periodos de tiempo. Así de una perspectiva eminentemente procesal revisamos los poderes de los cuales esta investido el juez moderno, notamos que "El Poder de Coerción", con base a este poder los jueces pueden imponer sanciones a quienes se niegan al cumplimiento de sus mandamientos y diligencias, como lo es el caso de imponer pena de "arresto" hasta por cinco (5) días a quienes le faltan el respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. Así lo establece el numeral 2 del artículo 202 del Código Judicial cuando dice:

Artículo 202: Los Magistrados y Jueces tendrán las siguientes facultades:

1. ...

2. Imponer pena de arresto hasta por cinco (5) días a quienes la falten el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

Para imponer esta pena es necesario comprobar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho o con prueba testimonial sumaria.

La sanción se impondrá por medio de resolución motivada, que sólo será susceptible del recurso de reconsideración dentro de los tres días siguientes a su notificación personal.

En firme la resolución, se remitirá copia de ella correspondiente funcionario de policía del lugar, quien deberá cumplirla inmediatamente;

Si analizamos el precitado artículo del Código Judicial, notamos que la pena de arresto, en materia jurisdiccional, mantiene las mismas características que en el ámbito administrativo, como lo es que se trata de una restricción de la libertad corporal, pero por periodos cortos de tiempo. Cabe destacar también que el numeral segundo de la norma transcrita, mediante sentencia de 19 de noviembre de 1993 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 202 numeral 2, párrafo segundo y la frase "que sólo será susceptible del recurso de

reconsideración”, la Corte dejó aclarado que dicha norma no vulnera el artículo 32 de la Constitución.

F. LA PRISIÓN:

Se denomina pena de prisión a aquella pena restrictiva de la libertad, más grave y más larga que el arresto, y esta se cumple en establecimientos especiales designados por la Ley que pueden ser penitenciarias o cárceles. Nuestro ordenamiento penal sustantivo desarrolla el contenido y alcance de la pena de prisión en el artículo 47 del Código Penal, cuando dice:

Artículo 47: La pena de prisión consiste en la privación temporal de la libertad y se cumplirá en los lugares que la Ley determine, de manera que ejerzan sobre el sancionado una acción de readaptación social. La pena de prisión que se imponga por un solo hecho punible puede durar de 30 días a veinte años.

De aquí, podemos concluir que la prisión se trata de penas restrictivas a la libertad ambulatorias, por considerables periodos de tiempo, asignados por la Ley penal, contra conductas antijurídicas, típicas y culpables, y que pueden tener una duración hasta de 20 años, y la ordena única y exclusivamente las

21

autoridades jurisdiccionales, como producto de un Proceso, por medio de una sentencia en firme.

A diferencia de la pena de arresto, que si bien es cierto, también restringe al individuo de la libertad ambulatoria, se trata de restricciones por cortos intervalos de tiempo, que van desde cinco (5) días, hasta un máximo de un (1) año, y la puede ordenar tanto la autoridad jurisdiccional como la autoridad administrativa.

II. CONCEPTO DE HABEAS CORPUS:

Según la definición de la Academia, de la lengua española es el, "derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndole, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse".

El habeas corpus, que se traduce como "que tengas el cuerpo" y tiene su origen en las actas y el Writ que en Inglaterra garantizan la libertad individual, permite no sólo a cualquier persona presa ilegalmente, sino asimismo a cualquier otra que se interese por ella, acudir a la High Court Of Justice en demanda de un auto por el cual se ordene la presentación ante el tribunal requirente del cuerpo del detenido por quien o quienes le hubiesen privado de libertad. Queda sobrentendido que el requerimiento va dirigido a las autoridades

de toda clase; porque lo que se trata de aclarar es, precisamente, si ellas han adoptado o no esa medida dentro de su competencia y manera legal. Según el Diccionario de Derecho Procesal del Dr. Víctor De Santos: "El habeas corpus es una acción que termina con el objeto propuesto, una vez obtenido el amparo de la libertad o derecho individual restringido. Es una acción institucional sui generis, de derecho público. El habeas corpus es una acción sumaria, de una sumariedad llevada al extremo hasta convertirla en una garantía inmediata. El objeto de la demanda consiste en el amparo de la libertad afectada, y la acción, que no es nunca juicio contradictorio, termina con la resolución, sea ella favorable o adversa".⁽²⁾

El habeas corpus ha constituido, desde tiempos antiguos, la suprema garantía de la libertad individual frente a los abusos y arbitrariedades de las autoridades ejecutivas.

De ahí que, por su urgencia, se considerase que todos los jueces eran competentes para intervenir en las acciones de habeas corpus, y que la orden que ellos diesen decretando la libertad de los detenidos, tuviese, que ser inmediatamente acatada, sin que sobre este particular cupiese excepción ninguna alegable por la autoridad administrativa para incumplir aquella orden.

⁽²⁾ DE SANTOS, Víctor DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL, Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 1998, p 203

Como quiera que la finalidad principal de este trabajo, es analizar las corrientes dominantes de nuestra jurisprudencia, en materia de habeas corpus, es imperativo comenzar analizando la posición de nuestra corte suprema en cuanto a la conceptualización, naturaleza y característica de la figura en estudio.

Sobre esta particularidad del habeas corpus, ha expresado la Corte Suprema de justicia lo siguiente:

“Para la decisión de este negocio constitucional, resulta necesario recordar la naturaleza y características de la acción de habeas corpus. Constituye una de las garantías superiores inherentes al Estado de Derecho y presupone la existencia de un interés fundamental, concretamente el de la libertad individual, en potencial peligro de vulneración por lo que requiere de protección inmediata.”⁽³⁾

El precepto constitucional de consagración de la libertad individual en referencia establece, que el trámite de esta acción de garantía constitucional, ha de hacerse con prelación a cualquier otro caso pendiente en el tribunal que conoce el habeas corpus y, “mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles”. En lo que respecta a los tribunales competentes para conocer el habeas corpus, su

⁽³⁾ Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 18 de julio de 1996

conocimiento es de competencia de los tribunales municipales, de circuito y de los tribunales superiores del ramo penal y del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo cual va a depender el que conozcan unos u otros tribunales de esta acción, del mando y jurisdicción de la autoridad que ordenó la detención que se demanda por ilegal o arbitraria, tal y como lo establece el artículo 2602 del Código Judicial.

En fin y a manera de conclusión sobre el concepto, lo que se ha expuesto, el habeas corpus es, como nos lo dice la Corte Suprema de Justicia de nuestro país:

“... un mecanismo procesal constitucional de naturaleza especial, con ámbito de aplicación restringido, instituido para garantizar la eficacia del derecho fundamental de la libertad de locomoción, frente a las restricciones arbitrarias a que pueda ser sometido”⁽⁴⁾

Del extracto de la sentencia de nuestro máximo Tribunal Colegiado, queda claro que el Habeas Corpus es un mecanismo procesal, es decir, una acción, y que esta acción se desenvuelve a través, del derecho procesal constitucional, como una rama independiente del derecho procesal, y que tiene

⁽⁴⁾ Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 11 de julio de 1993

como finalidad primordial garantizar la libertad ambulatoria del individuo, frente a los abusos y arbitrariedades, del Ministerio Público y de los administradores de justicia, así como de todas las autoridades con potestad de privar de la libertad a las personas.

Sin ánimo de hacer una reseña histórica retrospectiva en este trabajo, podríamos decir que el alcance del "Habeas Corpus" en el mundo contemporáneo difiere fundamentalmente del que se le diera originariamente por los Ingleses en el año 1215 con base a la Carta Magna del Habeas Corpus Act.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Sin duda alguna el alcance del habeas corpus en el mundo contemporáneo difiere fundamentalmente del que se diera originalmente por los ingleses con el habeas corpus act con base en la Carta Magna del año 1215, allí se consagró el derecho de los ciudadanos a las libertades individuales, garantizadas por el amparo de los Magistrados. Y sólo quedaba protegido en realidad, una de ellas, que era la libertad física, ya que por aquella época solamente eran reconocidas dos libertades, la corporal y la domiciliaria. Situación que observaremos al estudiar las diferentes fuentes, que le da la historia a la institución del habeas corpus a través de los tiempos.

A- EN LA ANTIGUA ROMA:

En el Derecho Romano no existió fenómeno jurídico que de manera efectiva se pareciera al verdadero objeto del habeas corpus; sin embargo, algunos autores dicen que los **"TRIBUNOS"** en Roma constituyen un antecedente, puesto que éstos podían ejercitar a favor de los Plebeyos el auxilio para revocar el exceso de poder, pero no se conocía el derecho inviolable de la libertad personal. Al respecto anota el profesor Carlos Sánchez Viamonte: "El Tribuno ejercía una facultad discrecional de "auxilio" que lo dotaba de un poder personal enorme, sin reconocer derecho alguno al plebeyo que no tuviese la suerte de acogerse a tiempo al amparo de su casa o de su persona. En cuanto al **"JUSTICIA MAYOR"** era en realidad una especie de árbitro, que tenía su función dirimir los pleitos o conflictos que suscitare la aplicación del derecho público contractual legislado en los fueros que deslindaban posiciones entre el rey y los hombres de la clase noble.

Ni el Tribuno, ni el Justicia Mayor obraban como jueces obligados a reconocer al individuo una libertad que le era propia y que ellos debían garantizar obligatoriamente." ⁽⁵⁾

Hay autores, que consideran el verdadero origen del Habeas Corpus hay que encontrarlo en el interdicto "Homine Libero Exhibendo", que estableció la diferencia entre el hombre libre y el esclavo siervo, regresándole a aquella

⁽⁵⁾ **VIAMONTE SÁNCHEZ, Carlos** **EL HABEAS CORPUS. LA LIBERTAD Y SU GARANTÍA.** Editorial Librería Jurídica Buenos Aires, 1927, pág. 12

posición que le correspondía por su clase social, amparando al primero, mediante una acción que según los sistemáticos de esta tesis se anticipa históricamente al Habeas Corpus Inglés.

Pero este interdicto se daba sólo a favor del hombre libre a quien se hubiera privado de tal condición por parte de su amo, que ejercía ilegítima potestad y así se explica que fuese el cuerpo el que debía ser exhibido y lo que se rescataba por medio de una acción posesoria.

En este sentido, podemos agregar que el estado romano por su poderío y fuerza no consideró al individuo como un valor en sí mismo. La libertad que se tenía era sólo para cierta clase privilegiada, por lo tanto, no reconoció, ni aseguró la libertad individual como un derecho.

Por otro lado, los tribunales romanos fueron magistraturas que si bien poseían atribuciones, las cuales les permitía hasta anular los excesos de poder arbitrario, no reconocieron la libertad individual a los súbditos romanos como un derecho del hombre y como un derecho del ciudadano.

B. EN EL FUERO O MANIFESTACIÓN DE ARAGÓN:

Este, en 1287 reconoce el principio de la libertad personal, pero como un privilegio a favor de ciertos súbditos y por lo tanto no tiene la magnitud actual de amparo o garantía a través de la consagración de un derecho.

En 1287, mediante el privilegio del Reino de Aragón se le impone al rey como obligación la de respetar los privilegios de carácter feudal, para limitar el poder monárquico, pero se reconocía un poder al individuo, se reconoce y establece el derecho de libertad personal como un privilegio especial para determinados individuos.

Estos jueces de la justicia Mayor de Aragón no tuvieron la obligación de reconocer al individuo una libertad que le fuera propia y que debía asegurarse obligatoriamente.

El justicia Mayor de Aragón se constituyó así en un magistrado a la figura de un funcionario tutelar de los fueros elegidos de común acuerdo con el rey y el pueblo, señalando los límites de sus facultados, fuero y privilegios.

En síntesis, hay quienes sostienen que se puede encontrar en los fueros de Aragón ciertas características y elementos que sirven de antecedentes al Habeas Corpus inglés, como son: reconoce ciertos derechos al individuo, algunos medios para garantizar los derechos y limita el poder público y ciertas facultades, fueros y privilegios.

C. EN EL FUERO DE VISCAYA:

Al reconocer el principio de la libertad individual y ordenar a los funcionarios respetar esa Ley, es sin duda alguna una de las fuentes del "habeas corpus".

El fuero de Vizcaya, creado en 1527, también mencionado como antecedente del habeas corpus inglés por algunos autores, reconoce el principio de la libertad individual y lo consagró.

Pero lo cierto es que no existió semejanza alguna entre el Fuero de Vizcaya y el habeas corpus, ni antecedente, porque aquél contuvo el principio de la libertad individual y su garantía residió en la potestad y obligación judicial, muy por el contrario, para el habeas corpus inglés es una garantía expresa de la libertad del individuo.

D. EN LA CARTA MAGNA DEL REY JUAN:

En el año 1215 el rey Juan de Inglaterra, consignó el principio de la libertad individual y sentó las bases de la actual Constitución, quedando así convertida en la ley fundamental de Inglaterra: "Hemos concedido también a todos los hombres libres de nuestro reino, para nosotros y nuestros herederos siempre todas las infraescritas libertades, para que las tengan y posean ellos y

sus herederos... Ningún hombre libre será tomado o apisionado, desposeído; ni no dispondremos sobre él; ni lo pondremos en prisión sino por el juicio legal de los pares o por la Ley del país.... (Carta Magna).

Igualmente, hay tratadistas que señalan que a pesar del expreso reconocimiento del "Writ of Habeas Corpus Act" inglés de 1679, con el tiempo fue fácilmente burlado por quienes disponían de la fuerza, aun cuando su propósito fuera garantizar una de las libertades o derechos individuales, la libertad corporal o física de la persona, la que, con exclusión de la inviolabilidad del domicilio, éstas fueron las únicas garantías reconocidas en la Carta Magna de 1215.

En la ley Inglesa se diferencia el habeas corpus verdadero del simple recurso contra detenciones ilegales, al determinar ese recurso separadamente de la acción a los súbditos habitantes de Inglaterra que fuesen enviados presos a Escocia o Irlanda.

E. LA LEY DE HABEAS CORPUS DE CARLOS II REY DE INGLATERRA:

En esta Ley se dieron los medios hábiles a los individuos para salvaguardar el principio de la libertad individual consagrada por la Carta Magna: "Ley para asegurar mejor la libertad del súbdito y para impedir prisiones más allá

de los mares, llamada comúnmente "Ley de Habeas Corpus". (Apéndice Ley de Habeas Corpus. Carlos II 1679)

Pero no fue sino hasta 1679, cuando se dicta la "Ley de Habeas Corpus" en Inglaterra y se instituye expresamente el habeas corpus que hasta ese momento había constituido un principio proclamado teóricamente por la Carta Magna de 1215; constituyendo, a partir de esa Ley, una garantía de la libertad corporal o física de la personal para todos los súbditos ingleses, e impedir toda detención arbitraria y autorizando al mismo arrestado o a su representante requerir al Juez competente la expedición de un decreto mandando el traslado a juicio del imputado, dentro de un término máximo de veinte días.

III NATURALEZA JURIDICA:

Su naturaleza es la protección del derecho a la libertad personal, por el que se trata de impedir que la autoridad o alguno de sus agentes pueda prolongar de forma arbitraria la detención o la prisión de un ciudadano. A través del habeas corpus, una persona privada de libertad puede obtener su inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que resolverá acerca de la legalidad o no de la detención. Se caracteriza por ser un procedimiento sumarísimo y rápido que debe finalizar en un periodo breve de tiempo. Es también un proceso sencillo y carente de formalismos que no precisa la presencia de abogado. El habeas corpus procede no sólo en los casos en que,

en principio, se ha producido una detención ilegal, sino también en aquellos otros en los que la detención ha sido conforme a la Ley, pero se han violado los derechos humanos del reo, o se ha cumplido un porcentaje de la pena y se ha observado buena conducta y readaptación social.. Dado que el procedimiento de habeas corpus tiende a la protección de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad, sino también su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos e incluso puede iniciarse de oficio por la autoridad judicial competente. Si concurren los requisitos para su tramitación, el Tribunal de habeas Corpus inicia el procedimiento ordenando a la autoridad que lleve a su presencia a la persona detenida. El Tribunal de habeas Corpus, una vez que ha escuchado al detenido y a las personas implicadas en el arresto, decide acerca de la legalidad o no de la misma, y decreta, en caso de apreciar irregularidades, el rápido enjuiciamiento del detenido (si es que la detención ha devenido ilegal por haber transcurrido el plazo establecido por la ley), o bien su libertad.

En nuestro ordenamiento positivo, la naturaleza jurídica, y la real función protectora del habeas corpus, está contenida en el artículo 23 de nuestra carta magna que dice:

“Artículo 23: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante el recurso de habeas corpus. . .”

El citado artículo de nuestra Constitución instituye como requisito para que proceda esta acción que la detención se haya efectuado de forma ilegal, concediéndole al habeas corpus su verdadera naturaleza en la ejecución del acto violatorio a la Constitución o a la Ley.

Sostenemos que es aquí donde radica la esencia propia de esta institución, porque si bien es cierto que la acción funciona cuando una persona está privada de su libertad, sólo procede cuando la detención es producto de una actuación contraria a derecho.

Si la privación de la libertad ambulatoria es llevada a cabo dentro del más estricto orden constitucional o legal, el individuo tiene otros medios para recuperar su libertad, como serían la fianza de excarcelación, o el incidente de controversia por ejemplo, y otros que la Ley establece.

Vemos pues que la importancia del habeas corpus, lo constituye el modo como se consuma la detención, ya que su aplicación está supeditada a que la misma tenga un carácter ilegítimo, porque la sola privación física de la persona no supone la preexistencia de una acción ilegal.

IV. CONCEPCIÓN PROCESAL DEL HABEAS CORPUS, COMO UNA ACCIÓN, Y NO COMO UN RECURSO.

La conceptualización procesal del habeas corpus está en vigencia como una institución garante de la libertad física o corporal de los individuos en todo Estado de Derecho.

La conciencia política de una sociedad educada en el respeto de las libertades y los derechos humanos son fundamento que hace de esta figura un instrumento procesal efectivo en el cumplimiento del objetivo para la cual fue creado.

La proyección procesal es de vital importancia y la misma va más allá de lo estrictamente dogmático. La Constitución Nacional al referirse al habeas corpus utiliza el vocablo jurídico RECURSO.

El libro IV, del Código Judicial, que lo desarrolla, utiliza la concepción procesal ACCIÓN, de acuerdo a la pirámide jurídica de Kelsen, por ser la Constitución de jerarquía superior al Código Judicial, debería prevalecer jurídicamente la denominación procesal RECURSO de habeas corpus.

Al respecto cabe destacar que en el campo doctrinal existe marcada controversia para definir al habeas corpus, sea como RECURSO o como ACCIÓN. Pues, no hay uniformidad sobre cual es el ala dominante de la doctrina, si la constitucionalista pura, o la procesalista.

Analicemos la posición de algunos autores que al respecto han propugnado la concepción por ACCIÓN y consideran que la misma se da “por simple inercia consuetudinaria, y así se ha universalizado entre nosotros el erróneo calificativo de “RECURSO” aplicado al habeas corpus la fácil demostración en contrario que resulta recordar que el mismo ampara la libertad restringida incluso para algunos, aun privadamente, y un RECURSO sólo procederla contra actos de autoridad.”

No compartimos estas opiniones, cuando condicionan la denominación de recurso que la misma se produce por simple “inercia consuetudinana” llevada a cabo por particulares, ya que en nuestro país, la Constitución no ampara la privación de la libertad practicada por particulares dentro del ámbito de aplicación del habeas corpus. Pues esta conducta se encuentra tipificada como delito contra la libertad individual. Lo que si compartimos es la utilización conceptual de que estamos frente a una **ACCIÓN**, y no ante un **RECURSO**.

Sobre esta línea de conceptualización procesal, el peruano García Belaunde, el cual sobre el tema que nos ocupa ha sostenido: “**LA ACCIÓN** ..., es la facultad de demandar protección de un derecho ante los órganos jurisdiccionales, es decir, es poner en marcha el aparato del Estado para la protección de un derecho conculcado. Así, mientras el recurso en estricto sensu es el medio de impugnación que dentro de una causa se plantea una de las partes solicitando una nueva consideración (apelación, queja, etc.)

la acción es la facultad específica de hacer valer en la vía judicial la reparación de un derecho violado. Dentro de este orden de ideas es fácil advertir que en puridad el habeas corpus no es un recurso, sino propiamente una acción" ⁽⁶⁾

De este análisis, salta a la vista en claridad meridiana que en nuestro medio el habeas corpus es una **ACCIÓN**, ya que es la facultad judicial, para reparar un derecho violado.

Los recursos, son medios de impugnación (reconsideración, apelación, revisión, etc.), que promueven una de las partes para que se modifique una resolución, producto de un proceso.

Los procesalistas nacionales también ha expresado sus puntos de vista sobre la denominación procesal del habeas corpus, así pues, nuestro profesor de maestría Dr. Jorge Fábrega Ponce, en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, ha manifestado: "El recurso es un acto del proceso y por ello resulta impropio hablar de recurso cuando se trata de iniciar un nuevo proceso. si ocurre, por ejemplo, en nuestra ley de instituciones de Garantía en que impropriamente se habla de Recurso de habeas corpus" ⁽⁷⁾

⁽⁶⁾ **GARCÍA BELAUNDE, Domingo** El Habeas Corpus en el Perú, Universidad Nacional San Marcos, Dirección Universitaria, de Biblioteca y Publicaciones, Lima, 1979, p. 108

⁽⁷⁾ **FÁBREGA P. Jorge** INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Editorial Serviprensa, S.A., 1978, p. 381

Nuestro profesor Fábrega, se refería a la Ley 46 de 1956 que desarrollaba las instituciones de Garantías, la cual fue derogada por el nuevo código judicial, que entró en vigencia en 1987, y que incorporó la denominación procesal ACCIÓN DE HABEAS CORPUS.

En contra posición, el maestro César Quintero, critica la corriente procesal y dice que luego de observar que las Constituciones panameñas han dado al habeas corpus la denominación de recurso, admite la cuestionabilidad del mismo en una estricta concepción procesal. Sin embargo, se apegan a la tradicional, no sólo porque la Constitución lo establece, sino porque, según acreditados autores, en un amplio sentido jurídico, el concepto de recurso es "sinónimo de medio de defensa general" ⁽⁸⁾

Nuestra posición luego de largos debates en el curso de maestría, nos lleva a acogernos a la concepción procesalista del habeas corpus como acción, basados fundamentalmente en que la figura del habeas corpus forma parte del Derecho Constitucional Procesal que ha surgido como una nueva disciplina jurídica propuesta por constitucionalistas en verdaderos instrumentos de protección procesal de los derechos humanos consagrados en las constituciones y en la Ley. El cual para nosotros particularmente, consideramos que el

⁽⁸⁾ QUINTERO, Cesar "LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN PANAMA". ESTUDIOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO, (Compilado por Jorge Fábrega P) Edil. Texto, San José, C R., 1987, p 812

concepto de acción, todavía es insuficiente, pues somos de la tesis que se debe llamar "Acción Procesal Constitucional de Habeas Corpus".

En el aspecto adjetivo, nuestro Código Judicial vigente, en el libro IV, en el cual desarrolla las instituciones de Garantías, en el Título en que regula el habeas corpus lo denomina acción. Discrepa, pues, de la Ley 46 de 1956 que lo llamaba recurso. Sin duda, con ello trata de reconocer al habeas corpus en particular, y a las demás Instituciones de Garantías en General, una naturaleza procesal propia.

Sobre este orden de ideas el consagrado Procesalista Héctor Fix Zamudio ha expresado: "La denominación de "garantías individuales" es de carácter tradicional y cristalizado en numerosos ordenamientos constitucionales de Latinoamérica, debido a la influencia de las cartas francesas de carácter revolucionario" ⁽⁹⁾

Con la aparición de los derechos de carácter social en las Constituciones de principios de siglo, parece ser que la expresión garantías constitucionales pasó a desplazar la de garantías individuales, puesto que ésta sólo consignaba los derechos del hombre en su esfera individual, y carentes de todo contenido social.

⁽⁹⁾ FIX ZAMUDIO, Héctor LATINOAMÉRICA: CONSTITUCIÓN, PROCESO Y DERECHOS HUMANOS, Editorial Miguel Ángel Porrúa, S. A., México, 1988, p 55

Tradicionalmente la doctrina y los textos constitucionales de Latinoamérica han seguido la tendencia de utilizar la denominación de garantías para designar los derechos del hombre.

Así lo expresa el maestro Fix Zamudio refiriéndose a la gran influencia que han tenido los textos franceses sobre las Constituciones Latinoamericanas "que siguen la terminología francesa de las garantías individuales y en ocasiones "constitucionales" con el significado de derechos de la persona humana consagrados en la Ley suprema" ⁽¹⁰⁾

Basado en lo citado, consideramos, al igual que el Profesor Sánchez Viamonte, que se hace necesario distinguir en el léxico constitucional la expresión "garantía" de la expresión "derecho", constantemente confundidos como sinónimos" ⁽¹¹⁾

Sobre el mismo concepto, el maestro Fix Zamudio, al señalar que: "Es preciso distinguir entre los derechos del hombre consignados en la ley suprema y las "garantías" de tales derechos, que no son otra que los medios procesales por conducto de los cuales es posible su protección y eficacia" ⁽¹²⁾

⁽¹⁰⁾ Ibidem, p 56

⁽¹¹⁾ SÁNCHEZ VAMONTE, Carlos EL HABEAS CORPUS, LA LIBERTAD Y SU GARANTÍA, Op Cit, p.2

⁽¹²⁾ FIX ZAMUDIO, Héctor Op cit., p 59

El Licenciado Raúl Valderrama en su excelente trabajo de graduación cita al Profesor de la Universidad Nacional de Perú, Ortecho Villena, quien magistralmente diferencia los términos derecho, garantía y libertad, lo hace en los siguientes términos.

"El derecho es la facultad jurídica y legal de ejercicio de la libertad. Y la garantía es el amparo para la cristalización de la libertad y el derecho. La libertad es el contenido y la esencia, el derecho es la forma y la garantía es el ropaje y continente de los dos anteriores" ⁽¹³⁾

En nuestro país la Constitución de 1941 hizo una clara diferencia y separación de los derechos y de las garantías. Esto es así, puesto que en Títulos separados consagró los Derechos y Deberes individuales y sociales (Título III) y los Derechos Políticos (Título IV); y creó un título (Título XV) destinado y denominado INSTITUCIONES DE GARANTÍA.

En el Título XV se regularon el Control de la Constitucionalidad, el amparo de Garantías Constitucionales y la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El habeas corpus es excluido de este Título, aunque aparece en el Título III de los Derechos y Deberes Individuales.

(13) ORTENCHO VILLENA, Víctor Julio **DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES**, Marsol Perú Editores, S.A., p. 293 Citado por VALDERRAMA GALLARDO, Raúl, Tesis de Derecho El Habeas Corpus (Evolución Constitucional y Legal en Panamá) Universidad de Panamá, 1991, p. 17

Aunque en 1956 se promulgó la Ley 46 que desarrolló las Instituciones de Garantía (que incluyó al habeas corpus), la innovación y precisión conceptual de la Constitución de 1941 de separar los derechos de las garantías tuvo corta vida, puesto que las Constituciones que le sucedieron (la de 1946 y la de 1972 vigente) siguieron la práctica impropia de utilizar la expresión GARANTÍAS FUNDAMENTALES para referirse indistintamente a los DERECHOS INDIVIDUALES CLÁSICOS, a los derechos sociales y a las garantías del habeas corpus y del amparo.

V. EL HABEAS CORPUS ES UNA INSTITUCIÓN DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Es preciso resaltar que la naturaleza jurídica de la nueva rama del Derecho Procesal, existe un consenso amplio entre varios autores en reconocer la existencia y validez de esta nueva disciplina jurídica.

El Maestro argentino Juan Carlos Hitters ha expresado que los orígenes de dicha disciplina los encontramos en: "una de las tendencias evolutivas que podemos marcar como notorias que tiene su punto de arranque con la finalización de la segunda guerra mundial, es la dedicación de los procesalistas, constitucionalistas y comparatista a escudriñar la justicia constitucional, con el fin

de proteger ciertos derechos fundamentales del hombre, ante distintos tipos de amenaza y ataques" ⁽¹⁴⁾

Esta novísima rama del derecho surge según el reputado procesalista mexicano Fix Zamudio, como: "una disciplina de confluencia situada de manera equidistante entre el estudio del derecho constitucional y del procesal"⁽¹⁵⁾. Este enfoque, sin lugar a dudas, constituye una posición en cuanto a su contenido, el cual, según el mismo autor, consiste "en el análisis de los principios, conceptos e instituciones de carácter procesal que están consagradas en las normas de las Cartas Fundamentales" ⁽¹⁶⁾

Otro Jurista que nos ofrece magistralmente un concepto de la disciplina en cuestión es el argentino Juan Carlos Hitters recién citado, quien manifiesta: "El derecho procesal constitucional, se erige como el conjunto de preceptos que regulan el proceso constitucional; es decir se ocupa de los engranajes adjetivos que hacen viables las garantías nacidas en los ordenamientos fundamentales"⁽¹⁷⁾

En lo que respecta al contenido del derecho procesal constitucional, el citado autor considera que abarca en términos generales: el debido proceso

⁽¹⁴⁾ **HITTERS, Juan Carlos "EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL". ESTUDIOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO** (Jorge Fábrega P. , Compilador), p 887

⁽¹⁵⁾ **FÁBREGA P., Jorge "DERECHOS CONSTITUCIONAL PROCESAL PANAMEÑO. ESTUDIOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO** (Jorge Fábrega P. , Compilador), p 935

⁽¹⁶⁾ Ibidem , p 935

⁽¹⁷⁾ Ibidem , p 935

legal; las garantías de las partes; las categorías de la jurisdicción; las garantías judiciales; y también, la protección de los derechos humanos. ⁽¹⁸⁾

Por su parte, el profesor de maestría, Jorge Fábrega, que ha escrito también sobre esta materia, ha dicho que esta rama del derecho está comprendida por:

“ Dos aspectos diferentes, si bien interrelacionados entre sí: a) Procesos de carácter jurisdiccional previstos en la Constitución (procesos Constitucionales para garantizar a las personas los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, contra actos de poder público; b) Garantías a las partes, otorgadas por la Constitución, mediante normas dirigidas al Legislador para que desarrolle en el ordenamiento positivo, y otras que confieren directamente (“self executing”) derechos a las partes litigantes en los procesos (“garantías de justicia”, “garantías constitucionales del proceso”, “derecho judicial material constitucional”) ⁽¹⁹⁾

Consideramos que dentro del contexto anterior del derecho procesal constitucional, el habeas corpus, como un auténtico proceso especial

⁽¹⁸⁾ Ibidem , p 872 ss

⁽¹⁹⁾ FÁBREGA PONCE, Jorge Op cit P 890

consagrado en la mayoría de las Constituciones del mundo, el cual adquiere una nueva dimensión o calidad que especializa aún más su novísima naturaleza jurídica.

CAPÍTULO SEGUNDO

EL HABEAS CORPUS EN LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES

PANAMEÑAS

“La importancia actual de la libertad personal tiene que ver no solamente con las ocasiones en que el hombre puede verse privado de ella sino con las garantías que rodeen las investigaciones: exclusión de malos tratos, torturas desapariciones de ciudadanos, y la actuación de los jueces, procedimientos legales, etc., temas que nacen en el derecho constitucional y van descendiendo hacia otras disciplinas jurídicas”

Vidal Perdomo

I. CONSTITUCIÓN DE 1904

Nuestra primera ley fundamental, la cual da inicio a nuestra vida constitucional como nación independiente, se caracteriza por su corte esencialmente individualista y con un alto predominio de las instituciones conservadoras de principios de siglo.

En cuanto a la institución de habeas corpus, que es el tema que nos ocupa, esta carta Política la aborda en el Título III de "Los Derechos Individuales". El constituyente de 1904 se apegó al espíritu de la Ley Inglesa de 1679, y se limitó a consagrar la institución originaria de Corte Anglosajón, la cual se redujo a "amparar la libertad restituyéndola en los casos en que la privación de la misma se aparta de las formalidades" ⁽²⁰⁾

Dentro del cuerpo de la mencionada constitución, fue el artículo 24 el que estableció esta garantía de la libertad, así:

"Artículo 24: Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales o fuera de los casos prescritos en esta Constitución o en las leyes, será puesta en libertad, a petición suya o de cualquiera otra persona. La Ley determinará la forma de este procedimiento sumario"

⁽²⁰⁾ GARCIA BALAUDE, Domingo Op Cit., p 19

Esta norma cumple únicamente la función de instituir el habeas corpus con una sencillez extrema, remitiéndose luego a la Ley para que reglamente su procedimiento. Y podemos observar que no la llama por su nombre, es decir no utiliza la expresión habeas corpus.

Aunque la Constitución de 1904 no estableció la expresión de habeas corpus, si previno su necesidad, toda vez que dejó en manos de la Ley el desarrollo de esta institución.

Esto fue así, puesto que en 1908, a cuatro años de nuestra separación de Colombia, mediante la Ley 2 de 24 de septiembre de 1908, la Asamblea Nacional de Panamá desarrolló el artículo 24 de la Carta Constitucional que garantiza la libertad individual. Esta Ley, en el artículo 1, transcribe el artículo 23 de la Constitución, y en su artículo 2 establece en forma expresa la institución del habeas corpus.

II. LA LEY 2 DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1908.

La Ley 2 de 1908 transcribe el artículo 23 de la Constitución de 1904, en el cual se consagran la inviolabilidad del domicilio, el respeto a la individualidad de la persona y su familia y el derecho a la libertad personal.

La Ley 2 de 1908, en su artículo 2, sin lugar a dudas, precisa aún más la esencia de su razón de ser. Su texto es el siguiente:

“ Toda persona que haya sido privada de su libertad sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en la Constitución, leyes o providencias legales de fuerza obligatoria, tiene derecho a un mandamiento de habeas corpus.”

En otras palabras, el fin del habeas corpus es garantizar el ejercicio de la libertad personal, y no el de evitar únicamente que la persona no sea detenida o presa ilegalmente.

El criterio sentado por la Corte Suprema durante la vigencia de esta Ley fue este, y así lo expresó en 1909:

“... se puede fijar como principio jurídico inconcluso, que cuando en el curso de la ley que se viene estudiando se habla de persona detenida o presa, se expresa la idea capital que dio vida a dicha ley, y puede y debe leerse: toda persona privada de su libertad, etc. La Corte no vacila en afirmar que está privada de su libertad una persona a quien un Decreto, orden o providencia de autoridad pública, obligan, por cualesquiera medios

que coarten la libertad del individuo, a abandonar su domicilio, residencia o lugar donde se encuentra en uso de libertad personal, y que en ese caso el habeas corpus la ampara y protege, para impedir el atentado o hacerlo cesar,...”(21)

A. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE HABEAS CORPUS:

El artículo 3 de la Ley 2 de 1908 expresamente conceptualiza la figura habeas corpus como “el derecho que tiene toda persona, detenida o presa, a comparecer inmediata y públicamente ante Juez o Tribunal para que lo oiga y resuelva si su detención o prisión es o no legal, y caso de no serlo le devuelva su libertad”.

La conceptualización contenida en la Ley, si bien cae en la imprecisión procesal de calificar al habeas corpus como un derecho, consagra varios principios procesales característicos de la acción como lo son: el principio de oralidad, el principio de concentración procesal y el principio de economía procesal.

(21) Registro Judicial 1909, p. 1028

B. SOLICITUD DE HABEAS CORPUS LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FERIADOS.

Según disponía el artículo 4 de la Ley 2 de 1908: "puede ser solicitado y debe ser expedido, entregado y resuelto en cualquier día, menos en las épocas de guerra exterior o de conmoción interior, casos en los cuales se suspende. cuando no fuere posible hacerlo efectivo."

La Ley 2 guardaba silencio en cuanto los sábados, domingos y días feriados. Al respecto la Corte Suprema de Justicia en 1910 aclara el oscurantismo de la Ley y dijo:

"La prisión, el arresto, el arraigo, el confinamiento, el destierro, son otros tantos medios de detención o privar de la libertad individual en el sentido legal y jurídico y también en el sentido natural y obvio, por lo cual si las providencias que las ordenan no están fundadas en un procedimiento legal pueden dar derecho a la persona contra quien se ha dictado un mandamiento de Habeas Corpus que la Ley manda a conceder sin demora, aun en días feriados". ⁽²²⁾ (Lo subrayado es nuestro)

(22) Registro Judicial 1910, p 23

Este nefasto criterio fue recogido por el Código Judicial de 1917, el cual establecía una restricción al derecho que tiene todo individuo de recobrar la libertad, cuando ha sido privado de ella arbitrariamente.

2. Sentencias Ejecutoriadas: El artículo 24, específicamente descartaba la admisibilidad de la acción de habeas corpus con respecto a sentencias definitivas ejecutoriadas, cuando decía:

“Cuando la prisión obedeciese a sentencia definitiva ejecutoriada proferida por el Poder Judicial, o por funcionarios de Policía Judicial, o por funcionarios por el Poder Judicial, o por funcionarios de Policía Judicial, la solicitud del Habeas Corpus no es admisible.”

Este artículo no presenta mayores problemas, en cuanto a la inadmisibilidad de la solicitud de habeas corpus ante unas sentencias en firme proferidas por el Órgano Judicial. Pues, contra esta no cabe recurso alguno. Sin embargo, no sucedía igual cuando se trata de funcionarios de Policía, quienes son tenidos como Alcaldes y Gobernadores ejerciendo funciones jurisdiccionales que la Ley les atribuye expresamente. Con relación a este tema, tenemos el habeas corpus promovido por el señor Fernando Guardia a favor del ciudadano asiático Ho Juan, contra el Gobernador de Colón en 1913. En este caso:

“El Gobernador de Colón y su apoderado niegan al ciudadano asiático Ho Juan derecho a interponer el recurso de habeas corpus, porque dicen se trata de una providencia dictada en juicio de policía judicial ya ejecutoriada. Más, en concepto de la Corte, el recurso procede, por no hallarse en la excepción que señala la Ley 2 citada, en su artículo 24,...., toda vez que el Decreto o resolución de expulsión es un mero acto de policía en lo administrativo,...”⁽²³⁾

3. Si el Detenido está fuera de Jurisdicción Nacional (Zona del Canal)

Aunque no existía disposición expresa a este respecto, la Corte Suprema de Justicia, durante la vigencia de esta ley declaró en varias ocasiones que el habeas corpus solicitado era improcedente por razón de que la persona en cuyo favor se solicitó se encontraba fuera de la jurisdicción nacional.

Analicemos el criterio que ha mantenido nuestra Corte Suprema de Justicia al respecto.

Recurso de habeas corpus impetrado por M.A. Herradora a favor de Robert Charlet. Enero, 1912.

(23) Registro Judicial 1913, p. 69

“....., el mismo doctor Herradora, al establecer su recurso, manifestó que Charlet se halla detenido en el Cuartel de Policía de Ancón, Zona del Canal; y siendo así, como lo es, resulta, que el mandamiento de habeas corpus impetrado no procede, toda vez que la ley 2da de 1908,....., se refiere a las personas que dentro de la Jurisdicción – de la República – se hallen detenidas sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en la Constitución,” (24)

Recurso de habeas corpus interpuesto por Mercedes Bernal, a favor de Archille Vigot, contra el Gobernador de la Provincia de Panamá. Junio, 1914.

“Por lo expuesto, y en atención a que Archille Vigot, a favor del cual se solicitó el presente recurso de habeas corpus, se halla fuera de la jurisdicción de la República desde el mismo día dos de los corrientes en que dicho recurso se propuso, no hay lugar a proseguir el curso de este asunto, y así lo resuelve la Corte,” (25)

(24) Registro Judicial. 1912, p 53

(25) Registro Judicial 1914, p 507

E. FORMALIDAD QUE DEBE LLENAR LA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS.

1. Debe constar por escrito: El artículo 6 de la precitada ley, dice:

“La solicitud del mandamiento de habeas corpus debe hacerse por escrito e irá firmada por la persona de cuya libertad se trate, o por cualquier otra persona en su nombre, con o sin poder”

Es importante destacar, que la formalidad de la escritura de la solicitud del habeas corpus se extendía a los telegramas. Para este fin vale citar la vista de la Corte Suprema de Justicia:

“Vistos: Por telegrama de fecha siete del presente, ocurrió a este Despacho Juan M. Salazar, vecino de Colón, solicitando mandamiento de habeas corpus a favor de Faustina Camargo, detenida por orden....” (26)

F. INCUMPLIMIENTO DEL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

El artículo 20 de esta ley 2 sobre este particular reza así:

⁽²⁶⁾ Registro Judicial 1911, p 1118

“Artículo 20: Cuando el empleado a quien se haya dirigido un mandamiento de Habeas Corpus rehusarse obedecerlo o no lo cumpliera dentro del término legal sin causa suficiente debidamente, el Juez o la Corte ante quien haya de presentarse el preso, una vez comprobado que el mandamiento fue oportunamente entregado, expedirá enseguida una orden dirigida a la autoridad política que juzgue conveniente para que conduzca en el acto al desobediente ante el Juez o la Corte que dictó el mandamiento.

La precitada norma deja establecido con claridad meridiana que la desobediencia o el incumplimiento del mandamiento de habeas corpus sin causa legal debidamente justificada y demostrada, conlleva el arresto del funcionario desobediente.

Nuestro Máximo Tribunal de Justicia en sentencia de junio de 1914, dijo:

Presente el empleado, el Juez o la Corte le exigirá la rendición inmediata del informe pedido, el cual podrá dar verbalmente, dejándose constancia como si fuera una declaración jurada. En caso de resistencia quedará en arresto el empleado hasta que cumpla la orden.”

G. TÉRMINO PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS.

El artículo 23 al respecto dice:

“Dentro de las 24 horas siguientes a la de la audiencia, resolverá el Juez o Tribunal mantener la prisión del querellante u ordenar su inmediata libertad según que la prisión sea o no legal.”

La norma exigía un término perentorio de 24 horas para que el funcionario, determinará si la detención era legal o ilegal.

H. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS.

- 1) Procede la libertad inmediata del detenido.
- 2) El detenido no volverá a ser privado de su libertad por la misma causa.

El artículo 33, al respecto dice:

“No se considerará que la causa es la misma en los casos siguientes:

1. Cuando ha sido puesto en libertad el que estaba preso a consecuencia de un auto de prisión proferido en virtud de investigación de un hecho punible y es encarcelado por el mismo

hecho en virtud de resolución del Tribunal que le exigió fianza para responder de su comparecencia a que la ha sentenciado el mismo proceso; y

2. Cuando ha sido puesto en libertad por falta de pruebas o por defecto en el mandamiento de prisión y encarcelado después en cumplimiento de un auto dictado en la misma causa, fundado en pruebas suficientes.

3) Se pasará copia de lo conducente a quien corresponda para que se haga efectiva la responsabilidad criminal al detentador de la libertad (art. 23).

4) Si se resuelve que la detención es legal:

a) Si resultare manifiestamente temeraria la pretensión del querellante este satisfará los gastos extraordinarios que haya causado y pagará a juicio del Juez o de la Corte, una multa de doce cincuenta (B/ 12.50) a cien balboas (B/.100.00) convertibles en arresto. (art. 23)

La Corte Suprema fue estricta en cuanto a la aplicación de esta multa. Así lo demostró en los siguientes fallos de la época cuando dijo:

“Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, DECLARA improcedente el recurso de Habeas Corpus interpuesto Por Antonia Bissio y le impone a esta una multa de cincuenta Balboas, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 2da de 1908.”
(27)

“Imponese a Juan Salazar una multa de doce balboas cincuenta centésimos (B/.12.50), en conformidad con el artículo 23 de la ley 2da.. El querellante deberá pagar además los gastos extraordinarios que se hayan causado.” **(28)**

Las leyes de habeas corpus que sucedieron a la Ley 2 de 1908 desnaturalizaron este artículo. Toda vez que hábilmente prescindieron de la celebración de la audiencia cuando sobre la privación de libertad pesaren sumarias.

- b) Intervención del Ministerio Público. El artículo 29 dispone que cuando a detención ha sido suscitada por virtud de providencia judicial, la audiencia se había de celebrar con la intervención del Ministerio Público.

(27) Registro Judicial 1914, p 258

(28) Registro Judicial 1911, p 1120

c) **Proposición y término de Pruebas.** El artículo 30 preceptúa al respecto de la proposición de pruebas que:

“La persona privada de libertad que haya sido presentada por virtud de un mandamiento de Habeas Corpus, que al proponer pruebas, bajo juramento para comprobar que su prisión es ilegal o que tiene derecho a ser puesta en libertad”

En consecuencia de lo anterior, el Juez queda facultado, en principio, para conceder un término de prueba.

I. EL AUTO QUE RESOLVÍA LA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS NO ADMITÍA APELACIÓN.

La Ley 2 de 1908 guardó silencio con respecto a si era apelable o no. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia mantuvo un criterio claro sobre este aspecto

El criterio dominante de nuestra Corte Suprema de Justicia durante la vigencia de esta ley, fue el de no admitir Recurso de Apelación en materia de habeas corpus. Esto se dejó aclarado en el siguiente pronunciamiento emitido en 1914:

"Breve y sumario como es el procedimiento instituido a virtud de mandamiento de habeas corpus, la sentencia que en el se dicte no es apelable, reformable, ni está sujeta a recurso alguno, y así lo ha decidido la Corte en varios casos, entre ellos en el recurso propuesto por Manuel S. Tejada contra el Alcalde de Natá, Carlos Guevara; en el propuesto por Nicolás González, Arturo Lezcano, Francisco Araúz y Maximino Franco contra el Alcalde de David y, por último, en el que propuso Rafael Vicente Díaz contra el Juez de Circuito de Bocas del Toro, en que el mismo señor Fernando Guardia, a quien como Magistrado en esa época, le toco conocer en el negocio, resolvió lo siguiente: << La apelación interpuesta en subsidio no procede, porque ya se tiene decidido que los autos en que se falla el recurso de habeas corpus no son apelables, ni nuestras leyes establecen una Corte ultra - superior ante quien pueda apelarse de las providencias de esta superioridad. Por tanto, no se concede la revocación ni la apelación a que se refiere el anterior memorial." ⁽²⁹⁾ (Lo subrayado es nuestro)

J. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS.

⁽²⁹⁾ Registro Judicial 1914, p 487

La competencia del habeas corpus dentro de la Ley 2 de 1908 estaba fundamentado en la opinión de la Corte Suprema de Justicia que sostuvo el siguiente criterio:

“En la graduación de las competencias se ve que nunca un funcionario de inferior o igual categoría conoce del recurso de habeas corpus contra su inferior o igual. Así cuando se solicita contra un Corregidor, conoce el Juez Municipal; cuando de un Alcalde o Juez Municipal, el Juez de circuito y de ese modo sucesivamente.” ⁽³⁰⁾

En función de este criterio esgrimido por nuestra Máximo Tribunal de Justicia de 1908. El artículo 6 de la Ley 2, la competencia de los tribunales se distribuyó de la siguiente manera:

- “1. A los Jueces Municipales en los casos que procedan de actos de empleados de fracción distrital, como los Inspectores de Policía.**
- 2. A los Jueces de Circuito en lo Criminal en los casos que procedan de actos de empleados de distrito, como Jueces o Alcaldes Municipales.**
- 3. A los Magistrados de la Sala de lo Criminal en los casos que procedan de actos de empleados de circuito o de Provincia, como Jueces o Gobernadores, o de empleados**

⁽³⁰⁾ Registro Judicial 1914, p 295

cuyas funciones se extiendan a toda la República como el Juez Superior, o los comandantes de la Policía Nacional; o en los casos en que se trate de órdenes que emanen del Poder ejecutivo de la República.

4. A los Magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema en los casos que procedan de actos de los Magistrados de la Sala de lo Criminal de la misma Corporación."

1. Competencia Especial

El artículo 8 de la Ley 2 de 1908 estableció una competencia especial para los casos en que el autor de la detención fuere "un empleado público sin mando o jurisdicción o un particular," en casos de los cuales la solicitud de mandamiento de habeas corpus debería dirigirse al Juez del Crimen en las Cabeceras de Circuito Judicial y en los demás Distrito al Juez Municipal.

K. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS.

La Ley 2 fue prolífica en sanciones, las cuales tenían lugar en diferentes momentos de la substanciación del habeas corpus. Hubo dos tipos de sanciones, la que iba desde el arresto del empleado que incumple el mandamiento de Habeas Corpus (art. 20), que ya hemos visto, hasta las

sanciones pecuniarias (multas) de B/ 50 00 a B/.250 00 a favor del tesoro público contra los jueces que incurran en la negativa del mandamiento de habeas corpus para los casos en que sea procedente expedirlo (art. 43).

De igual forma, el detenido que inicie la actividad Jurisdiccional del Estado, y se resuelva temeridad manifiesta en su accionar, era sancionado como ya se ha visto anteriormente.

El celo de la Ley 2 de 1908, en garantizar la protección de la libertad, fue tal que sancionaba con multa de B/.50.00 la omisión o la no entrega de la orden escrita de detención de alguna persona; la prescindencia de exponerse en ella la causa de la detención o prisión; y el no entregar esa orden cuando expida, original, al detenido o preso. (art. 45).

Lo anterior se infiere del fallo de 16 de octubre de 1912, sobre habeas corpus propuesto por Nicolás González, Arturo Lezcano, Francisco Araúz y Maximino Franco ante el Juez de Circuito de Chinquí, contra el Alcalde Municipal de David que es del siguiente tenor:

“Por tanto, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve que son ilegales las detenciones de Nicolás González, Arturo Lezcano y Franciso Araúz; que es legal la detención de Máximo

A. EL HABEAS CORPUS Y LA LIBERTAD CORPORAL.

Como ya fue indicado anteriormente, uno de los errores que tuvo la primera ley de habeas corpus en Panamá, es la confusión del artículo 1, cuando hizo la declaración de dos derechos, la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio, declaración esta que corresponde al rango constitucional y no a la norma sustantiva puesto que ella debe limitarse a desarrollar los derechos y principios que consigna la Constitución.

Esta anomalía fue subsanada por la nueva Ley, la cual se vio obligada a utilizar un mejor tecnicismo en su redacción para facilitar así la labor del funcionario encargado de interpretarla.

El artículo 1, comienza por establecer cuando opera el habeas corpus.

“Artículo 1. Toda persona que de alguna manera haya sido privada de su libertad sin fundamento de derecho, puede pedir un mandamiento de habeas corpus”.

Este precepto revistió el mismo alcance que el artículo 2 de la ley 2 de 1908, al amparar a toda persona que sufriera la privación ilegal de su libertad, del medio necesario para acudir ante los Tribunales en función de obtener protección, puesto que la finalidad de esta institución es la de proteger la libertad

corporal cuando es afectada “fuera de los casos y la reforma que prescriben la Constitución y la ley” ⁽³³⁾

B. CONCEPTO LEGAL DEL HABEAS CORPUS EN 1914.

Ahora bien, el artículo 2 de la norma en estudio reafirma lo dicho al especificar de forma más clara en que consiste la figura.

“Artículo 2.- Habeas Corpus es la facultad que tiene toda persona privada de su libertad, de comparecer inmediata y públicamente ante la justicia para que la oiga y resuelva si es legal tal privación y para que, en caso negativo restituya las cosas al estado anterior”

Según este artículo, el habeas corpus es el camino que tiene un individuo para presentarse ante la justicia, a fin de atacar por ilegal “cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios y corporaciones públicas del órgano o rama que fuere” que han atentado contra su libertad”. ⁽³⁴⁾

⁽³³⁾ CANCIO, Hiram R. SEMINARIO SOBRE AMPARO Y HABEAS CORPUS, México D F , 1962, p 6

⁽³⁴⁾ Ibidem, p 6

C. OPORTUNIDAD DEL HABEAS CORPUS EN 1914.

El artículo 3, se refiere a la suspensión temporal de que puede ser objeto esta garantía.

"Artículo 3.- El mandamiento de habeas corpus puede ser solicitado y debe ser expedido, entregado y resuelto en cualquier día, salvo las excepciones a que se refiere el artículo 47 de la constitución"

A diferencia del artículo 4 de la Ley 2 de 1908, este fue más claro sobre dicho tema, porque las dudas surgidas de la interpretación del primero, en el que se hacía ver que la aplicación del habeas corpus en los momentos de guerra exterior o conmoción interna podía depender de la posibilidad de presentarlo, fueron resueltas en virtud de la forma precisa como fue señalada esta eventualidad en el nuevo texto.

Sin embargo, hay que tener presente que esta medida de suspender temporalmente la vigencia de las garantías, a pesar de que pueden ser justificables en algunos momentos, se convierte en un peligroso riesgo para todos, porque el gobierno al ser autorizado por la Constitución para dejar sin efecto "las instituciones jurídicas que permiten al individuo accionar en

amparo de sus derechos individuales” ⁽³⁵⁾ deja a los asociados sin ningún tipo de resguardo para hacerle frente a las arbitrariedades que en su contra puedan cometerse.

D. REPRESENTACIÓN LEGAL DEL FUNCIONARIO DEMANDADO, EN EL HABEAS CORPUS EN 1914.

Nos llama la atención, el artículo 4 de la Ley 8 de 1914, la cual transcribe lo contenido en el artículo 5 de la ley 2 de 1908, en cuanto alterar el principio de sumariedad del habeas corpus al establecer:

“Artículo 4.- En todo asunto de habeas corpus las partes podrán comparecer en conformidad con las leyes de procedimiento”

Se deduce de la lectura de la norma citada, que tanto el funcionario que realizó el acto acusado, así como la persona afectada en su libertad, pueden hacerse representar por un apoderado legal. Para el segundo no hay mayores problemas porque es permitido utilizar todos los mecanismos tendientes a recuperar su libertad sin que por esto signifique menoscabar la esencia de esta garantía. Para el primero no opinamos lo mismo, porque al hacer éste uso de las vías procesales ordinarias se estaría desprotegiendo la libertad como bien

⁽³⁵⁾ BRAVO MITCHELL, Clodomiro Op. Cit., p. 64

supremo de todos, y creemos nosotros que “lo que se pide es que todo derecho amparado por la Constitución tenga un remedio sumarísimo, independiente de la legislación ordinaria”⁽³⁸⁾

E. LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN EL HABEAS CORPUS EN 1914.

Un aspecto que tuvo relevancia dentro de las pocas innovaciones introducidas por esta nueva Ley, es el cambio que se dio para determinar la competencia a nivel de la Corte, la manera como se hizo en esta Ley varió con respecto a la primera.

La diferencia marcada sobre este tema es el numeral 3 del artículo 5, los dos primeros numerales son idénticos a los establecidos en el artículo 6 de la Ley 2 de 1908.

“Artículo 5.- La solicitud del mandamiento de Habeas Corpus debe hacerse por escrito, bajo la firma de la persona de cuya libertad se trate o de cualquier otra que sea hábil para tal solicitud será dirigida a los siguientes funcionarios.

1.
2.

⁽³⁸⁾ GARCIA BELAUNDE, Domingo Op. Cit., p. 131

3. A la Corte Suprema de Justicia en los casos que procedan de actos de empleos de Circuito o de Provincia , o de empleados cuyas funciones se extiendan a más de una Provincia y a toda la República”.

Recordando los presupuestos que consignaba la primera ley, para que un acto fuera de conocimiento de la Corte, tenemos que esta actuaba como si fuera dos Tribunales distintos y no de forma conjunta.

La Corte conocía de dos habeas corpus. El primero cuando el acto acusado provenía de funcionario con funciones en una Provincia o en toda la República, en este caso era la Sala Criminal la que resolvía; el segundo habeas corpus, ocurría cuando el acto nacía en la Sala Criminal, entonces el competente para conocer de esa demanda era la Sala Civil.

Con este numeral se elimina esta distribución de competencia alterna dentro de un mismo Tribunal, que para estos menesteres debe darse una participación colectiva de todos sus miembros a través de un pleno único.

Con esta modalidad se deja a un lado la superioridad de una Sala sobre la otra, contribuyendo a su vez a la armonía que debe reinar en el Máximo Tribunal de Justicia.

F. NO PROCEDE EL HABEAS CORPUS CONTRA PENAS INFERIORES A OCHO DÍAS EN 1914.

El funesto artículo 9 de la Ley 2 de 1908, encontró el artículo 8 de la nueva legislación la continuidad de su negativo contenido para desprestigio de la institución, es aquí donde se plasma un supuesto de rechazo del habeas corpus.

“Artículo 8. El Habeas Corpus no se extiende a las personas correccionadas por la Policía como institución moralizadora de las costumbres y protectora del orden social, mientras la pena correccional impuesta, no exceda de ocho días de arresto. En caso de que excediere de este término tiene derecho el penado al mandamiento de habeas corpus.”

Esta posición es absurda, puesto que “la Ley fundamental, al permitir la acción de habeas corpus, solamente la programa para la protección de la libertad física o corporal” ⁽³⁷⁾ sin tomar en consideración la pena aplicable al individuo, cuando se le persigue por alguna causa, lo único que debe darse para que proceda esta garantía es que una persona haya sido detenida sin cumplir los requisitos legales existentes.

⁽³⁷⁾ SIERRALTA, Morris Op Cit, p 50

G. EFECTO DE LA SENTENCIA DE HABEAS CORPUS EN 1914.

De la lectura del artículo 23 se desprende que no cabe una detención posterior al fallo favorable, sino se presentan nuevas pruebas que ameriten tomar dicha medida nuevamente.

“Artículo 23: Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandamiento de habeas corpus no podrá ser detenido de nuevo, salvo que ocurra situación jurídica distinta.”

Este precepto no otorga el efecto absoluto de cosa juzgada a la sentencia, porque la salvedad establecida de una situación jurídica distinta participa de las tres identidades que se conjugan para que opere esta particularidad. Además, el régimen estricto al que se ve sometido este principio es precisamente para eso, que **“la sentencia que produce cosa juzgada no sólo es irrecurrible, sino que además es inmutable, esto es, no puede ser modificada ni en el proceso en que se discutió, ni en otro posterior”**⁽³⁸⁾

H. ORDEN VERBAL EN CASOS URGENTES DE DETENCIÓN EN 1914.

⁽³⁸⁾ FABREGA, Jorge Op Cit., p 310

Dentro del cuerpo que estamos analizando, observamos una reforma que introdujo en perjuicio de la libertad individual el artículo 27.

“Artículo 27: La autoridad que ordene la detención o prisión de alguna persona debe hacerlo por escrito, exponiendo la causa que la motiva y expedirá copia autorizada de la orden a cualquiera persona que la solicite con el fin de obtener el mandamiento de habeas corpus a favor de la persona detenida o presa. Sólo en casos urgentes la orden puede ser verbal, pero ella deberá ser expedida por escrito y entregada a quien corresponda dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención o prisión. Parágrafo: Esta disposición no comprende a las detenciones decretadas y efectuadas por la Policía cuando se trate de faltas policivas.”

Esta norma fue mucho mas allá, porque la única excepción en este sentido la consignó la propia Constitución cuando faculta no sólo a un funcionario competente, sino a cualquier persona para que aprehenda a un delincuente sorprendido in fraganti.

La orden escrita como presupuesto constitucional es una dificultad que la misma Constitución establece para evitar la arbitrariedad de la autoridades. Es

más, dicha orden es la presunción de legalidad que tiene todo acto emanado de autoridad competente para que el mismo produzca efectos jurídicos.

En este artículo 27 el legislador continúa concediéndole, y no entendemos por qué razones, cierta impunidad a la Policía Nacional, al disponer en el párrafo de la norma citada que las detenciones realizadas por dicha Policía en el ejercicio de sus funciones moralizadoras y custodia del orden social, podrían hacerse verbalmente y por tanto, sin mediar orden escrita.

I. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN DEPORTACION DE EXTRANJEROS PERNICIOSOS.

Al analizar la ley 2 de 1908, se observó la gran demanda que tuvo el habeas corpus por los extranjeros que se encontraban en inminente situación de ser deportados del territorio nacional. Es importante tener presente que para aquella época el canal interoceánico estaba en plena construcción, pero para 1914, año en que se promulga la Ley 8, esta obra ya estaba concluida y había sido inaugurada. Por ello, la mano de obra que demandó al momento de ser finalizada resultó sobrando. Y, si bien es cierto, muchos fueron devueltos a su país natal, otros optaron por quedarse. Lo cierto es que la introducción de este artículo dentro de la Ley 8 de 1914, limitó jurídicamente la suerte de muchos extranjeros quienes, con el pretexto de ser considerados "extranjeros perniciosos", fueron deportados del territorio de la República.

Sostenemos, como antes hemos afirmando, que la disposición ésta fue uno de los factores que inició decisivamente en la derogación de la Ley 2 de 1908. De igual manera, la excerta legal citada imposibilitó el ejercicio de un mandamiento de habeas corpus cuando se trataba del confinamiento de nacionales, si dicho confinamiento había sido decretado por autoridades policivas de conformidad con las leyes.

Nuestra Corte Suprema de Justicia se manifiesta sobre este tema al resolver el habeas corpus intentado por Manuel Araúz, a favor de Maximino Araúz, Juan Antonio Atencio, Isidoro Martínez Guillermo Crossland contra el Capitán, Jefe de la Séptima Sección de la Policía Nacional, residente en David:

“ La Corte Suprema de Justicia, luego del Informe rendido por el funcionario demandado, según lo ordenaba el artículo 14 de la Ley 8 de 1914, en el cual deja claro que los querellantes están cumpliendo pena de confinamiento, según lo establece el artículo 4 de la Ley 13 de 1913, declara que los afectados carecen de acción para demandar un habeas corpus y declara éste improcedente. “ (39)

IV. CONSTITUCIÓN DE 1941.

⁽³⁹⁾ Registro Judicial 1917, p 740

Esta Carta Magna innova la instrucción de la Acción de Habeas Corpus en los siguientes aspectos:

- a. Añade al texto, de similar redacción al contenido en el artículo 24 de la Constitución Nacional de 1904, la expresión “motivo válido”. Procesalmente, la expresión es de suma importancia, pues al afectado con la detención o prisión hay que ponerlo en conocimiento de cual ha sido el fundamento de hecho, previsto en la Ley, por el cual se ordena la detención.
- b. Por primera vez se emplea en nuestro constitucionalismo la expresión habeas corpus.
- c. Denomina al habeas corpus recurso y no acción; no obstante de colegiarse, *stricto iure*, que se trata de una acción por las mismas explicaciones dadas en el anterior apartado y al referirnos al artículo 24 de la Constitución Nacional de 1904

Afortunadamente el constituyente de 1941, consciente de la importancia que reviste para el individuo la consagración plena de esta garantía, consideró oportuno enmendar los errores que sus predecesores de 1904 cometieron, al dejar al arbitrio de la Ley el relleno de algunas lagunas que fueron aprovechadas por aquella para crearle ciertos impedimentos a su interposición.

Por esta razón, al momento de redactar el artículo 28 de la Carta de 1941, el constituyente lo hizo de tal forma que no dejó duda alguna sobre su intención de que el habeas corpus protegiera todas las detenciones ilegales sin distinción de la pena aplicable.

“Artículo 28: Toda persona detenida o presa sin motivo válido o sin las formalidades legales, o fuera de los casos prescritos en esta Constitución o en las leyes, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier persona. Con este fin la ley reglamentará el recurso de habeas corpus con procedimiento judicial sumario. Sin consideración a la pena aplicable”

Lo primero que se puede apreciar es que la disposición constitucional denomina a la institución habeas corpus. Sin embargo, existen otros países que no le dan este nombre, por ejemplo Nicaragua lo llama “Recurso de Exhibición Personal”, en su artículo 189 de la Constitución de 9 de enero de 1987.

Gracias al contenido de esta norma se pudieron corregir muchas injusticias que se estaban dando durante la vigencia de la Constitución anterior, porque las leyes que reglamentaron en ese período el artículo 24 de la referida Carta, olvidaron por completo que: “En su origen histórico y aceptación

tradicional, el habeas corpus aparece como remedio ante una detención"

(40)

En otras palabras el presupuesto exigido para que proceda un Habeas Corpus es que exista una detención, entendiéndose por tal privación física de la libertad de una persona.

V. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1946.

En este ordenamiento constitucional, la acción de habeas corpus objeto de este trabajo, se enmarcó en el artículo 24, Capítulo 1, intitulado GARANTIAS FUNDAMENTALES, del Título III denominado DERECHO Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES, cuya letra reza así:

"Artículo 24: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de cualquier persona. Con este fin la Ley reglamentará el recurso de habeas corpus mediante procedimiento judicial sumario y sin consideración a la pena aplicable"

(40) SAGUES, Néstor Op. Cit., p. 77

Sobre esta excerta constitucional que regulaba el mandamiento de habeas corpus, nuestro insigne Constitucionalista el Doctor César Quintero en su obra "Evolución Constitucional de Panamá", dijo:

"..., sin duda, la más ponderada y democrática que ha tenido Panamá en su llamada era republicana.

Es además la única que ha sido adoptada por medios auténticamente legítimos y populares. Fue debatida y aprobada públicamente por una verdadera Asamblea Constituyente en un ambiente de completa libertad. Por eso contó con el respeto y la adhesión populares" ⁽⁴¹⁾

Si hacemos un análisis comparativo con la Constitución de 1941, la nueva Carta Política de 1946, elimina aquella frase "Sin motivo válido", esta sustracción es atinada en razón que dicha frase procesalmente resultaba insostenible. Cabe resaltar también que no se dieron en el fondo de la acción habeas corpus, mayores cambios procesales, ni estructurales, la figura siguió manteniendo reservas legales, e imprecisiones de caracterización procesal, las cuales fueron atenuadas posteriormente por la Ley 46 sobre instituciones de garantía de 1956.

Al respecto de la Carta Política de 1946 el Doctor Rigoberto González Montenegro en su obra "El Habeas Corpus" comenta:

⁽⁴¹⁾ **QUINTERO, César** EVOLUCION CONSTITUCIONAL DE PANAMA. ESTUDIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO (José Fábrega P., Compilador), Editorial Texto, Ltda., San José, C.R., 1987, p. 21

La garantía constitucional de protección de la libertad corporal o física, fue regulada, en lo atinente a la que vendría a ser nuestra tercera Constitución de Estado Independiente, en el artículo 24 de la Ley fundamental de 1946.

Como pudimos apreciar en el citado artículo 24 de la Constitución de 1946:

Los elementos constitutivos del habeas corpus regulados en el precepto Constitucional de 1941, se mantuvieron en la normativa de esta última disposición transcrita, sin que le suprimiera o adicionara nada de relevancia. No está de más comentar, que durante la vigencia de esta Constitución –la de 1946-, se demandó la Inconstitucionalidad del artículo 2399 del Código Judicial de ese entonces, que negaba la interposición del habeas corpus, en aquellos casos en los que se sancionara a una persona, a la pena mínima de ocho (8) días de prisión.
(42)

Sobre este controversial problema que venía empañando la efectividad procesal del mandamiento de habeas corpus en aquellos casos en que se condenaba a una persona a pena de prisión por menos de ocho (8) días, la Corte resuelve el problema al pronunciarse de esta manera:

“Indudablemente el artículo 2399 del Código Judicial niega el recurso de habeas corpus a las personas sancionadas por las

(42) GONZALEZ MONTENEGRO, Rigoberto. EL HABEAS CORPUS. Editorial Libertad, Colección de Derecho Constitucional, 1995, pág. 38

contravenciones que contempla el Libro III del Código administrativo, cuando la pena impuesta no exceda de (8) ocho días de prisión, con lo que se establece una restricción al derecho que tiene todo individuo para recobrar su libertad cuando ha sido privado arbitrariamente de ella” (43)

En este sentido, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del citado artículo del antiguo Código Judicial, por ser infractor el artículo 24 de la Constitución de 1946, toda vez que este precepto disponía que este “recurso” podía ser presentado, “sin consideración a la pena aplicable”

VI. LA LEY 46 DE 1956

El habeas corpus regulado en el Código Judicial de 1917, tuvo vigencia hasta el 24 de noviembre de 1956, pues en esta forma se promulgó la Ley 46 de 1956, sobre Instituciones de Garantía.

Esta Ley 46 nace para responder a las exigencias que iban surgiendo dentro de la nueva concepción social del Estado de Derecho que ya había sido expresada en la Carta Política de 1941, y después en la de 1946.

(43) Fallo de 6 de octubre de 1950 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Jurisprudencia Constitucional, U., Universidad de Panamá, Panamá, 1967, p. 123

En la Ley 46 de 1956, el habeas corpus fue la primera institución de garantía reglamentada. Este instrumento procesal de protección de la libertad corporal estuvo desarrollado en el Título I de esta Ley; el cual fue dividido en cinco capítulos, a lo largo de cuarenta y dos artículos. Esta nueva modalidad, además de estar establecida en el Código Administrativo, fue atinada porque constituyó el primer esfuerzo de sistematización lógica y coherente del conjunto de disposiciones que regulan todo el proceso constitucional especialísimo, como es el habeas corpus.

La Ley 46 de 1956 estuvo vigente hasta 1987, cuando fue derogada por el nuevo Código Judicial. En otras palabras, esta Ley constituye la norma jurídica inmediatamente anterior a la Ley vigente. Razón por la cual, estuvo regida por la Constitución de 1946, y por la de 1972, incluidas las reformas constitucionales de 1983.

A. NATURALEZA DEL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS.

La norma se inicia con una transcripción literal del artículo 24 de la Constitución de 1946, cuando dice textualmente:

Artículo 1: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescribe la Constitución y la Ley por cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o

corporaciones públicas del órgano o rama que fuere, tiene derecho a un mandamiento de habeas corpus, a fin de comparecer inmediata y públicamente ante la justicia para que lo oiga o resuelva si es fundada tal detención, arresto o prisión y para que, en caso negativo, lo ponga en libertad y restituya así las cosas al estado anterior.

En un análisis simple de la norma notamos que prima fase, la misma regula la privación de la libertad corporal de la persona humana. Detención que, en todos los casos, está revestida de ilegalidad o inconstitucionalidad. Es concluyente entonces que en Panamá el habeas corpus es sólo oponible ante la privación ilegal de la libertad física de un individuo. El otro elemento es el de que esta privación de libertad tenga lugar por cualquier acto que emane de una autoridad pública. Esto desecha entonces toda posibilidad de que en Panamá el habeas corpus proceda contra actos de particulares destinados a restringir la libertad de una persona.

B. OBJETO DEL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS.

En concordancia y para desarrollar la norma constitucional transcrita, la Ley 46 caracteriza el objeto de la acción de habeas corpus, aún con la imprecisión procesal de que en su desarrollo lo llama "recurso" de habeas corpus pero lo trascendental que se acoge al sistema de números clausus y

enumera las situaciones que se consideran actos sin fundamento para una detención, y dice:

Artículo 2: Para los efectos del artículo anterior se consideran además como actos sin fundamento legal;

- a) La detención de un individuo con merma de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución.
- b) La privación de la libertad de una persona a quien intentan juzgar más de una vez por la misma falta o delito;
- c) La detención de una persona por una autoridad o funcionario carente de la facultad para ello;
- d) La detención de una persona amparada por una Ley de amnistía o por un decreto de Indulto y;
- e) El confinamiento o la deportación sin causa legal.

Como refuerzo a la norma adjetiva, la Corte de la época, al tenor del artículo N° 2 de la Ley 46 de 1956 dijo:

“ Y como en el presente, pese a las notas en que ponía al detenido primero a órdenes de una autoridad, luego a órdenes de otra y por último a la del Ministerio de Gobierno y Justicia, en ningún momento ha estado a órdenes de la autoridad competente para juzgarlo. De ello se sigue forzosamente que la detención del recurrente no se conforme con lo

estatuido en el artículo 28 de la Ley No 46 de 1956, en relación con el 22 de la Constitución de la república".⁽⁴⁴⁾

La Corte sostiene que la detención debe responder a alguna de las situaciones contenidas en el artículo segundo de la Ley 46 de 1956, como presupuesto de actos sin fundamento para una detención legal.

Si analizamos el artículo de la Ley 46 de 1956, sobre los presupuestos necesarios para enervar la acción de habeas corpus, salta a la vista que el requisito sine quanon que exige la Ley 46 de 1956, es la existencia de una detención. La legalidad o no de esta privación de la libertad la decidirá el tribunal de conocimiento.

De aquí que podemos concluir que a la sombra de la Ley 46 de 1956, será imposible que la acción de habeas corpus prosperará ante la mera expectativa de detención de la persona.

Este criterio cerrado y rígido, fue el dominante para la época, lo cual no permitía la concepción moderna y amplia que crea el habeas corpus preventivo.

Para dar muestra de la interpretación restrictiva para enervar la acción de habeas corpus, se necesita que el individuo estuviese detenido, citamos el criterio exteriorizado por la Corte en sentencia de enero de 1983:

⁽⁴⁴⁾ Registro Judicial Noviembre de 1963, p. 26

“ Aunque el Ingeniero Norberto Navarro, igual que el Arquitecto Morán y el Ingeniero Félix Lutrell, no han sido detenidos a la fecha, cierto es que sobre ellos gravita una orden ilegal o arbitraria de detención que los privaría de la libertad a que tienen derecho por no haber cometido en ningún momento ilícito que irresponsablemente se le imputa.”

En una atenta lectura de la Ley 46 de 1956, permite observar que para que este procedimiento opere y pueda ser admitido se requiere que el individuo o recurrente se encuentre – al momento de presentar el recurso- privado de su libertad”.⁽⁴⁵⁾

Sobre este tema podemos destacar que la Corte ha cambiado este cerrado criterio de que para admitir la acción de habeas corpus se requiere que la persona este detenida, por un criterio más de avanzada procesal y admite la acción, aun cuando la persona no haya sido detenida, pero existe una grave sospecha de que pueda ser detenido por orden ilegal.

C. EL HABEAS CORPUS EN PENAS ADMINISTRATIVAS, FALTAS Y CONTRAVENCIONES

La Ley 46 de 1956, en su artículo 3º, reproduce textualmente el artículo 2399 del Código Judicial vigente para la época, el cual extendió el mandamiento de habeas corpus a las personas sancionadas por faltas definitivas y castigadas

⁽⁴⁵⁾ Registro Judicial Enero 1983, p 62

en el Libro III del Código Administrativo, si la pena impuesta excedía de ocho días de prisión; al respecto el artículo 3° de la Ley 46 de 1956 rezaba así:

Artículo 3: El habeas corpus se extiende a las personas sancionadas por las faltas o contravenciones que define y castiga el libro III del Código Administrativo, si la pena impuesta excede de 15 días de arresto o confinamiento, o multa de quince balboas.

Cabe destacar que el artículo 2399 del Código Judicial vigente para la época, del cual fue tomado textualmente el referido artículo de la Ley 46 de 1956, fue declarado **"INCONSTITUCIONAL"** por la Corte Suprema de Justicia, por sentencia calendada 6 de octubre de 1956.

De igual manera y manteniendo el mismo criterio, la Corte en sentencia de 9 de noviembre de 1961 dijo:

"por donde se ve que el artículo 3° de la Ley 46 de 1956 infringe el 24 de la Carta Constitucional".⁽⁴⁶⁾

(46) Registro Judicial Noviembre de 1961. p. 22

D. CESE DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS Y RESPONSABILIDAD JUDICIAL DEL FUNCIONARIO QUE ORDENA LA DETENCION ILEGAL.

La forma excepcional de terminación del proceso de habeas corpus se da cuando la persona a nombre de quien se interpone la demanda, recupera de alguna forma la libertad; y sobre este aspecto el artículo 8º de la Ley 46 de 1956 inicia diciendo:

Artículo 8: El procedimiento de habeas corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa su libertad corporal, pero podrá el agraviado denunciar o acusar a la autoridad o funcionario que ordenó la detención, arresto o prisión arbitraria.

En una concepción procesal amplia podríamos decir por analogía que cesa la acción de habeas corpus por haberse sustraído la materia objeto de la acción, la cual es la detención, independientemente por cual razón procesal. En este tenor se pronuncia nuestro Primer Tribunal de Justicia en fallo de 15 de febrero de 1963, en respuesta a la acción de habeas corpus propuesta por el Doctor Carlos Iván Zúñiga, a nombre de José del Carmen Serracín cuando dijo:

Ahora bien, como de conformidad con el artículo 8º de la Ley 46 de 1956 sobre Instituciones y garantías, "el

recurso de habeas corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado por cualquier causa su libertad corporal...”.

El pleno de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara terminado todo procedimiento en este recurso, en vista de que el detenido había recuperado su libertad”.⁽⁴⁷⁾

Así pues, notamos que en la parte inicial del artículo 8º de la Ley 46 de 1956, se plasma el cese del proceso de habeas corpus, por aquella ficción procesal de que el fin garantizado en la norma se consiga sin la actuación coactiva de la norma.

El otro aspecto que regula el precitado artículo en su parte final, es la responsabilidad judicial que le corresponde a la autoridad que ordena la detención ilegal, aun cuando haya cesado la misma.

Sobre este tema se pronuncia la Corte en sentencia de 30 de mayo de 1962, cuando aclara:

“ Cuando la persona en cuyo favor se libró el mandamiento de habeas corpus, por cualquier causa, su libertad corporal, cesa más el procedimiento. El agraviado, empero, podrá denunciar o acusar a

⁽⁴⁷⁾ Repertorio Jurídico Febrero de 1963, p. 29

la autoridad o funcionario que ordenó la detención, arresto o prisión arbitraria.”⁽⁴⁸⁾

La Corte deja sentado el alcance de la norma en cuanto a la responsabilidad del funcionario que ordenó la detención ilegal, independientemente que la misma haya cesado.

El mismo criterio mantuvo nuestro máximo Tribunal de Justicia, cuando en sentencia de 12 de junio de 1964 dijo:

“ Por el sólo hecho de poner en libertad a la persona a quien se tiene detenida, antes de que el Juez de habeas corpus se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la detención, no exonera al funcionario que arbitrariamente privó a un ciudadano de su libertad”.⁽⁴⁹⁾

E. QUIEN PUEDE INTERPONER EL RECURSO (ACCION) DE HABEAS CORPUS.

Artículo 9: El recurso de habeas corpus puede interponerlo la persona agraviada o cualquier otra sin necesidad de poder. Dicho recurso podrá ser deducido verbalmente, por teléfono o por escrito y en él se hará constar:

⁽⁴⁸⁾ Registro Judicial Mayo de 1962, p. 37

⁽⁴⁹⁾ Registro Judicial, Junio de 1964, p. 12

1. Que la persona que hace la petición a favor de quien se hace, se halla privado de su libertad corporal; el lugar donde está detenido, presa o arrestada; el nombre de la corporación, autoridad o funcionario público por quien ha sido privada o restringida de dicha libertad, con mención del título oficial y de las referidas autoridades o funcionarios y sus nombres si los conoce y el nombre de la autoridad o agente de ésta que lo tenga bajo su poder o custodia;
2. La causa o pretexto de la detención, arresto o prisión, a juicio del propio agraviado o de la persona que habla en su nombre;
3. Breves consideraciones que expresen en qué consiste la ilegalidad que se aduce o invoca. En el evento de que el autor del recurso ignore alguna de estas circunstancias formales, deberá manifestarlo así expresamente.

Sobre este tema es de rigor hacer un alto para analizar la variación en cuanto al criterio de la Corte, de que puede solicitar la acción de habeas corpus.

El criterio que sostuvo la Corte en cuanto a quién podía solicitar el recurso de habeas corpus en los albores de los años cuarenta fue el siguiente:

“ El recurso de habeas corpus puede presentarlo cualquier persona a nombre de otra que ha sido detenida “fuera de los casos y las formas que prescriben la Constitución” y las leyes de la República. Pero mientras

esté vigente el artículo 1° de la Ley N1 58 de 1946 (relativo al ejercicio de la abogacía), el recurso debe promoverse “por intermedio de un abogado en ejercicio”. La misma naturaleza del habeas corpus justifica y hace conveniente la intervención de un profesional del derecho”.⁽⁵⁰⁾

Este criterio se mantuvo dominante hasta inicios de 1962, en cuanto a que la acción de habeas corpus se debía solicitar por medio de representante técnico, en concordancia con la Ley 58 de 1946, que regulaba la profesión de abogacía. La cual fue modificada por la Ley 51 de 1961 y cambia el criterio.

Posteriormente, este criterio rígido de la Corte es superado y domina la concepción de que “cualquier persona” puede solicitar la acción sin necesidad de representante técnico. Este nuevo criterio lo manifiesta la Corte en fallo de 11 de mayo de 1962 cuando aclaró:

“ Ha encontrado por un lado que la parte primera del artículo 24 de la Carta es terminante en cuanto se refiere a este último extremo; “cualquier persona” puede pedir a nombre de otra que se encuentra detenida fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley, que se le ponga en libertad. Y por otro lado, que no existe en el Título I de la Ley N° 46 mencionada

⁽⁵⁰⁾ Registro Judicial Mayo de 1961, p. 38

nada que, al reglamentar el habeas corpus en acatamiento al inciso final del artículo 24 de la Constitución, desconozca el derecho de "cualquier persona" a interponer ese recurso a nombre de otra, cuando considera que está detenida ilegalmente".⁽⁵¹⁾

Al hacer un análisis de los dos fallos de la Corte notamos como nuestro Máximo Tribunal cambia de un criterio formalista cerrado, de sólo permitir la acción de habeas corpus a los profesionales de la abogacía, en una interpretación rígida del artículo 1º de la Ley 58 de 1946. El cual es superado por una concepción procesal de avanzada, donde se nota la preponderancia del principio de Economía Procesal, y urgencia de la acción de habeas corpus.

F. REQUERIMIENTO DE LA COPIA AUTENTICADA DE LA ORDEN DE DETENCION PARA SOLICITAR EL RECURSO (ACCION) DE HABEAS CORPUS.

Si analizamos literalmente el artículo 10º de la Ley 46 de 1956, notamos que para fundamentar la acción de habeas corpus, es requerimiento en primera fase la orden de detención original, y en su defecto una copia autenticada de ello; así lo exige la norma cuando dice:

⁽⁵¹⁾ Repertorio Jurídico Febrero de 1963, p. 36

Artículo 10: Con el pedimento de habeas corpus debe acompañarse, si fuere posible, la orden original de detención, prisión o arresto, o en su defecto, una copia autenticada. En el caso de que la privación de la libertad corporal se hubiere ejecutado en virtud de alguna orden, auto o providencia se agregará una copia del mismo a la solicitud de mandamiento, a no ser que el recurrente asegure que por haber sido removida u ocultada la persona detenida o presa, o porque se le ha cambiado de cárcel, prisión o lugar donde estaba, o porque se ha ocultado la autoridad o funcionario que ordenó la detención, no pudo exigirse dicha copia, o que ésta se exigió y fue rehusada.

Sobre este particular la Corte en fallo de mayo de 1961, al resolver solicitud de habeas corpus del Doctor Secundino Torres Gudíño en representación de Leopoldo Rodríguez, dispuso:

“ Era obligación del abogado pedir la orden de detención y en caso de que no se diera, decir, en el escrito de habeas corpus que ésta se exigió y fue rehusada.”⁽⁵²⁾

No coincidimos con la posición sostenida por la Corte, toda vez que, si bien es cierto la norma lo exige, hoy en el Derecho Procesal Moderno, el Juez

⁽⁵²⁾ Repertorio Jurídico Mayo de 1961, p. 12

está investido de poderes extraordinarios que le permiten inclusive solicitar pruebas de oficio, consideramos que en este particular, sobre todo por tratarse de un aspecto probatorio, el Tribunal de Habeas Corpus, debió solicitarle a la autoridad que ordenó la detención que mostrara la orden original de detención.

Consideramos también que la no presentación con el título de solicitud, de la orden de detención debe explicarse exponiendo alguna de las razones que se mencionan en el inciso 2º del precitado artículo 10º, de la Ley 46 de 1956 y limitarse a decir "señalo que no acompaño la orden original de detención por el hecho de que la autoridad que la emitió no me la ha querido entregar".

G. INTERPOSICION DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS EN CUALQUIER MOMENTO.

El artículo N° 11 de la Ley 46 de 1956, sobre este aspecto dice categóricamente que:

Artículo 11: El recurso extraordinario de habeas corpus puede ser Interpuesto en todo momento y en cualquier día.

El criterio dominante siempre ha sido que la acción de habeas corpus no se suspende por fines de semana, ni por días feriados. Sin embargo, en la

práctica procesal, esta situación no se da, ya que el trámite se suspende el viernes a las 5:00 de la tarde y no se le da seguimiento a la solicitud hasta el lunes, salvo algunas excepciones donde el funcionario que conoce de la acción, le da seguimiento, sin importancia del día o la hora.

La Corte aborda este tema al referirse a una acción de habeas corpus cuyo edicto se desfijó un día inhábil, y sostuvo lo siguiente:

“ No vale alegar, para restarle valor a la notificación de una sentencia dictada en un recurso de habeas corpus, el hecho de que la desfijación del edicto se hizo en día sábado, cuando vacan los Tribunales, olvida el postulante que por la especialidad de las normas concernientes al habeas corpus, conforme a las cuales precisa actuar “en cualquier hora del día”, aunque sea feriado o de fiesta nacional.”⁽⁵³⁾

H. NECESIDAD DE LA ENTREGA DE UN INFORME ESCRITO, POR PARTE DEL FUNCIONARIO QUE ORDENO LA DETENCION.

Este requerimiento de la entrega de un informe por parte del funcionario recurrido con la acción de habeas corpus, está contenido en el artículo 18 de la Ley 46 de 1956 que decía así:

⁽⁵³⁾ Registro Judicial Agosto de 1962, p. 12

Artículo 18: Junto con la entrega de la persona detenida, la autoridad o funcionario a quien se dirige el mandamiento de habeas corpus debe presentar un informe escrito en el que claramente expresa:

1. Si es o no cierto que ordenó la detención del recurrente y de serlo, si la ordenó verbalmente o por escrito;
2. Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello;
3. Si tiene bajo su custodia o a sus órdenes de la persona que le ha mandado presentar y en caso de haberla transferido a otro, que indique exactamente a quién, en que tiempo y por qué causa.

La autoridad o funcionario demandado queda facultado para consignar en su informe cualquier otro dato o constancia que estime conveniente. Por otra parte, si el recurrente está detenido con base en algún auto, providencia u orden escrita, deberá agregar el original o una copia del Informe.

Con relación a este artículo, nuestro análisis de la jurisprudencia en materia de habeas corpus, encontramos que nuestra Corte Suprema de Justicia en fallo de 11 de mayo de 1962, con relación al informe escrito dijo:

“ De conformidad con la excerta en cita (artículo 18 de la Ley N° 46 de 1956) el funcionario queda facultado para consignar en su informe cualquier otro dato o constancia que

estime conveniente así como si el recurrente está detenido con base en algún auto, providencia u orden escrita, deberá agregar el original o una copia al informe y poner al detenido a órdenes de la Corte o entregarlo a ésta, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley que se deja citada.”⁽⁵⁴⁾

Para los procesalistas, este informe justificativo constituye la contestación de la demanda propiamente tal, y el mismo debe contener la confirmación o negación de la orden de la detención y los razonamientos jurídicos que la expliquen y la fundamenten, y al respecto, acompañar las constancias documentales que acredita la misma, o sea, copia certificada de las constancias procesales para apoyar dicho informe, o contestación de demanda.

I. SI EL DETENIDO ES PUESTO A ORDENES DE LA AUTORIDAD, EL MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS SE ENTENDERÁ LIBRADO CONTRA EL FUNCIONARIO QUE TENGA EL EXPEDIENTE

El mandamiento de habeas corpus una vez librado, seguirá la persona del detenido hasta donde se encuentre, para ponerlo en libertad, con independencia contra a que autoridad fue dirigida. Así se interpreta del artículo 24 de la Ley en estudio cuando dice:

⁽⁵⁴⁾ Repertorio Jurídico Mayo de 1962, p. 15

Artículo 24: Si al liberarse el mandamiento de habeas corpus la autoridad contra quien va dirigido pone o ha puesto a la persona detenida o presa a órdenes de otra autoridad o funcionario, dicho mandamiento automáticamente se considera librado contra este último, si el negocio continúa siendo del conocimiento del Juez de la causa. En caso contrario los autos serán enviados inmediatamente, sin dilación alguna, al Juez competente para que continúe la tramitación del caso y lo resuelva."

Al respecto del curso que debe tomar el libramiento de habeas corpus, si el detenido ya no está a órdenes de la autoridad a la cual se dirigió. La Corte Suprema de Justicia ha dicho:

" Aunque inicialmente no se enderece el habeas corpus contra un funcionario que tiene jurisdicción en toda la República, tan pronto como la persona privada de libertad es puesta a órdenes de un funcionario que tenga la amplitud de jurisdicción aludida, el caso debe pasar a la Corte, y se considera que el mandamiento de habeas corpus ya librado va dirigido contra dicho funcionario."⁽⁵⁵⁾

⁽⁵⁵⁾ Repertorio Jurídico Diciembre de 1961, p. 29

Notamos pues, como por una ficción de la Ley, si el detenido ha sido puesto a órdenes de otro funcionario distinto al que se le dirigió el libramiento debe entenderse que el libramiento fue dirigido a quien tiene a sus órdenes al detenido ilegalmente.

Igual criterio sostuvo la Corte en fallo de 12 de junio de 1964, cuando dijo:

“ Si al momento de informar el funcionario acusado indica que el detenido se encuentra a órdenes de otra autoridad, por haberlo dispuesto él así, el mandamiento de habeas corpus se entiende sin más librado contra la persona a quien le han pasado el caso.”⁽⁵⁶⁾

Desde un prisma estrictamente procesal, podríamos comentar que más que una ficción de la Ley, que sigue al detenido hasta donde esté, para que se le exija al funcionario competente que “muestre el cuerpo”, particularmente consideramos que lo que se da, es la aplicación directa del “Principio de economía Procesal”, ya que no tendría sentido que se ordenara la corrección de libramiento de habeas corpus, en razón de haber sido emitido contra una autoridad, ya que no tiene al detenido bajo su competencia. Lo lógico es que se envíe el libramiento a quien tenga al detenido y se haga caso omiso a los

⁽⁵⁶⁾ Repertorio Jurídico Junio de 1964, p. 34

aspectos formales, ya que lo que importa es la restauración de la libertad ambulatoria de la persona detenida ilegalmente.

J. LA SENTENCIA DE HABEAS CORPUS QUEDARA EJECUTORIADA 24 HORAS DESPUES DE DESFIJADO EL EDICTO.

Uno de los momentos procesales de mayor relevancia al solicitar la acción de habeas corpus, en cuanto queda ejecutoriada la resolución que ordena el libramiento. Este aspecto de procedimiento está regulado por el artículo 27 de la Ley 46 de 1956 que dice:

Artículo 27: Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de la audiencia, cuando ésta tenga lugar, o del recibo del Informe y la actuación, el Tribunal de Habeas Corpus deberá dictar la sentencia que se notificará inmediatamente por un plazo de 24 horas. La sentencia quedará ejecutoriada pasada la hora subsiguiente a la desfijación del edicto en referencia.

Notamos pues los aspectos característicos de la sumaria del proceso de habeas corpus, cuya notificación de la sentencia que libra el habeas corpus, se da por edicto, el cual se fija por sólo 24 horas y una hora después queda en firme.

Así lo ha dejado sentado nuestra Corte Suprema de Justicia cuando en fallo de 6 de junio de 1962 dijo:

“ La sentencia que recae en un recurso de habeas corpus se notifica por medio de edicto que será fijado inmediatamente después de dictada, por un plazo de veinticuatro horas, y aquella quedará ejecutoriada pasada la hora subsiguiente a la desfijación del edicto.”⁽⁵⁷⁾

K. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS.

Las principales críticas que le hacen los procesalistas a la acción, es que no tiene un Tribunal competente básico, sino que el mismo varía según el mando y jurisdicción de la autoridad que dicte la orden de detención. Así lo exige el artículo 38 de la Ley 46 de 1956, que reza así:

Artículo 38: Son competentes para conocer del recurso de habeas corpus:

- a) El pleno de la Corte Suprema de Justicia por actos que procedan de autoridades o funcionarios con jurisdicción en toda la República o en dos o más Provincias que no forme parte de un mismo Distrito Judicial;**

⁽⁵⁷⁾ Repertorio Jurídico Junio de 1962, p 31

- b) Los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales por actos que procedan de autoridades o funcionarios con jurisdicción en una Provincia o en dos o más que formen parte del respectivo Distrito Judicial;**
- c) Los Jueces de Circuito en el ramo de lo penal, por actos que procedan de autoridad o funcionarios con jurisdicción en un Distrito de su circunscripción;**
- d) Los Jueces Municipales que actos que procedan de autoridades o funcionarios con jurisdicción parcial en el Distrito.**

Si analizamos el precitado artículo, podríamos sostener que la Ley mantiene un criterio subjetivo con atención al Tribunal que emite la orden, en cuanto a la calidad de funcionario que es, o en cuanto a su mando o jurisdicción en el territorio nacional.

Sobre el tema de la asignación de la competencia en el proceso de habeas corpus, la Corte aclara:

“ Entiende la Corte que a ella le compete el conocimiento de un recurso de habeas corpus enderezado contra un funcionario que tiene a su cargo la “Vigilancia de Contrabando y Defraudación Fiscal” en el sentido que a esa labor se le asigna en el Decreto-Ley N° 12 de 17 de junio de 1958, por medio del cual se creó el Departamento aludido y cuya jurisdicción, por razones

obvias, se extiende a todo el territorio de la República.”⁽⁵⁸⁾

Nuestro Máximo Tribunal de Justicia reafirma el procedimiento que establece la Ley 46 de 1956, para adscribir la competencia al Tribunal de habeas Corpus atendiendo a un criterio subjetivo, del funcionario que ordena la detención, manteniendo de este modo un criterio de competencia dinámico, variable, no estático.

Igual criterio sostiene la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 23 de septiembre de 1963, cuando al referirse a la competencia dijo:

“ En los recursos de habeas corpus interpuestos a favor de persona detenida por un funcionario “con jurisdicción en una provincia o en dos o más que forman parte” de un Distrito Judicial, la competencia corresponde al respectivo Tribunal Superior.”⁽⁵⁹⁾

VII. CONSTITUCION POLITICA DE 1972

Antes de entrar a analizar la Carta Política de 1972, es imperativo ubicarnos en el tiempo y en el espacio, en que nace este nuevo ordenamiento constitucional, que reemplaza la Constitución de 1946.

⁽⁵⁸⁾ Repertorio Jurídico Febrero de 1962, p. 18

⁽⁵⁹⁾ Repertorio Jurídico Septiembre de 1963, p. 52.

Como quiera que a través de la historia las Constituciones han respondido a las fuerzas reales de poder, y en este momento de nuestra historia, el poder político quedó en manos de un grupo de oficiales de la entonces llamada Guardia Nacional, jefaturada por el Coronel Omar Torrijos Herrera, instaurándose en nuestro país un gobierno de facto, el cual, tratando de justificar su esencia golpista, crean mediante el Decreto de gabinete 214 de 1971, una Comisión de Reformas a la Constitución Nacional de 1946, lo que resultó en la práctica la elaboración de un cuerpo constitucional nuevo.

Para describir dogmáticamente la Constitución de 1972, resulta obligatorio esgrimir la opinión de nuestro Máximo exponente del Derecho Constitucional, el Doctor César Quintero, quien en su ensayo titulado "La Jurisdicción Constitucional en Panamá", comenta sobre la Constitución de 1972, lo siguiente:

" El Estatuto de 1972 es el más atípico y peculiar que haya regido en Hispanoamérica. No sólo instituyó de manera formal y expresa un sistema militar de gobierno, son que atribuyó poderes extraordinarios, a título personal, al General Omar Torrijos, a quien tituló "Líder Máximo de la Revolución Panameña". Además, creó..., el Organo Legislativo más anómalo y más supeditado al Ejecutivo que pueda concebirse. Asimismo, transformó y

desnaturalizó la universal doctrina de la separación de los poderes...^{m(60)}

Luego de la demarcación del escenario jurídico-político en que nace la Constitución Política de 1972, el cual con el arribo de los militares al poder, se transformó el estado panameño y se produce una trasposición jurídica de los fundamentos más básicos del estado de Derecho.

Sobre el tema que nos interesa en cuanto a las modificaciones que sufrió la figura del habeas corpus en esta nueva Carta Política, fue regulada en el artículo 23 de la Constitución que reza así:

Artículo 23: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante el recurso de habeas corpus que podrá ser interpuesto inmediatamente después de la detención y sin consideración de la pena aplicable. El recurso se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles.

Si analizamos la relación del precitado artículo, notamos que se elimina el término de 24 horas establecido por la ley 46 de 1956, para su interposición y

⁽⁶⁰⁾ QUINTERO, César Op Cit., p 54 y 55

viabilidad. Sobre este tema se refiere nuestro profesor de Maestría y Director de este trabajo, el Doctor Edgardo Molino Mola, cuando en su reciente obra "La Jurisdicción Constitucional en Panamá" (En un estudio de Derecho Comparado), comenta:

" La Constitución de 1972 agregó un aspecto muy importante, al establecer, que el habeas corpus "podrá interponerse inmediatamente después de la detención", aclarando el hecho de no tener que esperar 24 horas, para interponer el habeas corpus, que era el plazo que se daba para poner al detenido a órdenes de la autoridad competente, y que en la práctica resultaba que cualquiera podía ser privado de su libertad durante 24 horas, sin derecho a habeas corpus. Sólo después de este término existía la obligación de ponerlo a órdenes de la autoridad competente, lo que trajo el abuso de muchas detenciones durante este plazo de 24 horas".⁽⁸¹⁾

Así queda aclarado que para la interposición de la acción de habeas corpus, está superado aquello de que hay que esperar 24 horas después de la detención, para solicitarlo, salta a la vista con claridad meridiana, luego de esta aclaración, que a la sombra de la Constitución de 1972, la acción de habeas corpus se solicita inmediatamente luego de que se da la detención ilegal.

⁽⁸¹⁾ MOLINO MOLA, Edgardo LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN PANAMA. (En un Estudio de Derecho Comparado). Editorial Biblioteca Jurídica Dike, Medellín – Colombia, 1ra Edición, 1998, p 513

También sobra las modificaciones sufridas por la institución de habeas corpus, al tenor de la Carta Política de 1972, el procesalista panameño Silvio Guerra Morales en su obra "Instituciones de Derecho Penal y Procesal Penal", hace las siguientes críticas en torno a la acción de habeas corpus, dice: "Al respecto del texto constitucional hacemos las siguientes observaciones:

Se hace referencia única y exclusivamente a la detención y no así a la prisión, ello es perfectamente entendible, por cuanto la prisión es una pena principal consagrada en el Código Penal de modo tal que, ante la existencia de una pena de prisión, no cabe interponer la acción de habeas corpus, pues se presupone que hay una sentencia de condena firme y ejecutoriada con carácter de cosa juzgada. Ante ese evento caben otros remedios: los recursos extraordinarios de casación y revisión penal. Aunque esto merece mayor análisis.

Se continúa denominando el habeas corpus con el nombre de recursos, aunque la consagración, a nivel constitucional de su carácter de procedimiento sumarísimo, evidencia que se trata de una acción.

Se hace de la acción de habeas corpus una acción eminentemente formalista en lo que respecta a su estudio o valoración judicial, lo mismo que a su resolución. Ahora bien, ello no obsta para que dentro de esa revisión de forma se analice una serie de elementos que, indefectiblemente, hacen relación a cuestiones de fondo".⁽⁶²⁾

(62) GUERRA MORALES, Silvio INSTITUCIONES DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Editorial Lerner, San Fé de Bogotá – Colombia, 1994, p. 197 y 198

El Profesor Guerra resalta algunas imprecisiones procesales, dentro del entorno de la caracterización democrática de la pena de prisión, además el jurista ataca la imprecisión mantenida por la Carta Política de seguir llamándole **"recursos"** de habeas corpus, cuando el ala dominante de la doctrina ha demostrado que se trata de una acción, y finaliza criticando su carácter excesivamente formalista.

A. ACTO REFORMATARIO DE 1978

La Constitución de 1972, sufrió modificaciones en el mes de octubre de 1978, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial # 18704 de 16 de noviembre de 1978, dentro de las cuales no se modificó el artículo 22, que contiene la figura del habeas corpus, objeto de este trabajo recopilatorio.

VIII. EL ACTO CONSTITUCIONAL DE 1983

Estas reformas cambiarán totalmente la Constitución de 1972, razón por la cual muchos Constitucionalistas, atinadamente prefieren llamar a estas modificaciones, Constitución de 1983; además de señalar ciertos cambios de índole procesal, también introdujo por primera vez en nuestra tradición constitucional, los llamados derechos del Detenido, contenidos en el artículo 22

de esta Carta Política sobre estas modificaciones nuestro Maestro, el Magistrado Molino Mola, comenta:

“ Las reformas constitucionales de 1983 cambiaron casi por completo la Constitución militarista de 1972. En cuanto al habeas corpus se refiere, el artículo constitucional correspondiente fue integrado con conceptos que se establecían en la Ley 46 de 1956, como la sumariedad y preferencia en el manejo de dicho proceso, así como que éste era ininterrumpido, por razones de horas o días inhábiles. Este era el artículo 23, que es hoy día el vigente, ya que las reformas constitucionales de 23 de agosto de 1994, publicada en la Gaceta Oficial N° 22.792 de 2 de junio de 1995, no lo modificaron”.⁽⁶³⁾

Notamos como el artículo 23 de la Constitución vigente, producto de las reformas de 1983, que revestido de características procesales, como la Sumariedad, la Economía Procesal, Celeridad Procesal, para quedar así:

Artículo 23: “Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona mediante el recurso de habeas corpus que podrá ser interpuesto inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable. El recurso se tramitará con prelación a otros casos mediante procedimiento

(63) MOLINO MOLA, Edgardo Op. Cit., p. 512

sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles."

En un simple análisis notamos que la norma constitucional vigente contiene conceptos claros como cuando dice **"todo individuo detenido"**, debemos entender que se trata de todos los que estén en un momento dado bajo el impeno de la Ley Nacional, ya sea, panameño por nacimiento, naturalización o extranjero. De igual forma, cuando la norma dice **"fuera de la los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley"**. Esto se refiere a que cualquier detención preventiva que se decrete, que no se ajuste a la norma adjetiva que regula la materia, dará lugar a la acción de habeas corpus, cabe advertir que existen delitos que tienen fijada pena mínima menor de 2 años, por cuya comisión no procede detención preventiva; de igual modo, cuando proceda la detención, ésta debe cumplir rigurosamente los requisitos formales que exige la Ley como lo son: a) mandamiento escrito, b) que sea expedido por autoridad competente c) que cumpla la forma legal.

Otro aspecto de trascendencia de la norma constitucional vigente que regula el habeas corpus es cuando dice: **"será puesto en libertad a petición suya o de otra persona"**, queda aclarado que no se necesita abogado para solicitar la acción de habeas corpus, y la puede solicitar el mismo imputado, cualquier persona interesada o un representante técnico, lo cual no es un requisito sine – quanon. También manifiesta taxativamente la norma, **"que**

podrá ser interpuesto inmediatamente después de la detención", dejando sin efecto aquella práctica ya superada de que había que esperar 24 horas después de la detención, para interponer la acción de habeas corpus, y continúa diciendo el **artículo "sin consideración a la pena aplicable"**, párrafo este que responde a la eliminación de aquella concepción absurda ya superada, de que no se podía interponer el recurso de habeas corpus para penas administrativas que no fueran mayores de 8 días, lo que constituía una antítesis al espíritu de la acción de habeas corpus.

Finalmente, la norma constitucional termina elaborando dos principios procesales que distinguen el proceso moderno cuando dice **"el recurso se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumario"**, donde el legislador le imprime a la norma los rigores de principio de economía procesal, dándole un trato especial de celeridad procesal, y lo conduce por medio de un proceso abreviado. Y la norma concluye diciendo, **"sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles"**, dándole un máximo de celeridad procesal que por ficción legal, habilita la competencia del Tribunal de Habeas Corpus, aun cuando éste se encuentre en cesantía por razones de horario o días inhábiles, exigiéndole la magnificencia de la sumariedad procesal de carácter ininterrumpida.

CAPÍTULO TERCERO

ASPECTOS PROCESALES CARACTERISTICOS DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS, REAFIRMADOS POR LA JURISPRUDENCIA DE NUESTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

“Los preceptos constitucionales no sólo pueden ser violados por disposiciones de la Ley, o del reglamento, sino que pueden serlo también y frecuentemente lo son, por disposiciones u ordenes absurdas de las autoridades o funcionarios públicos atentatorias de la libertad de las personas”

José Dolores Moscote

I. LA NORMA PROCESAL VIGENTE EN MATERIA DE HABEAS CORPUS

Al concluir el Capítulo Tercero, analizamos los aspectos más trascendentales comentados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley 46 de 1956, la cual con la entrada en vigencia del Nuevo Código Judicial en abril de 1987, se incorporó como parte de este cuerpo legal la totalidad de la Ley 46 de 1956, la cual fue absorbida y plasmada en el Libro Cuarto del Nuevo Código, denominado **INSTITUCIONES DE GARANTÍAS**, Título II, a partir del artículo 2565 al 2605, donde se le hicieron algunas modificaciones de redacción y estilo, por parte de la Comisión Legislativa que revisa estos aspectos, y que además fueron ajustados algunos vocablos procesales modificados y ciertos términos procesales, lo trascendental de esto es que el espíritu de la Ley 46 de 1956, quedó recogido íntegramente por nuestros codificadores y fue incorporado al cuerpo legal adjetivo vigente.

Para los efectos prácticos vale la pena resaltar que los postulados sentados por nuestra Corte Suprema de Justicia, comentados en el capítulo anterior, con respecto a la Ley 46 de 1956, tienen plena vigencia a la luz de los artículos del Código Judicial Vigente con relación al Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus.

1.- En materia de Habeas Corpus la Ley 46 de 1956 contenía 42 artículos. El nuevo Código Judicial le dedica a este tema 41 artículos que van desde el 2565 hasta el 2605.

2.- La Ley 46 de 1956 se dividía en capítulos, mientras que el Código lo hace en secciones.

3.- La Constitución Nacional denomina como "recursos" tanto al Habeas Corpus como al Amparo de Garantías Constitucionales. La Ley 46 de 1956 que desarrolla el postulado constitucional utiliza igual denominación.

El nuevo Código Judicial califica al Habeas Corpus y al Amparo de Garantías Constitucionales como "acción" o "demanda". Sin embargo, el Código habla de "interposición de la demanda". Vale la pena aclarar que si bien es cierto que un "recurso" se interpone, una "acción o una demanda" se propone o se formaliza, pero jamás se interpone, incurriendo aquí el Código en una incongruencia procesal, ya que si el Código Judicial Vigente aclara la concepción procesal del habeas Corpus como una "acción", debe corregir igualmente su redacción cuando habla de la interposición de la acción, debe referirse a la proposición o formalización de la acción, ya que esta no se interpone, pues lo que se interpone es un "recurso".

4.- Cuando el artículo 2º de la Ley 46 de 1956 que en su parte inicial dice:

Artículo 2.- Para los efectos del artículo anterior se consideran además como actos sin fundamento legal:

a).La detención de un individuo como merma de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución; (lo subrayado es nuestro).

Obviamente la norma se refería a la Constitución de 1946, la cual, esta adjetivamente la desarrollaba. Curiosamente al transcribirse textualmente la norma por el codificador en un texto único contenido en el nuevo Código Judicial, corresponde por casualidad, igualmente al artículo 22 de la Constitución de 1972, reformado en 1983, el tema de la Privación de la Libertad, pero no consta en las actas de diario debate de la Asamblea Legislativa que los codificadores hubiesen hecho tal salvedad, la cual queda textual como en la norma de 1956, y su concordancia con la Constitución Vigente, se da por mera casualidad conveniente.

5.- El artículo 3 de la Ley 46 de 1956 establece que el habeas corpus se extiende a las personas sancionadas por las faltas o contravenciones que define y castiga el Libro III del Código Administrativo, si la pena impuesta excede de 15 días de arresto o de confinamiento, o multa de quince balboas.

El nuevo Código Judicial, con buen criterio, se refiere en este caso a "las faltas o contravenciones que define y sanciona las leyes y reglamentos de policía", cuando en su artículo 2567 establece claramente que:

Artículo 2567: “El habeas corpus se extiende a las personas sancionadas por las faltas o contravenciones que definen y sancionan las leyes o reglamentos de policía. (lo subrayado es nuestro)

6.- El artículo 6 de la Ley 46 permite que la orden de detención sea verbal “sólo en casos urgentes”, agregando que ella debe ser expedida por escrito y entregada por la autoridad competente dentro de las 24 horas siguientes a la detención, arresto o prisión.

El nuevo Código Judicial elimina del todo la posibilidad de una orden de arresto verbal y lo deja plasmado en el artículo 2568 de la norma adjetiva vigente que in verbis dice:

Artículo 2568: La autoridad que ordene la detención de alguna persona o que la prive de la libertad corporal, debe hacerlo por escrito, exponiendo la causa que la motiva. Los autores o ejecutores de la privación de la libertad están obligados a dar inmediatamente copia de la orden de detención a los interesados, si la pidieren (lo subrayado es nuestro).

Notamos que la norma vigente es radical en cuanto a la eliminación de la posibilidad de que la orden de detención sea verbal, ni siquiera en casos de urgencia.

7.- El artículo 6º de la Ley 46 de 1956 se inicia diciendo:

Artículo 6. Hasta donde sea posible,
“el tribunal que conozca de un
recurso de habeas corpus se
mantendrá en audiencia permanente
durante todo el procedimiento y sólo
entrará en receso para acordar y
expedir la sentencia que le ponga fin.
Tanto los actos de las partes como la
situación del tribunal se llevarán en
papel simple o común. (lo subrayado
es nuestro).

El Código Judicial Vigente mantiene casi textual el artículo de la norma de 1956 en el artículo 2570, pero eliminándole la frase inicial “Hasta donde sea posible”. Haciendo más categórico y dándole mayor fuerza coercitiva al Tribunal de Habeas Corpus, en cuanto a su obligación de mantenerse en audiencia permanente, incluso después del cierre de los despacho, los fines de semana, y días feriados, mandato este que no se cumple.

8.- La Ley 46 de 1956, incurrió en el error gramatical de separar por la conjunción “o” las palabras autoridad o funcionario o particular, cuando en su artículo 7º decía:

Artículo 7: Toda autoridad o funcionario o particular, cuya cooperación fuere requerida por el Juez de Habeas Corpus deberá presentarla sin dilación y tendrá preferencia sobre cualquier otro asunto a fin de que el recurso no se paralice en ningún momento ni por ninguna causa. (lo subrayado es nuestro)

El codificador en el Código Judicial Vigente, en su artículo 2571, corrige esta imprecisión gramatical que se prestaba a retorcidas interpretaciones, y elimina la conjunción "o" entre las palabras "funcionario" y "particular".

9.- La Ley 46 de 1956, en su texto original decía en su artículo 8º lo siguiente:

Artículo 8: El procedimiento de Habeas Corpus cesa una vez que el "delito" haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal, pero podrá el agraviado denunciar o acusar a la autoridad o funcionario que ordenó la detención, arresto o prisión arbitraria. (lo subrayado es nuestro).

Aun cuando en diferentes ocasiones la Corte Suprema de la Epoca aclaró la impresión lingüística, y que debería leerse Detenido, situación que llevó a corregir algunos textos posteriores de la Ley 46. El Codificador del Código Judicial Vigente corrigió este error y reemplazó "Delito" por Detenido, toda

vez que en el artículo 2572 del Código de Procedimiento Vigente que absorbió la Ley 46 de 1956, se lee el "Detenido".

10.- El Código Judicial al absorber la Ley 46 de 1956, como texto único en la codificación de 1987, crea el artículo 2576 que dice:

Artículo 2576: Presentada la demanda, el Tribunal competente deberá conceder el mandamiento de Habeas Corpus Inmediatamente, siempre que la petición se ajuste a las formalidades requeridas en estos artículos. Por tanto, en el auto en que se libra el referido mandamiento debe dejarse constancia de que queda acogida la demanda. (lo subrayado es nuestro)

Si analizamos la precitada norma notamos que cuando esta dice "se ajuste con las formalidades requeridas en estos artículos". La misma no indica a que artículos debe ajustarse la petición, lo que la convierte una norma formal hacia el infinito, sin delimitar cuáles formalidades. Pero curiosamente el único artículo que indica algún tipo de formalidades para la petición es el artículo 2573, razón por la cual cuando se lee este artículo debe entenderse "se ajuste a las formalidades requeridas en el artículo 2573 de este Código".

11.- El artículo 20 de la Ley 46 de 1956 dispone que la persona detenida y puesta a ordenes del Tribunal de habeas Corpus, "puede refutar oralmente los hechos y demás circunstancias que constan en el informe..."

El Código Judicial Vigente en su artículo 2584, hace extensivo este Derecho al apoderado judicial cuando dice:

Artículo 2584: La persona detenida una vez entregada y puesta a órdenes del funcionario judicial que conoce el Habeas Corpus, puede refutar oralmente, por sí mismo o por medio de apoderado, los hechos y demás circunstancias que constan en el informe o alegar otras, con el fin de aprobar que su detención o prisión es ilegal y que, por tanto, es acreedora a que se le ponga en libertad. De esta diligencia se dejará constancia escrita la cual se agregará a los autos. (lo subrayado es nuestro).

Notamos pues que el Código Judicial Vigente agrega al texto de la Ley 46 de 1956, que este derecho lo puede ejercer el detenido "por sí mismo o por medio de apoderado".

12.- En cuanto al término probatorio, la extinta norma de 1956, en su artículo 25º, establecía que las pruebas se practicarían en la audiencia, y que si fuese necesario un término para que ellas se practiquen, "se concederá uno

que no pase de 24 horas, salvo que la persona privada o restringida en su libertad corporal, solicite otro mayor.

El artículo 2589 del Código Judicial Vigente ordena que este plazo mayor, "no podrá exceder de setenta y dos horas", cuando añade esta frase a la parte final del artículo transcrito textualmente del 25 de la ley de 1956, así la norma codificada vigente añade y dice:

Artículo 2589: Además de las pruebas que pueda suministrar el interesado, en toda acción de Habeas Corpus el reclamante puede aducir las pruebas que estime necesarias. La autoridad o funcionario demandado puede también, al contestar la demanda, aducir las que estime conducentes.

El Juez dispondrá lo conveniente para que las pruebas aducidas se practiquen en la audiencia, con la oportunidad debida. Si fuere necesario un término para la práctica de ellas, se concederá uno que no pase de veinticuatro horas, salvo que la persona privada o restringida en su libertad corporal solicite otro mayor, el cual no podrá exceder de setenta y dos horas. (lo subrayado es nuestro)

13.- El artículo 27 del texto original de la Ley 46 de 1956, decía que:
"dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de la audiencia,

cuando esta tenga lugar, o del recibo del informe y la actuación, el Tribunal de Habeas Corpus deberá dictar la sentencia..."

Este mismo artículo también establece que la sentencia se notificará por edicto, el cual será fijado inmediatamente por un plazo de 24 horas.

El nuevo Código Judicial de 1987, cambia el término de 24 horas para dictar sentencias, y establece que la misma se debe dictar "inmediatamente" después de la audiencia, así lo recoge el inicio del artículo 2591 del Código Judicial que dice:

Artículo 2591: Inmediatamente
después de terminada la audiencia,
cuando ésta tenga lugar, o del recibo
del informe y la actuación, el Tribunal
de habeas Corpus deberá dictar la
sentencia, la cual notificará por
medio de edicto. Este edicto será
fijado inmediatamente por el plazo de
cuarenta y ocho horas. La sentencia
quedará ejecutoriada pasada la hora
subsiguiente a la desfijación del
edicto en referencia.

Salta a la vista que la norma procesal vigente, modifica el texto de la Ley anterior, y reduce el término de "24 horas después de la audiencia", por un término expedito que dice "inmediatamente después de la audiencia".

También la norma vigente aumenta el plazo de fijación del edicto que notifica la sentencia de 24 horas a 48 horas.

14.- El artículo 30 de la Ley 46 de 1956 dispone textualmente que "quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandamiento de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos".

El Código Judicial Vigente, recoge este artículo en el 2595 y dice:

Artículo 2595: Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandato de Habeas Corpus, no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten. (lo subrayado es nuestro)

Notamos pues, que la norma adjetiva vigente, cambia la redacción, final del artículo de la norma de 1956, por la frase, "salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten.

Consideramos que el texto original de la norma de 1956, era más específico, y tenía mayor trascendencia procesal.

Nosotros preferimos la redacción que tenía el texto original del proyecto del Código que terminaba diciendo; "salvo que se presenten pruebas posteriores

distintas que confirmen la existencia del hecho que dio lugar a la detención original”.

15.- El artículo 34 de la Ley 46 de 1956, decía que “Todas las providencias verbales o escritas que dicten los Tribunales en esta clase de asuntos quedarán ejecutoriadas en una hora después de haber sido puestos en conocimiento de los interesados...” El Código Judicial Vigente al incorporar la Ley 46 de 1956, en un texto único lo cambia en su artículo 2598, que inicia modificado inicia diciendo:

Artículo 2597: Todas las órdenes o disposiciones impartidas por el funcionario judicial que conoce el Habeas Corpus, deberán ser acatadas de Inmediato por la autoridad o funcionario a quien van dirigidas. (lo subrayado es nuestro)

La citada norma del Código Judicial, sustituye la frase inicial “Todas las providencias”, por la frase “Todas las órdenes”, ya que en materia procesal, por todos es sabido que las providencias son resoluciones judiciales de mero trámite, mientras que las órdenes son resoluciones de imperativo cumplimiento, cuando emergen de autoridad competente, como lo es el tribunal de habeas Corpus.

16.- El Codificador del nuevo Código Judicial eliminó el texto del artículo 39 de la Ley 46 de 1956, que contenía sanciones por razones de formalizar acciones de Habeas Corpus temerarias cuando decía:

Artículo 39: Siempre que en la ventilación de un Habeas Corpus se resuelva que es legal la detención, prisión o arresto y fuere manifiesta la temeridad de la pretensión el juez o tribunal aplicará una multa de B/ 10.00 a B/ 100.00 convertibles en arresto.

Esta multa deberá ser satisfecha dentro de un término de cuarenta y ocho horas contadas desde la fecha de la notificación de la sentencia que decide el recurso. Pasado este término sin que se produzca dicho pago, el funcionario o fiscal que corresponde según el caso, hará efectivo el valor de dicha multa, haciendo uso, si fuere necesario, de la jurisdicción coactiva.

17. No entendemos porqué el Codificador, eliminó el artículo 39 de la Ley de 1956, ya que en la práctica es necesario una norma coercitiva, para todo aquel que promueva acciones de Habeas Corpus Temerarias, y vulnere el sagrado principio de Economía Procesal.

**II. ASPECTOS PROCESALES DE MAYOR TRASCENDENCIA,
ESGRIMIDOS POR LA JURISPRUDENCIA NACIONAL.**

**A. NO CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS
CALIFICAR LA INVESTIGACION REALIZADA, SOLO LE
CORRESPONDE CONSTATAR SI LA PRIVACION DE LA
LIBERTAD ES LEGAL O ILEGAL.**

Así le manifiesta la Corte Suprema de Justicia en fallo de 9 de junio de 1992 al resolver el recurso de habeas corpus presentado por los Abogados Francisco Zaldivar, Silvio Guerra Morales y José Pío Castellero, contra la orden de privación de libertad dada por el Director General de Aduanas, contra DIVALDO CANO SAAVEDRA, Magistrada Ponente: Aura Emérta de Villaláz.

“ No corresponde a la Corte la calificación de la investigación aduanera realizada con motivo del presente caso, ni mucho menos señalar de manera específica cuáles son las normas en las que se encuadra la conducta imputada a DIVALDO CANO SAAVEDRA, porque el recurso de habeas corpus limita la competencia de este tribunal a constatar si la privación de libertad se llevó a cabo con la incurrencia de los requisitos de Ley, esto es, si el hecho cometido o imputado general la medida cautelar de detención preventiva y si esa detención con la suma de las formalidades que señala

la Constitución y la Ley. Sobre este particular y reiterando los conceptos emitidos en los fallos anteriores los conceptos emitidos particular y reiterando los conceptos emitidos en los dos fallos anteriores, el Pleno considera que DIVALDO CANO SAAVEDRA fue detenido por autoridad competente, por conducta descrita como delito por la Ley que regula el contrabando y la defraudación aduanera, tal detención se fundamentó en la providencia de 29 de febrero de 1992 y la legalidad de la misma ha sido objeto de valoración por esta Corporación Judicial, arribando a la misma conclusión. Si llama la atención el hecho del tiempo transcurrido superior a dos meses, lo que obliga a la toma de una decisión sobre el mérito de la investigación realizada en la jurisdicción especial que corresponde.

La Corte comparte el criterio de Hernández Valle, cuando en su conocida obra sobre la Tutela de los Derechos Fundamentales, señala que después del derecho a la vida como fin primario, fuente de todos los derechos, se encuentra el de la libertad personal, por ello las "restricciones a este derecho deben hacerse mediante garantías procesales específicas, por la importancia del bien jurídico titulado". Entre nosotros, a pesar de las reformas constitucionales y legales que se han dado en el presente siglo sobre esta materia, el habeas corpus surge como una garantía procesal contra las detenciones arbitrarias o ilegales, dándose así la modalidad clásica de habeas corpus reparador, que contempla de manera expresa el artículo 2565 del Código Judicial, al

otorgar esta garantía a "todo individuo detenido fuera de los casos y formas que prescribe la Constitución y la Ley".

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPRENA, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de DIVALDO CANO SAAVEDRA y dispone que sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección General de Aduanas." (64)

En esta sentencia se resuelve la acción de habeas corpus interpuesta por tercera ocasión, a favor de DIVALDO CANO SAAVEDRA, quien se encontraba detenido por orden del Director General de Aduanas, por considerarlo infractor de las normas de la Ley que regula el contrabando y la defraudación aduanera describe como delito.

Es así que la Corte Suprema de Justicia reafirma en este fallo el reiterado concepto de que al resolver el recurso de habeas corpus no corresponde a la Corte calificar la investigación realizada, ni señalar cuáles son las normas específicas en que se encuadra la conducta imputada, sólo corresponde al Tribunal constatar si la privación de la libertad se llevó a cabo con los requisitos que la Ley determina. Sin embargo, antes de valorar el hecho de que la detención se haya llevado o no con la concurrencia de los requisitos de ley, es decir, que la orden fuera emitida por autoridad competente, por escrito y que se

(64) Registro Judicial Junio de 1992, p. 136-139

trate de la violación de una norma que tipifica una conducta delictiva, cabe destacar que existe un elemento precalificador que descarta la aplicación de la detención preventiva, aun cuando concurren los elementos antes señalados, y es que el hecho cometido, por la gravedad de la pena mínima (más de dos años) genere la medida cautelar de detención preventiva.

En el examen de este habeas corpus, no coincidimos con la opinión de la Corte, ya que si la pena mínima aplicable a la conducta, en caso de erigirse en delito, no supera los dos años tal cual lo dispone la interpretación a contrario sensu del artículo 2159 del Código Judicial, no debió aplicarse la abusada institución de la detención preventiva y en consecuencia el habeas corpus como acción tuteladora del segundo bien más preciado del ser humano, debió haber concedido la libertad del encartado.

B. VIOLA LA LEALTAD PROCESAL Y EL PRINCIPIO DE CONTRADICTORIO, LA FALTA DE MATERIAL PROBATORIO QUE JUSTIFIQUE LA DETENCION PREVENTIVA.

La Corte Suprema de Justicia en fallo de 29 de junio de 1992, caracteriza los siguientes aspectos procesales en materia probatoria.

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR REYNALDO ANTONIO VALENCIA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. (MAGISTRADO PONENTE: JOSE MANUEL FAUNDES).

“No puede decretarse la detención de una persona si al proceso no se allega, por los medios comunes de prueba, los elementos o circunstancias previstos en el artículo 2159 del Código Judicial, aunque tales circunstancias sean del conocimiento personal del funcionario de instrucción. Y es que si desde el momento de la detención o de la indagatoria el imputado puede proponer la práctica de prueba que le son favorables (Artículo 2038 y 2123 del Código Judicial), el objetivo de que se señalen cuáles son los medios de prueba en que se sustenta la detención no puede ser otro que el brindarle al imputado desde ese momento el derecho de aportar pruebas para contradecir aquellas que han servido para formularle cargos, y de este modo establecer desde ese preciso instante el contradictorio.

Por consiguiente, nada más lesivo al derecho de defensa del sindicado puede ser el hecho de que no se expresen en la resolución que decreta la detención las pruebas en que tal medida cautelar se fundamenta. Con una omisión de esta índole, además de ser evidentemente ilegal el acto privativo de la libertad, se coarta igualmente el derecho a la contradicción y se cae en violación de aquella lealtad procesal, que también le incumbe al Ministerio Público como parte del proceso penal.

Por otro lado ERIBERTO ARCIA FRIAS, en la diligencia indagatoria rendida el 19 de junio de este año, reconoció haberse apoderado de la sala de Guardia de la Policía de balboa, pero trató de justificar su

proceder manifestando que su acción fue mas bien una protesta simbólica. En ese mismo acto, expresó que el señor Valencia "nada tiene que ver con mi acción".

Frente a este testimonio de exclusión de responsabilidad y frente a las consideraciones expuestas anteriormente, estima el Pleno que la detención preventiva imputada resulta a todas luces ilegal. Esto es, claro está, sin perjuicio de que con posterioridad se descubran nuevos hechos que justifiquen la adopción de una medida similar a la presente contra el favorecido con esta acción de habeas corpus.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor REYNALDO ANTONIO VALENCIA; en consecuencia ORDENA su inmediata libertad si no tiene caso pendiente."
(85)

Al señor Reynaldo Antonio Valencia le fue impuesta la medida cautelar de detención preventiva ordenada por el Fiscal Auxiliar de la República, esgrimiendo como soporte a su actuación que el precitado Valencia participó en la ejecución de los actos dirigidos a tomarse por la fuerza la estación de Policía de Balboa.

⁽⁸⁵⁾ Registro Judicial Junio de 1992, p. 278 - 282.

Todo lo anterior sin incorporar a la Instrucción penal las pruebas que sostiene la afirmación hecha por la autoridad del Ministerio Público, incumpliendo de esta manera lo preceptuado por el artículo 2159 del Código Judicial. En este caso el delito hacía procedente la aplicación de la medida cautelar y la misma fue dictada por autoridad competente; sin embargo, se obvió un elemento, y es que para que la medida cautelar de detención preventiva proceda, se tiene que señalar las pruebas que operan en contra del encartado, para que se dé el contradictorio y el imputado pueda ejercitar los descargos; impidiéndose esta comunicación de las pruebas y su omisión en la resolución que ordena la detención es elemento suficiente para invalidar la resolución que ordena la medida cautelar de detención.

C. LA FUNCION DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS.

Es imperativo dejar aclarado que la función primordial y básica de la acción de habeas corpus es verificar si la autoridad que ordenó la detención, cumplió con las formalidades que la Ley adjetiva (Artículo 2158 del Código judicial) exige. Para aclarar la función del Instituto Procesal Constitucional de habeas Corpus, analizaremos el:

HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR EL LICENCIADO NESTOR EGBERTO UREÑA BATISTA A FAVOR DE ARISTOBOLO SANCHEZ EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS.

MAGISTRADO PONENTE: FABIAN A. ECHEVERS. PANAMA, TRES (3) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1994).

“ Es preciso recordar que la función del Tribunal de Habeas Corpus se limita a realizar un examen relativo al cumplimiento, por la autoridad acusada, de las formalidades que debe atender para decretar la detención preventiva, consignada sobre todo en el artículo 2159 del Código Judicial, básicamente atinente a la comprobación de la existencia del hecho punible y de la existencia de elementos probatorios contra el detenido. Por lo tanto, su actuación no tiene por finalidad proceder a un análisis exhaustivo del caudal probatorio, actividad jurisdiccional que debe realizarse en otro momento procesal que la Ley también establece. A juicio de la Corte la sentencia que da lugar a la alzada se encuentra debidamente motivada en el análisis del cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la Ley a los efectos de fundar la orden de detención preventiva que se censura. Paralelamente, llama la atención el hecho de que la sustentación de la alzada se limita a utilizar como argumento justificativo simplemente una repetición del extenso libelo del habeas corpus, al que incorpora dos hechos nuevos séptimo y octavo- a los que mal puede reconocérsele el efecto de inducir la revocatoria o reforma del auto apelado, sobre todo cuando el Tribunal de apelación desconoce las razones de la censura anunciada y no sustentada, ya no contra la medida que repudia la

misma acción de habeas corpus sino contra la resolución de que ahora se conoce. Finalmente, es oportuno reiterar opinión que en esa resolución se expresa, en el sentido de que “el presente negocio penal esta en etapa de inicio, lo cual permite al sindicato despejar los indicios que existen en su contra.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada y DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Primero de Circuito de la provincia de Veraguas.” ⁽⁶⁶⁾

Sobre este tema de la función del tribunal de habeas corpus, nuestro Director de Tesis el Doctor Molino Mola, en su reciente Obra “La Jurisdicción Constitucional en Panamá”, la cual nos sirve de marco de referencia básico para este trabajo, comenta:

“ El examen del tribunal de habeas corpus sobre la detención preventiva, sólo atiende a constatar, si la orden de detención fue por escrito, emitida por la autoridad competente, expedida, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la Ley (artículo 21 Constitución Nacional). Se aprecia entonces, que la acción de habeas corpus nada tiene que ver con la responsabilidad penal o no del

⁽⁶⁶⁾ Registro Judicial Mayo de 1994, p

detenido. Sólo examina cuestiones formales, aunque a veces, es necesario analizar, si las pruebas allegadas a la actuación existente al momento de la detención, son suficientes para vincular a la persona afectada, con el hecho considerado como delito o falta, que requiera prisión, o en ocasiones será necesario hacer una calificación provisional del hecho delictivo para encuadrarlo en un determinado tipo de delito, para efectos de conocer la posible pena aplicable, que como se sabe, influye en la detención preventiva, si el hecho tiene pena mínima de dos años.”⁽⁶⁷⁾

El profesor Molino Mola deja claro que, la función del tribunal de habeas corpus, se circunscribe sólo a constatar los aspectos formales de la orden de detención, la competencia del emisor, la forma, y que sea por motivos previamente tipificados en la norma sustantiva.

D. NO PROCEDE ACCION DE HABEAS CORPUS CONTRA ORDEN DE CONDUCCION, PARA RENDIR INDAGATORIA.

A lo largo de este trabajo hemos analizado que la acción de habeas corpus, procede básicamente, contra una orden de detención que no siga los postulados de la Constitución y la ley, o que sea emitido por una autoridad que

⁽⁶⁷⁾ MOLINO MOLA, Edgardo Op Cit., p 520

no tenga la competencia para ordenar detenciones. Sobre este aspecto queda claro que las Resoluciones Judiciales que ordenan la práctica de determinadas diligencias judiciales en la fase sumaria, que obligan al imputado a concurrir al proceso, como lo es la orden de conducción, esto no constituye una detención, sino un mecanismo procesal coactivo, para que la persona sobre la cual se ha hecho señalamientos directos en el proceso presente sus descargos.

Sobre este particular se manifiesta la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 30 de diciembre de 1996, al resolver la:

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PATROCINIO ROMERO CUBILLA CONTRA EL FISCAL DECIMODE CIRCUITO DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

“ La denuncia señala a Patricio Romero como una de las personas a través de las que Manuel salvador Guadamúz pretendía la obtención de B/ 25,000.00, afirmando que hasta el momento de la Investigación no ha sido desvirtuado ni aclarado por el cual procede a citarse al Imputado para que aclare su situación a través de una declaración; aun cuando no lo dispuso expresamente en su resolución de 8 de octubre de 1996 visible a fojas 478 – 480, el Fiscal Auxillar de la república ordenó la localización y conducción de

Patrocinio Romero para que rindiera declaración indagatoria porque, como ya se ha dicho, le son formulados cargos directos de ser autor de los ilícitos enunciados.

En la investigación de los delitos y sus posibles autores, el Agente del Ministerio Público está facultado para interrogar a los imputados: es precisamente la indagatoria, uno de los medios de defensa con que cuenta el acusado. La conducción es al parecer (sic) en este caso el único medio para lograr la comparecencia de Romero ya que, pese a ser conocedor de los cargos que se le formulan, no ha concurrido voluntariamente ante el Ministerio Público a poner en claro todo aspecto circundante de dichos cargos, de tal suerte que la medida cautelar es legal y así debe aclararse.

A juicio de esta corporación, no es el habeas corpus el remedio pertinente para atacar situaciones como la planteada. En estos casos el representante judicial de la persona requerida para ser indagada tiene a su alcance los medios procesales correspondientes para atacar la decisión de ordenar la indagatoria y la consecuente conducción del imputado, remedios que, en efecto, fueron utilizados dentro de este negocio, pues el Abogado presentó reconsideración, incidente de controversia e incidente de nulidad.

Resulta claro que no se ha dictado orden de detención preventiva contra el que el mismo comparezca ante el Ministerio Público a enfrentar los cargos que se le imputan, ello no implica que se le esté conculcando su derecho a la libertad de tránsito, ni

que se está intentando confinar ilegalmente a dicha persona. En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 29 de noviembre de 1996, dictada por el Segundo tribunal Superior de Justicia.” ⁽⁶⁸⁾

Vale la pena comentar que en el precitado fallo de la Corte, El Ministerio Público, no había dictado una orden de detención, por el contrario, lo que había ordenado era la conducción del imputado, para la realización de la diligencia de indagatoria, la cual supuestamente en materia procesal, constituye el medio de defensa primaria del imputado.

Lo preocupante en estos casos es la práctica descomedida de algunos agentes del Ministerio Público que al momento de ordenar la diligencia indagatoria, al mismo tiempo adelantan la orden de detención, sin siquiera tomar en cuenta los descargos del imputado, razón que ha llevado a los Abogados litigantes a mostrar un grave temor a estas diligencias cuando las mismas van acompañadas de una orden de conducción, lo cual en la práctica judicial es casi sinónimo de una detención preventiva la cual la mayoría de las veces es ilegal.

(68) Registro Judicial Diciembre de 1996, p 85 – 87

E. EN MATERIA DE DROGA, NO PROCEDE DETENCIÓN PREVENTIVA, CUANDO LA CANTIDAD DE DROGA INCAUTADA, SEA MENOR A LA MEDIDA POSOLÓGICA DESTINADA AL CONSUMO PERSONAL.

Sobre este tema tan controversial, la medicatura forense, ha precisado en diferentes expedientes, "que conforme a criterios médicos" la dosis posológica de cocaína de 1.0 a 1.5 gramos es considerada como destinada al consumo personal. Razón por la cual la Corte ha sostenido que en estos casos se tipifica el delito de posesión, simple el cual tiene pena mínima de un (1) año, razón por la cual no procede detención preventiva en estos casos. Sobre este particular se pronunció la Corte al resolver acción de habeas corpus a favor de **ABDIEL ANTONIO GORDÓN** contra el Procurador General de la acción. Magistrada Ponente: Aura E. Guerra de Villaláz. Panamá, nueve (9) de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Al examinar las diligencias preliminares que se han adelantado en esta investigación, se puede apreciar que de acuerdo al Informe de comisión visible a fojas 1 del expediente, el día 21 de julio de 1994, se realiza la captura de tres sujetos, entre ellos Abdiel Gordón, a consecuencia de que, en el asiento posterior del vehículo en que viajaban, específicamente en el puesto de donde viajaba Gordón, encontraron dos (2) sobrecitos

plásticos transparentes con cierta cantidad de polvo blanco.

La prueba de campo que reposa a fojas 9 dio resultado positivo a la presencia de la droga conocida como cocaína y describe la evidencia cuantitativamente, como dos (2) sobrecitos plásticos transparente. Observa la Sala que ABDIEL ANTONIO GORDÓN aceptó ser el propietario de uno de los dos sobrecitos que dieron un resultado positivo a la presencia de la droga conocida como cocaína en la prueba de campo.

No fue sorprendido en circunstancias que evidenciarán indicios de venta o tráfico y como no constaba el resultado exacto del laboratorio técnico especializado en drogas, con base en el artículo 2589 del Código Judicial se solicitó el resultado del laboratorio, y en la fecha se recibió de la Fiscalía Primera de Drogas el análisis de la Sección de sustancias controladas (fs. 15-17) que informa que la evidencia a la cual se le realizó la prueba y que consta de dos sobrecitos, su peso total es de 0.28 gramos y, tal cantidad en cuanto a la dosis posológica de adictos no la excede, por lo que cabe aplicar el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal cuyo tramo penal es de 1 a 3 años de prisión y no conlleva detención preventiva. La corte, mediante sentencia del 20 de abril de 1994 sobre un caso similar al presente señaló: "En el negocio sub-judice, ni siquiera se ha podido establecer el peso exacto de la droga decomisada, pero por la cantidad escasa destinada al consumo, como lo acepta el propio imputado, sin que exista otra prueba que desvirtúe su

versión” En tal sentido el Pleno considera que la conducta, de acuerdo a las constancias hasta ahora recabadas, encuadra dentro del primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, el cual establece pena de uno (1) a tres (3) años de prisión.

El artículo 2148 del Código Judicial, es claro al señalar que la detención preventiva es procedente en aquellos casos de conducta típicas ilícitas cuya pena mínima sea mayor a los dos años de prisión, situación que no ajusta al supuesto ocurrido dentro del presente negocio, razón por lo cual se considera ilegal la detención de ABDIEL ANTONIO GORDÓN CASTILLO y se ordena en consecuencia su libertad.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de ABDIEL ANTONIO GORDÓN y ORDENA su inmediata libertad si no existe otra causa pendiente que justifique su mantenimiento en prisión.⁽⁶⁹⁾

Luego de analizar los pronunciamientos de la Corte, es de rigor concluir que cuando la cantidad de droga incautada no supera la dosis posológica establecida por la Medicatura Forense del Instituto de Medicina Legal, no puede obviarse el hecho de que dichas cantidades son escasa, es decir, no son consideradas, por lo que es incorrecto calificar provisionalmente la conducta del Imputado como posesión agravada, ante estas situaciones se debe considerar

⁽⁶⁹⁾ Registro Judicial de Septiembre de 1994, pág. 19 y 20

delito de posesión de droga simple, el cual tiene fijada pena de prisión de 1 a 3 años, y de 50 a 250 días multas, el cual en concordancia con lo que establece el Código Judicial en su artículo 2148, se encuentra excluido de los casos que tienen señalada medida cautelar personal privativas de la libertad.

F. REQUISITOS PROCESALES PARA QUE EXISTA FLAGRANCIA EN MATERIA DE DROGAS.

Normalmente existe la tendencia en considerar que siempre que se sorprenda al imputado, en flagrante delito, procede la detención independientemente de la pena mínima aplicable. Sobre este aspecto es imperativo aclarar que la flagrancia tiene dos requisitos en el orden procesal que son: 1) que el sindicado esté en posesión física de la sustancia, y 2) que haya disponibilidad del infractor para hacer uso de la misma. Y además es requerimiento verificar los perfiles posológicos de la cantidad de sustancia incautada.

Sobre este tema se manifiesta nuestro Máximo Tribunal de Justicia cuando al resolver:

**ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MAXIMINO LOAIZA NUÑEZ
EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.**

MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. 9 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

Por otro lado, en lo referente a la flagrancia, considera esta superioridad que la naturaleza del delito en comento tampoco satisface este segundo supuesto del artículo 2148 del Código Procedimental, toda vez que anteriormente esta Corporación de Justicia ha manifestado que para que se de la flagrancia en estos casos, es necesario que se verifiquen dos requisitos: A) que el sindicado esté en posesión física de la sustancia, y B) que haya disponibilidad del infractor para hacer uso de la misma. Si bien es cierto que se verificaba el segundo supuesto disponibilidad, toda vez que los carrizos con la cocaína se encontraban debajo de la cama del sindicado, también es cierto que por esa mismas circunstancia no la tenía físicamente en su poder en el momento del allanamiento, razón que abre la posibilidad que el alcaloide perteneciera a otro de los presentes (hay que recordar que estaban dos menores en el cuarto). De lo anterior deviene que no existen los elementos vinculantes suficientes para considerar que el justiciable fue detenido en flagrancia. Por todo lo mencionado, considera la Corte que la detención del señor MAXIMINO LOAIZA NUÑES es ilegal
(70)

(70) Registro Judicial de Septiembre de 1994 Pág 23 y 24

Para reforzar la conceptualización de la flagrancia en delitos de drogas, además de los requisitos procesales, es deber del funcionario de instrucción examinar si el delito objeto de la detención preventiva es de aquellos que por la punibilidad asignadas por la Ley excede el mínimo de dos (2) años.

Así lo manifiesta la Corte Suprema de Justicia cuando en sentencia de 13 de mayo de 1994, este Tribunal de Habeas Corpus al examinar la legalidad de una detención preventiva donde mediaban circunstancias similares al caso sub-judice destacó:

“Es necesario resaltar que la detención se hizo correctamente por tratarse de flagrancia al incautarse en su poder sustancia ilícita, no obstante, el funcionario de Instrucción o la autoridad jurisdiccional para mantener dicha detención debió examinar si el delito atribuido es de aquellos por la punibilidad asignada en la ley excede el mínimo de dos años de prisión”

Debemos concluir por todo lo anterior, que la Corte se ve precisada a declarar que privación de libertad que sufre el señor ROBERTO LOAIZA es ilegal, pese a que como hemos observado en las sumarias, la actitud del prenombrado al momento de su detención, con relación a las autoridades policiales sea reprochable.

En consecuencia, la Corte suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA

**ILEGAL la detención del señor
ROBERTO ANTONIO LOAIZA.⁽⁷¹⁾**

Cabe concluir que el concepto generalizado de flagrancia guarda relación con el hecho de haber sido aprehendido el sujeto en el momento de la comisión del delito, a continuación de éste es el momento en que el sujeto huye de la escena del crimen, y luego se le aprehende, encontrándole en su poder los instrumentos de que se valió para cometer el ilícito o los bienes que obtuvo del mismo.

También podríamos equipar a la flagrancia los casos en que el imputado se encuentra confeso de la comisión del delito, donde además de considerarse en flagrancia desde el punto de vista de los efectos procesales, ya que en estos casos ni siquiera opera a favor del reo, el principio de presunción de inocencia.

**ASÍ LO HA DEJADO SENTADO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
EN SENTENCIA DE 27 DE MAYO DE 1991, EN PONENCIA DEL
MAGISTRADO MOLINO MOLA CUANDO DIJO:**

**“Debe tenerse en cuenta que en el
presente caso el detenido ha
aceptado, como lo manifiesta su
propia defensora, el delito cometido,
por lo que su situación se asemeja al
detenido en flagrante delito y por ello
no existe a su favor, en esta**

⁽⁷¹⁾ Registro Judicial, Septiembre 1994 P 23

circunstancias, el principio de presunción de inocencia, que es el que le permite gozar de libertad provisional mientras no se demuestre su culpabilidad. En efecto, el artículo 2148 del Código Judicial establece que cuando el autor o partícipe sea detenido en flagrante delito se ordenará su detención preventiva, sin consideración a la pena y hemos dicho que la situación de flagrancia es para el caso igual que el imputado confeso. Es necesario entender que el principio de presunción de inocencia sólo se aplica a favor de quien no se le puede determinar su responsabilidad hasta el momento del fallo final, pero que de ninguna manera puede favorecer el principio de inocencia a quien se encuentra confeso o es sorprendido en flagrante delito y por ello en esas circunstancias es que la detención preventiva se impone sin consideración a la pena aplicable. Todo lo anterior demuestra que la detención del sindicado es conforme a los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial” (72)

De los fallos citados, salta a la vista con claridad meridiana la conceptualización amplia en cuanto a la flagrancia, y su equiparación procesal a la confesión del hecho punible, todo esto en contraposición a la conceptualización especial en casos de drogas donde se tiene que tener en cuenta la medida posológica para los efectos del tramo penal para ordenar la detención preventiva, y además los requisitos procesales de la flagrancia.

(72) Sentencia de 27 de mayo de 1991, citados por Molino Mola Edgardo, Op. Cit. Pág. 555, 556

**G. PROCEDE LA ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR
LLAMADA TELEFONICA.**

**HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SRA. MARGARITA SIERRA DE
KILDER EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACION,
MAGISTRADO PONENTE, RAUL TRUJILLO MIRANDA, PANAMA,
VEINTITRES (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO (1994)**

El Artículo 2573 del Código Judicial expresa que la acción de habeas corpus podrá formularse verbalmente, por telégrafo o por escrito. La Corte, con el propósito de ser flexible en la interpretación de la norma libró el mandamiento de habeas corpus no obstante que el mismo, según el informe secretarial, se interpuso mediante una llamada telefónica por alguien que se identificara como la Licenciada MARINA MORALES el día 25 de abril de 1994, a las 4:10 de la tarde. Esa misma persona, según expresa el otro Informe secretarial, comunicó que desde ese día 25 de abril de 1994 en horas de la tarde, la citada señora fue deportada, sin siquiera haberse presentado la supuesta profesional del derecho ante esta corporación, ya sea por telegrama o por escrito para poner en conocimiento los aspectos relacionados con la detención que se indicaba ilegal.

El funcionario demandado negó la detención de la precitada MARGARITA SIERRA DE KILDER y no existe evidencia en el reporte del movimiento migratorio enviado que la misma había sido deportada.

Ante las situaciones planteadas no le queda otra alternativa a esta alta corporación que proceder a dar por terminado este proceso.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del presente procedimiento de habeas corpus.⁽⁷³⁾

A nuestro modo de ver la Corte no muestra inconveniente en aceptar la solicitud de habeas corpus hecha telefónicamente, toda vez que la norma adjetiva en su artículo 2573, establece que la acción se puede solicitar verbalmente, (entendiendo que por cualquier medio electrónico transmisor del sonido de la voz) en este caso el teléfono, o por telégrafo. Sobre este aspecto si adecuamos la norma a la actualidad de las comunicaciones y al desuso que ha tenido el telégrafo en los últimos años producto del facsímil. Podríamos añadir que también debería aceptarse el habeas corpus por medio de Fax, ya que en la mayoría de los despachos judiciales cuentan con este aparato.

Sobre este particular nuestro profesor de Maestría el Doctor Molino Mola, en su Obra dice:

⁽⁷³⁾ Registro Judicial de Mayo de 1994, P. 85 y 86

Como consecuencia de la prontitud del procedimiento, éste es fundamentalmente oral, por ello, la acción se puede presentar verbalmente, por teléfono y por telégrafo. Yo creo que también se puede y debe aceptarse por fax, cuando el Tribunal disponga del mismo. El artículo 2569 establece que el procedimiento a que dé lugar la demanda de habeas corpus será oral y el artículo 2573 establece que la acción podrá ser formulada verbalmente, por telégrafo y la jurisprudencia la ha admitido por teléfono. Sólo el informe y el fallo definitivo deberán formularse por escrito. En la práctica, sin embargo, la gran mayoría de las acciones de habeas corpus se presentan por escrito.⁽⁷⁴⁾

Notamos pues que la doctrina de avanzada, propugna por la adecuación de la norma de procedimiento hasta donde sea posible a los adelantos de la tecnología, por eso no nos debe parecer extraño la interposición de la acción de habeas corpus de manera verbal siguiendo el patrón tradicional, por teléfono, por telégrafo; o por fax, y con un criterio más de avanzada por medio de internet, lo cual resultaría desde una perspectiva procesal más ambiciosa, el máximo umbral del principio de Economía Procesal.

H. EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE MIGRACION, ESTA FACULTADA DE DETENER Y

⁽⁷⁴⁾ MOLINO MOLA, Edgardo Op CIL, P 518

DEPORTAR A CUALQUIER CIUDADANO EXTRANJERO QUE INGRESE AL TERRITORIO NACIONAL

Sobre este tema cabe destacar que el Decreto Ley N° 16 de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 23 de 29 de septiembre de 1965 y la Ley N° 6 del 5 de marzo de 1980, facultan al Ministerio de Gobierno y Justicia para detener y expulsar del territorio Nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, si ello es conveniente por razones de seguridad y salubridad o de orden público.

Sobre este tema se manifiesta nuestro máximo Tribunal de Justicia en la Acción de Habeas Corpus a favor de RODOLFO GOMEZ contra el Director Nacional de Migración. Magistrado Ponente: JUAN A. TEJADA MORA, Panamá, Veinte (20) de noviembre de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (1997)

En este punto resulta trascendental aclarar que el señor RODOLFO GOMEZ, quien según su representante judicial ostenta la nacionalidad panameña por naturalización, porta en realidad cédula de extranjero, a saber: E-8-69285, condición muy distinta a la de un nacional panameño que ha adquirido tal calidad por naturalización. Por ende, su estatus de extranjero, aunque legalmente domiciliado en

Panamá, lo somete al Imperio de la norma en materia de migración antes enunciadas, toda vez que la permanencia de un ciudadano extranjero en el territorio nacional no es un derecho que le asiste por la sola circunstancia de poseer la documentación legal necesaria para acreditar su status migratorio, sino que existen otras condiciones legales que se hacen exigibles para los efectos de autorizar dicha permanencia en el país.

Cabe acotar, que la resolución que dispone la deportación del señor GOMEZ, le advierte al afectado sobre los recursos que le asisten por Ley para impugnar la resolución administrativa en comento. Así, el interesado tendrá la oportunidad legal dentro del proceso administrativo respectivo, de ventilar su causa y hacer valer sus objeciones a los cargos que se le imputan, relacionados a su colaboración con las actividades guerrilleras, puesto que tal disquisición resulta ajena a la acción de habeas corpus, en que al Tribunal sólo compete el examen de los elementos formales que rodean la detención preventiva. En lo atinente a la mencionada medida cautelar personal, esta Superioridad concluye que la privación de libertad ordenada se ha verificado con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia migratoria, y dentro del marco de las facultades legales conferidas a las autoridades de Migración y Naturalización, por lo que se encuentra plenamente legitimada la detención preventiva cuya ilegalidad se acusa.

En consecuencia, la Corte Suprema Pleno, administrando justicia en

nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor RODOFO GOMEZ, y ordena que sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización.⁽⁷⁵⁾

La esencia del fallo en comentario es que cuando se trata de normas coercitivas establecidas por la Ley administrativa, deben esgrimirse los recursos que el procedimiento establece para la defensa del encauzado, ya que es hartamente sabido que no corresponde a la acción de habeas corpus entrar en juicios jurídicos del fondo de la investigación, sólo le corresponde al Tribunal de Habeas Corpus manifestarse sobre los elementos formales que rodean la detención preventiva

I. NO PROSPERA ACCION DE HABEAS CORPUS, CONTRA ORDENES DE ARRESTO, EMITIDAS POR LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL ORGANO JUDICIAL, O POR AUTORIDADES DEL MINISTRRIO PUBLICO. COMO APLICACIÓN DEL PODER DE COERCION, QUE ENVISTE AL JUEZ MODERNO, CUANDO LE FALTAN EL RESPETO.

Una de las pncipales características del nuevo Código Judicial, es que enviste a Juez Moderno de una serie de poderes especiales, entre éstos; el poder de decisión: que es el poder que tiene el juzgador de emitir resoluciones

⁽⁷⁵⁾ Registro Judicial, Noviembre de 1997, Pág 65 y 66

judiciales, las cuales hacen tránsito a cosa juzgada. El poder de ejecución: el poder que tiene el Juez de perseguir el cumplimiento forzoso de una obligación que consta en un Título con mérito ejecutivo. El poder de documentación: que es la facultad especialísima que tiene el juzgador de solicitar pruebas de oficio; y el poder de coerción: que es el poder que tienen los jueces de imponer sanciones (multas y arrestos) a las personas que en ejercicio de sus funciones le falta el respeto, u obstaculiza la labor del Tribunal.

Sobre este aspecto de los poderes del juzgador se pronuncia nuestra Corte Suprema de Justicia, cuando resuelve:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE JAIME PADILLA BELIZ EN CONTRA DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA, PANAMA, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (1997).

El argumento medular que invoca el proponente de esta acción para objetar la sanción impuesta, hace relación con el hecho de que a su juicio, no se le ha faltado el respeto a la señora Procuradora dentro del recinto de la Procuraduría de la Administración, no por razón de un caso que está conociendo.

Esta Interpretación, de por sí inaceptable, plantea la circunstancia de que únicamente resulta

sancionable la falta de respeto, la ofensa contra la dignidad, honra y decoro del funcionario, cuando éste se produce en el propio despacho de la autoridad del Ministerio Público, o cuando se refiere a un caso del que se encuentre conociendo, y que la falta pierde el carácter de tal cuando surge de una publicación hecha por un medio de comunicación social.

Esta Corporación Judicial ya ha tenido oportunidad de recalcar que la facultad que la Ley y la Constitución otorgan a los Agentes del Ministerio Público para sancionar con multas y arrestos a las personas que desobedezcan sus órdenes o les falten el debido respeto, no se limita a los actos de irrespeto que se cometan en el momento en que desempeña las funciones inherentes a su cargo. Por el contrario, está claro que el artículo 386 y en el artículo 33 de la Constitución Nacional, que dicha facultad se extiende a los actos de irrespeto que se cometan con motivo del desempeño de las funciones inherentes al cargo. (Cfr. Sentencia de 19 de agosto de 1994).

Si bien la publicación examinada se refiere en parte a los supuestos vínculos políticos que ostentara en el pasado la Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher, el artículo periodístico se extiende más allá, refiriéndose a la citada funcionaria del Ministerio Público en términos humillantes y poco decorosos, criticando con desdén e irrespeto las opiniones jurídicas que esa oficina ha expresado, e incluso endilgándole la comisión de actos contrarios a

derecho, como lo son el desconocimiento y violación de Decretos y otras disposiciones alcaldicias.

El ordenamiento positivo panameño le otorga a cualquier ciudadano, los canales legales pertinentes para denunciar la ilegalidad de las actuaciones de los funcionarios públicos. De considerar el Director del medio Informativo "El Siglo" que tales actuaciones ilegales se venían suscitando, tenía a su haber las vías jurídicas correspondientes, en lugar de formularlas públicamente de la manera ofensiva en que efectivamente se hizo.

Esta superioridad conceptúa que los desabridos epítetos utilizados por la columna periodística, cuando se refiere a la señora Procuradora señalando que "se le humilló" al General Torrijos, que "se ha desquiciado"; que sus "opiniones son absurdas" y que cualquier gobierno del futuro debe contemplar considerarse una crítica respetuosa de la prensa libre y responsable. Si la intención del Diario era servir de foro para denunciar algún hecho irregular, tal opinión podía haber sido expresada de manera mesurada y deferente, y en caso de que se tratase de una supuesta ilegalidad, ya hemos comentado que los canales jurisdiccionales están al alcance de la ciudadanía para hacer prevalecer el orden legal.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA

**LEGAL, la sanción de arresto
Impuesta por la señora Procuradora
de la Administración contra el Señor
Jaime Padilla Bellz. ⁽⁷⁶⁾**

Notamos en la precitada jurisprudencia, que cuando se trata de arresto derivados de la aplicación del Poder de Coerción que tienen los Jueces, Magistrados y Autoridades del Ministerio Público, no prospera la acción de Habeas Corpus, toda vez que la privación de la libertad es el resultado de un poder especial con que cuenta el juzgador moderno.

Sobre este aspecto de la norma adjetiva que promulga el poder de coerción, del cual están revestidos los Jueces, Magistrados y Autoridades del Ministerio Público, se refiere nuestro profesor de Maestría el Doctor Pedro Barsallo, cuando en su última edición del folleto de clases Derecho Procesal I, comenta:

Con base a este poder de coerción los jueces pueden imponer sanciones a quienes se opongan al cumplimiento de sus mandamientos o diligencias, como es el caso del desacato según el Art. 1956 del Código Judicial; puede sancionar con multa a los demás empleados públicos y a los particulares que no cumplan o demoren sin causa justificada, las ordenes que dichas autoridades les impartan en el ejercicio de sus funciones según el numeral 1 del Art. 202 del Código Judicial; pueden

⁽⁷⁶⁾ Registro Judicial de noviembre de 1997, Págs 61,62 y 63

Igualmente imponer multas a los apoderados judiciales según lo faculta el No. 15 del Art. 199 del Código Judicial, pueden también imponer pena de arresto hasta por cinco días a quienes les falten el respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, según lo dispone el numeral 2 del Art. 202 del Código Judicial, y pueden, en fin, requerir el auxilio de la fuerza pública para vencer cualquier resistencia ilegal de las partes, sus representantes o terceros en la realización de las actuaciones judiciales. De este poder se desprende también la facultad judicial de decretar "allanamiento" de conformidad con lo que establecen los Arts. 562 a 569 del Código Judicial. ⁽⁷⁷⁾

Sobre este aspecto el maestro Barsallo fue enfático en su curso dictado en Maestría "Los Poderes del Juez". En cuanto que el Poder de coerción que entre otros caracteriza al juzgador moderno, para que éste tenga más participación en el proceso, y no sea un simple convidado de piedra, también debe de gozar de cierta facultad coercitiva, con la cual elimina los obstáculos que empañen o puedan oponerse al cumplimiento de la misión del juzgador, especialmente en el cumplimiento de sus ordenes. Sin este poder la función jurisdiccional no tendría real eficacia.

⁽⁷⁷⁾ BARSALLO J., Pedro DERECHO PROCESAL, Panamá, 1998, pág. 120

Al respecto de la sentencia en comento, es imperativo dejar sentado que si bien es cierto no prospera la acción de habeas corpus cuando se trata de arresto ordenado por el juzgador, haciendo uso del poder de coerción que lo cubre. Si proceden las atenuantes que establecen la norma adjetiva, y en el caso concreto el detenido comprobó padecer de una afección cardíaca, y contaba al momento de su arresto con más de 65 años de edad. Conforme a la legislación procesal en materia de medidas cautelares, particularmente en lo dispuesto en el artículo 2147-D del Código Judicial, no se decretará detención preventiva cuando la persona afectada se encuentre en grave estado de salud o haya cumplido los 65 años de edad.

En consecuencia el comentado fallo de 23 de mayo de 1994, modifica las condiciones del arresto cuando en su parte final dice:

En razón de ello, el Pleno estima que el arresto ordenado en este caso por el término de 48 horas se encuentra justificado legal y constitucionalmente.

Se advierte por otra parte, que la señora procuradora de la administración allega al expediente de marras, un escrito calendado 14 de noviembre de 1997, en el cual acoge las aspiraciones del proponente de esta acción de habeas corpus, en el sentido de que se evaluará la situación de su progenitor de una manera especial, debido a su condición médica delicada y su edad avanzada

En este sentido, la señora Procuradora ha señalado lo siguiente:

"Luego de considerar las alegaciones plasmadas en la acción de habeas corpus a favor del prenombrado Señor Padilla Béliz y en atención a que dicho ciudadano cuenta, en la actualidad, con la edad de sesenta y seis (66) años, siendo un anciano valetudinario con padecimientos cardíacos, procede aplicarle el Artículo 884 del Código Administrativo...

En consecuencia dispongo que el ciudadano Padilla Béliz, sufra la pena de arresto en su domicilio, siempre que constituya fianza tal como se establece el prenombrado Artículo 884. Decisión que pongo en conocimiento por su intermedio al Pleno de la Corte Suprema de Justicia".

En estas circunstancias se desprende que la señora Procuradora ha tomado en consideración la edad y condición valetudinaria de la persona sancionada, para disponer que ésta sufra el arresto en su domicilio conforme lo prevé el artículo 884 del Código Administrativo, para lo cual sólo se requerirá que la Señora Procuradora de la Administración fije la fianza a la que hace referencia el citado texto legal, en vías de asegurar que se cumpla fielmente el arresto domiciliario".⁽⁷⁸⁾

(78) Registro Judicial, Noviembre de 1987, Op. Cit.

Notamos pues, que la Procuraduría de la Administración se apega al clamor de la norma adjetiva, pero aplica una norma del mismo sentido y alcance, contenida en el artículo 884 del Código Administrativo.

J. LA DETENCION PREVENTIVA DEBE SER LA ULTIMA DE LAS MEDIDAS QUE DEBE TOMAR EL FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE ADMINISTRA JUSTICIA, Y LA MISMA NO DEBERIA DICTARSE LOS DIAS VIERNES, YA QUE COLOCA AL AFECTADO EN UN ESTADO DE INDEFENCION:

Con la intención de poner ciertos límites al dictamen de medidas cautelares cuando no conocieran circunstancias de excepcional relevancia.

La Corte Suprema de Justicia deja en claro al establecer las limitaciones a la detención preventiva cuando con Fallo del 5 de agosto de 1998, resuelve la acción de habeas corpus presentada por el Licenciado Jerónimo Mejía a favor de Gilberto Boutín Icaza y Ariel Corbetti, contra el Fiscal Auxiliar de la República dice: Magistrado Ponente: Fabián A. Echevers.

Luego de conocida la situación procesal, le corresponde al Pleno pronunciarse solamente sobre la detención preventiva del doctor Gilberto Boutín, quien es el único que permanece detenido, no sin antes manifestar su conformidad con las

medidas recaídas sobre los imputados Corbetti, González y Tristán, aun cuando hayan sido pronunciadas con criterio selectivo.

De manera reiterada el Pleno ha censurado la aplicación de la medida de detención preventiva como si fuera la primera en el orden de las medidas cautelares personales que contempla el Código Judicial, particularmente cuando ello tiene lugar un día viernes.

La percepción general es la de que lo que se persigue en esos casos es colocar al afectado por la medida en estado de indefensión, lo cual se comprueba frecuentemente en la práctica. Le asiste razón al accionante cuando se refiere a la falta de justificación de la medida cuando no concurren las circunstancias de excepcional relevancia a que se refiere la normativa cautelar. Lo cierto es que los Imputados han permanecido en libertad hasta ahora, sin que se haya demostrado la inconveniencia de la medida. En relación con el doctor Boutin, importa brindarle la oportunidad para que se incorpore en forma decorosa al proceso, pueda rendir indagatoria y colaborar también durante las Investigaciones.

Por las consideraciones anteriores, el Pleno de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la orden de detención decretada contra Gliberto Boutin Icaza y, para los fines de salvaguardar los intereses de la Instrucción sumarial, DECRETA la prohibición de que abandone el territorio de la República sin autorización judicial y el deber que tiene de presentarse cada quince días

**ante la autoridad donde se encuentre
radicado el proceso.⁽⁷⁹⁾**

La Corte reitera el concepto que ha venido manteniendo en los últimos años casi a regañadientes, ya que existen ciertos funcionarios encargados de administrar justicia, que todavía en los albores de un nuevo siglo, se resisten a entender, que la detención preventiva, debe ser una medida “Extrema y Ultima”, cuando ya no exista alternativa de decretar otra medida sustantiva, ya sea por la calidad y modo en que se ajequite el hecho punible, o por la clara peligrosidad del imputado. Pero cuando no se trate de estas situaciones excepcionales no se deberían de dictar detenciones preventivas.

Cabe destacar que las normas adjetivas vigentes, establecen para que pueda dictarse una detención preventiva debe de tomarse en cuenta las siguientes propuestas:

1. Que existan exigencias cautelares inaplazables que conforme a la Ley justifiquen la aplicación de esta medida extrema contra la libertad individual, o sea, circunstancias concretas que pongan en peligro las investigaciones para la adquisición o autenticidad de las pruebas o la fuga de los imputados o la posibilidad de que éstos puedan cometer delitos

⁽⁷⁹⁾ Sentencia G Nº 570-98 proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 5 de agosto de 1998

- graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal (sigue el artículo 2147-C del Código Judicial).
2. Que el Juzgador debe tener en cuenta antes de dictar la detención los sagrados principios de **"Proporcionalidad"** y **"Subsidiaridad"** que rigen el proceso moderno (según el artículo 2147-D del Código Judicial).
 3. Que el funcionario antes de dictar la detención, debe acreditar y motivar en el expediente, "que las otras medidas cautelares más benignas contra la libertad individual hayan resultado insuficientes o inadecuadas" (según el artículo 2147-D del Código Judicial).

El otro aspecto de trascendental eficacia procesal, que contiene el tal controversial fallo de 5 de agosto de 1998, es que el ponente deja plasmado una reclamación que en los últimos años exigimos los abogados litigantes, y es que cuando particularmente las detenciones preventivas tienen lugar un día viernes, el imputado queda sumido en un estado de indefensión total, por eso este fallo es de vital importancia procesal, pues, abre el camino para que se incorpore en la norma adjetiva, la prohibición de ordenar detenciones preventivas los días viernes.

K. UNA MUJER CULPABLE DE UN DELITO NO PUEDE SER ENCARCELADA SI ESTA AMAMANTANDO A SU HIJO, NI MUCHO MENOS DETENIDA PREVENTIVAMENTE UNA MUJER A QUIEN SE LE INVESTIGA POR LA COMISION DE UN DELITO.

Este aspecto de la detención de Mujer Embarazada, o que se encuentre en los seis (6) meses de post-parto, es muy discutido por la doctrina y la jurisprudencia. Sobre este aspecto se pronuncia nuestro máximo Tribunal Colegiado cuando al resolver la acción de habeas corpus interpuesta a favor de la Señora INDIRA ANAICA PINZON DE CARRILLO contra el señor Fiscal Auxiliar de la República. (Magistrado Ponente: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA).

En cuanto a la joven INDIRA ANAICA PINZON DE CARRILLO, esposa del señor NELSON CARRILLO, consideramos que es poco creíble el hecho, que viviendo en el mismo inmueble, no se haya percatado de lo que ocurría en su casa; y a pesar que la misma, en fecha reciente, dio a luz una criatura, no puede considerarse su estado post-parto, como una patente para el Tráfico de Drogas, no obstante lo que expresa el Licenciado CARRERA, en libelo impetrado en este despacho, es por ello, que el suscrito Fiscal Auxiliar de la República. Dispone Decretar, la detención preventiva de INDIRA ANAICA PINZON DE CARRILLO, en base a lo que señalan los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial" (fsd. 237-238, 243 y 246). (sic).⁽⁸⁰⁾

En la parte inicial del estudio en comento, el Fiscal Auxiliar ordena la detención de la mujer recién dada a luz, sobre la base de que su estado, no es

⁽⁸⁰⁾ Registro Judicial, junio de 1992

una patente de corso para cometer hechos delictivos, posición que pareciera tener algún grado de lógica, pero la norma sustantiva contenida en el artículo 75 del Código Penal, y la norma adjetiva contenida en el 2747-D de la norma adjetiva, establece totalmente lo contrario.

La Corte se manifiesta contraria a la posición del Fiscal Auxiliar y en su fallo de 26 de junio de 1992 dejó sentado que:

“A juicio de esta corporación la facultad” otorgada a los Agentes del Ministerio Público y a los administradores de justicia por el artículo 2147-D, que comentamos, debe ejercerse con libertad, con generosidad, para proteger al recién nacido, quien necesita la leche materna como alimento para su desarrollo y como protección contra enfermedades, durante los primeros meses de vida. Este criterio tiene apoyo legal en el artículo 75 del Código Penal que ordena suspender la ejecución de la pena de prisión cuando “se trata de mujer embarazada o que ha dado a luz recientemente, hasta cuando la criatura haya cumplido seis (6) meses”.

Si una mujer culpable de delito no puede ser encarcelada si está amamantando a su hijo, una mujer a quien se imputa un delito, con mayor razón no debe ser detenida durante ese período.

Sin embargo, los nuevos elementos probatorios allegados al proceso de habeas corpus, los cuales deben ser

preliminamente valorados, en relación con la declaración rendida por la Imputada en el acto de la audiencia, sólo para los efectos de calificar de legalidad de la detención preventiva, crea una duda razonable en el ánimo de los Magistrados acerca de que estos elementos probatorios constituyen indicios de responsabilidad contra la señora Pinzón de carrillo. Como de conformidad con el artículo 2147-A del Código Judicial, las medidas cautelares sólo se aplicarán si existen graves indicios de responsabilidad en contra del Imputado, en el presente caso, la detención decretada, debe declararse ilegal.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL, la detención de la señora INDIRA ANAICA PINZON DE CARRILLO y ORDENA que sea puesta en libertad inmediata, si no tuviere otra causa pendiente. ⁽⁸¹⁾

Cabe destacar que para los efectos de que una mujer embarazada o en el período del post-parto, se le encuentre suficientes elementos que la vinculen con el hecho punible, dicha detención es legal, pero es obligación del Tribunal de Habeas Corpus reemplazar la orden de detención por las otras medidas cautelares de carácter personal que establecen los literales a, b y c del artículo 2147-B del Código Judicial, en razón del fuero penal de que disfruta la mujer embarazada, fuero penal que consiste en "El deber del Estado de procurar las

⁽⁸¹⁾ IDEM

mejores condiciones para que la criatura que se desarrolla en el claustro materno, pueda nacer con un soporte médico y un ambiente digno (Fallo de 26 de junio de 1992 y de 24 de junio de 1994).⁽⁸²⁾

L. PROCEDE ACCION DE HABEAS CORPUS CONTRA LA NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA CUANDO SE TRATA DE MUJER RECIEN DADA A LUZ

Sobre esta particularidad el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en fallo de 2 de julio de 1997, AL RESOLVER EL RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA SEÑORA CARMEN ALICIA CANDANEDO CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS.

“A juicio del Pleno, en este caso, a pesar de que la favorecida con esta acción fue encontrada culpable por la comisión de un delito y se encuentra cumpliendo la pena correspondiente, en estos momentos su detención es ilegal por efectos del fuero maternal que le corresponde a la mujer que acaba de dar a luz y está obligada a amamantar a su hijo. Consecuentemente, la pena de prisión debe ser diferida hasta que su hijo recién nacido haya cumplido seis meses.”⁽⁸³⁾

⁽⁸²⁾ Sentencia de 27 de junio de 1992 y de 24 de junio de 1994, citados por MOLINO MOLA, Edgardo, Op. Cit., Pág 546

⁽⁸³⁾ Registro Judicial, julio de 1997, pág 34

Sobre esta facultad que otorga la ley a los tribunales de suspender temporalmente la ejecución de la pena, la ha mantenido la Corte de manera firme y reiterada, así lo notamos en que hace el referido fallo de 2 de julio de 1997 cuando cita otro anterior del mismo y dice:

“... debe ejercerse con liberalidad, generosidad, para proteger al recién nacido, quien necesita la leche materna como alimento para su mejor desarrollo y como protección contra enfermedades, durante los primeros meses de vida.

Este criterio tiene apoyo legal en el artículo 75 del Código Penal que ordena suspender la ejecución de la pena de prisión cuando “se trata de mujer embarazada o que ha dado a luz recientemente, hasta cuando la criatura haya cumplido 6 meses”. (Pág. 269, Registro Judicial, junio 1992)⁽⁸⁴⁾

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN de CARMEN ALICIA CANDANEDO durante el período que establece el artículo 75 del Código penal, y ORDENA su inmediata libertad.

⁽⁸⁴⁾ IDEM

De la presente resolución se colige que una vez concluido el embarazo de la señora CARMEN ALICIA CANDANEDO, cabe a su favor la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un periodo de seis (6) meses, toda vez que el numeral segundo (2do.) del artículo 75 del Código Penal ha establecido ese Derecho.

Igualmente señala, que la detención es ilegal cuando se trata de mujer que da a luz al momento de estar cumpliendo pena de prisión, por los efectos del fuero maternal que la ampara. Este privilegio sólo es efectivo si nace el recién nacido y cumplido el término de los seis (6) meses de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión pierde efectos este derecho.

M. PROCEDE ACCIÓN DE HABEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES QUE ORDENE DETENCIÓN PREVENTIVA VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO.

En este caso en particular, se han dado situaciones similares sobre la materia (violación al debido proceso), razón por la cual nos permitimos citar LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1992. PRESENTADO POR EL LICENCIADO RAFAEL RODRIGUEZ. EN SU CALIDAD DE APODERADO SUSTITUTO DE JOSÉ ANTONIO PARRA LICIA Y DE BELÉN YAÑEZ ALVAREZ CONTRA LA ORDEN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE:

CARLOS LUCAS LOPEZ.

Sin embargo, en el caso bajo estudio existe la peculiaridad de que la medida cautelar personal de detención preventiva, se decretó en la misma resolución que ordena el llamamiento a juicio de los imputados. En esta circunstancia, la medida cautelar decretada se torna parte integral del auto de llamamiento a juicio, es por ello que al anunciarse la apelación contra este auto, quedan suspendidos inmediatamente los efectos de la resolución completa, incluyendo obviamente al artículo 2221 del Código de Procedimiento Penal, en la jurisprudencia y en la costumbre tribunalicia.

Si los efectos de la resolución dentro de la cual se ordenó la primera medida cautelar dictada en este proceso, es decir, aquella que contiene el auto de llamamiento a juicio de fecha 14 de noviembre de la Corte resulta improcedente que el Magistrado Sustanciador de la causa penal haya dictado una providencia posterior, de fecha 6 de octubre de 1992, en la que decreta la aplicación de una nueva medida cautelar personal de detención preventiva en perjuicio de los encartados PARRA LUCIA y YAÑEZ ALVAREZ.

A juicio del Pleno de la Corte, resulta más notorio que la segunda orden de detención preventiva involucra la infracción del principio del debido proceso, cuando observamos que según las

constancias del expediente, entre una y otra medida cautelar, no se han presentado hechos trascendentales que implicaran un cambio de circunstancias de tal magnitud, que hubiera compelido al Tribunal de la causa a actuar de esta manera. Lo procedente en este caso era darle el trámite que la Ley establece a la apelación anunciada.

Los razonamientos expuestos nos permiten concluir que la segunda orden de detención preventiva no debió ser emitida y que por tanto deber ser revocada. Sin embargo, es preciso aclarar que el efecto de inmediato de la revocatoria de esta orden, será la declaratoria de ilegalidad de la detención que sufre JOSÉ ANTONIO PARRA LUCIA y la consecuente restitución en el cargo público que ocupa en la Policía Técnica Judicial, hasta tanto no surjan nuevos elementos que permitan una revaloración del caso. En lo que respecta al otro Imputado, Belén Yañez Alvarez, la consecuencia de la revocatoria de la segunda orden de detención preventiva, será la declaratoria de ilegalidad de dicha orden, en vista de que el mismo no se encuentra detenido.

Como corolario de todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la orden de detención preventiva que pesa sobre BELEN YAÑEZ ALVAREZ y la detención preventiva que sufre JOSÉ ANTONIO PARRA LUCIA, originadas ambas en la providencia de fecha 6 de octubre de 1992, proferida por el Magistrado Sustanciador, del

Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso penal por el delito del homicidio en un desconocido que se le sigue de oficio a los prenombrados.⁽⁸⁵⁾

La situación jurídica radica en que una vez dictada la medida cautelar personal de detención preventiva, dentro de la misma resolución que ordena el llamamiento a juicio de los imputados y luego la resolución es apelada queda suspendido el efecto tanto del auto llamamiento a juicio como la medida cautelar establecida. Por lo que la dictación de una nueva medida cautelar en perjuicio de los encartados cuando no se han dado cambios procesales que justifiquen su dictación trae como consecuencia una notoria violación al debido Proceso.

La sola dictación de una nueva resolución trae como consecuencia la ilegalidad del procedimientos sino se han registrado cambios previos y en su defecto la inmediata libertad del imputado.

N. LA AUTORIDAD QUE ORDENA LA DETENCION DE UNA PERSONA, ESTA OBLIGADA A MOTIVAR DICHA ORDEN Y ESTABLECER LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE LO CONLLEVAN A DICTAR DICHA MEDIDA CAUTELAR. DE LO CONTRARIO HAY BASE PARA JUSTIFICAR UNA INVESTIGACION CRIMINAL CONTRA LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO QUE ORDENO LA DETENCION ILEGAL:

⁽⁸⁵⁾ Registro Judicial, Noviembre de 1992, Pág 14

En materia procesal, los administradores de justicia están investidos de ciertos poderes extraordinarios que caracterizan al juzgador moderno. También están en la obligación de cumplir ciertos deberes contenidos en el artículo 119 del Código Judicial de manera general y el 2159 de manera especial.

Dentro de estos deberes está la obligación que tienen los administradores de justicia de motivar sus resoluciones judiciales.

Este aspecto lo aborda la Corte Suprema de Justicia al resolver acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado Alcibiades Villarreal Lay, en representación de la ciudadana Asiática SU QUIAO JOU, en Fallo de 9 de junio de 1995, (Mag. Ponente: HUMBERTO ANDRES COLLADO TAPIA).

La referida providencia redactada en forma muy lacónica adolece de serios defectos. En primer lugar, la diligencia de marras, alude a la conducta delictiva genérica, pues hace referencia de manera textual a la “presunta comisión de un delito de tipo fiscal aduanero” sin indicar, con toda claridad, el delito específico por el cual se le investiga. Observa la Corte que de acuerdo con los artículos 15 y 17 de la Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984, los delitos de tipo fiscal aduanero son únicamente dos. El contrabando, por una parte, y por otra, la defraudación aduanera. El artículo 16 de la citada excerta señala los hechos que constituyen delito de contrabando y el artículo 18 los hechos que tipifican la conducta delictiva denominada defraudación

aduanera. Por consiguiente, el funcionario que decretó la detención debió explicar cual era el delito concreto por el cual se estaba investigando a los sindicatos. Y es que el hecho de que el artículo 45 de la Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984, autorice la detención preventiva de los implicados en el delito aduanero, no releva o dispensa al Agente de Aduanas del deber de motivar o sustentar, con los debidos razonamientos, tal medida cautelar; exigencia contenida en el artículo 21 de nuestra Constitución que es desarrollado por el precepto 2159 del Código Judicial.

Estas omisiones, propias de una investigación deficiente, dan muestra inequívoca de una actuación realizada al margen de claras garantías penales, como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia – artículo 22 de la Carta Fundamental-. Lo expresado, en consecuencia, permite concluir que la providencia por el cual se decreta la detención preventiva de la señora SU QIAO JUN carece de los razonamientos necesarios que permitan justificar la medida cautelar aplicada, lo que ocasiona la inevitable nulidad de la misma, a tenor de lo establecido en el artículo 2159 del Código Judicial.

Por las razones anteriores, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la orden de detención expedida contra SU QIAO JUN; mujer de nacionalidad China con cédula de identidad personal N° E-8-62378 y, en

consecuencia, REVOCA la providencia N° AL-ARA-014 de 7 de abril de 1995, dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Licenciado Javier Arosemena.

De conformidad con el artículo 199 numeral 9 del Código Judicial AMONESTA al Licenciado Javier Arosemena, Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, y ORDENA, en atención al artículo 2600 de dicha excerta procesal, que se compulsen copias debidamente autenticadas de las sumarias de naturaleza penal aduanera seguidas a SU QIAO JUN, NELSON ABREGO ARIZA Y HERMENEGILDO SANTANA GONZALEZ, lo mismo que del cuaderno de habeas corpus presentado a favor de SU QIAO JUN, a fin de que se remitan al Ministerio Público para que inicie las Investigaciones penales de rigor. ⁽⁸⁶⁾

El Fallo en comento es de especial relevancia, ya que resalta la aplicación del artículo 2600 del Código Judicial que en raras ocasiones vemos su cumplimiento, el cual establece que si hay suficientes motivos para sancionar al funcionario que emitió la orden de detención ilegal se debe compulsar copias, para iniciarle una investigación.

Lastimosamente esto pocas veces se hace, y las remotas veces que el Tribunal de Habeas Corpus, ordena que se compulse copias para abrir una

⁽⁸⁶⁾ Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 9 de junio de 1995

investigación al funcionario que ordenó la detención ilegal. Esta investigación termina sin aplicarle NINGUNA sanción a la autoridad infractora del derecho de libertad.

Consideramos que es necesario que el tribunal de Habeas Corpus, sea más enfático en el cumplimiento del artículo 2600 del Código Judicial, y se sancione a todo aquel funcionario que atente contra el sagrado derecho de libertad.

En el fallo en estudio, notamos como la autoridad que ordena la detención ilegal, lo hace de forma tan simple, que ni siquiera cumple con el deber de motivar su decisión.

Sobre este aspecto es imperativo resaltar las posiciones del Profesor Pedro Barsallo, cuando en sus Magistrales Clases de Maestría explicaba:

Es deber del juzgador al dictar una resolución judicial que contenga decisión, es decir, cuando sea auto o sentencia, expresar los fundamentos de la decisión que profiere, motivando así la resolución de que se trate, con cita de las respectivas disposiciones legales en que se basa esa decisión. (Arts. 976 y 977 del Código Judicial). Este deber del juez constituye un eficaz control sobre la gestión jurisdiccional desde el momento en que con base al mismo se evitan posibles arbitrariedades, pues la exigencia de dar explicación,

motivación o fundamento en las resoluciones judiciales, se traduce necesariamente en que las decisiones de los jueces deberán basarse en la Ley y en la prueba del derecho pretendido, pues de lo contrario, negando la esencia misma de la jurisdicción, el pronunciamiento judicial podrá ser el producto del capricho o la arbitrariedad. ⁽⁸⁷⁾

Luego de las explicaciones y caracterizaciones de la obligación que tienen los juzgadores de motivar sus decisiones. No cabe duda de que si esta obligación es omitida. Se debe sancionar al Funcionario y si reincidiese de esta práctica ilegal, debería ser despedido y de esta manera terminaríamos con las detenciones ilegales producto de la inoperancia de un funcionario incompetente.

O. PROCEDE ACCION DE HABEAS CORPUS POR DETENCION ILEGAL, FUNDAMENTADA EN PRUEBA ILICITA.

Si bien es cierto nuestro Código Judicial vigente, en materia de prueba, acoge el sistema de "números Apertus"; pero esto no significa que se aceptan todo tipo de pruebas ya que el artículo 769 del Código en referencia establece que son válidos los medios probatorios "que no estén expresamente prohibidos por la Ley, no violen derechos humanos, ni son contrario a lo moral o al orden público"

(87)BARSALLO, Pedro A. , Op Cit., Pág 193

Sobre este interesante tema probatorio se pronuncia nuestro Máximo Tribunal de Justicia al resolver:

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA SEÑORA MARIA M. CACERES, A FAVOR DE LUIS ALBERTO CACERES Y CONTRA EL FISCAL 2º. DEL CIRCUITO DE CHIRIQUI. MAGISTRADO PONENTE: FABIAN A. ECHEVERS,

Como se observa, ni el cabo, ni el abogado, ni el dueño de la casa estaban investidos de facultad legal para decretar o llevar a cabo una diligencia de allanamiento, facultad que, según nuestro Código de Procedimiento, corresponde, única y exclusivamente, a los funcionarios de instrucción (Capítulo VII, Título II, Libro III). Todo parece indicar que se trataba de un arreglo de cuentas entre el Sindicato y el Licenciado Martínez Santamaría, y que fue ese cúmulo de ilegalidades lo que sirvió de fundamento para que, meses más tarde, se hiciera efectiva la detención de Cáceres.

Por otra parte y en completa concordancia con las disposiciones citadas, el mismo Código, en el segundo párrafo del artículo 2068 establece: "En ningún caso se tendrá como diligencias del sumario, las prácticas por persona o funcionarios, que no tengan la calidad de funcionarios de instrucción, salvo los casos expresamente señalados en la Ley".

Entre los deberes generales de los Magistrados y Jueces, el artículo 199 del Código Judicial estipula el de en su numeral "9". Prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la

dignidad, lealtad de la justicia, probidad y buena fe, lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la Ley o de realizar actos procesales irregulares". Resulta entonces natural que deba recibir adecuada censura la conducta que genera violación flagrante de claros principios constitucionales y legales en materia de derechos humanos y procesales, como ocurre en el caso que ahora se examina. De allí que se considere la pertinencia de lo dispuesto en la sentencia apelada, en el sentido de "solicitar al Ministerio Público que realice las investigaciones correspondientes" (f. 37).

Por las consideraciones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia de fecha 10 de septiembre de 1989 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y, en su lugar, DECLARA ILEGAL la detención que sufre LUIS ALBERTO CACERES. ⁽⁸⁸⁾

En materia procesal existe la conocida teoría de "Los Frutos del Arbol envenenado", que establece que las pruebas ilícitamente adquiridas, vician de nulidad el proceso, y en consecuencia, vician las demás pruebas adquiridas, en función de las adquiridas ilícitamente.

⁽⁸⁸⁾ Registro Judicial, Septiembre de 1989, Pág. 127 a 131

Sobre este particular se refiere el Magistrado Arturo Hoyos:

“A nuestro juicio, el derecho a presentar y contradecir pruebas, elemento integrante de la garantía constitucional del debido proceso legal, incluye sólo las pruebas lícitas y se viola el artículo 32 de la Constitución si en un proceso se admiten medios de prueba ilícita o ilegítimamente obtenidos (deben rechazarse “los frutos del árbol envenenado”) o aportados al proceso, independientemente de la existencia de una norma legal expresa al respecto. En circunstancias excepcionales podrían admitirse pruebas ilícitamente obtenidas si con ello se optimizan otros derechos protegidos por la Constitución o los principios fundamentales básicos de la convivencia social según se recojan y protejan en el ordenamiento constitucional. En estos casos excepcionales habrá que proceder a una ponderación de intereses o de valores constitucionalmente protegidos o reconocidos”.⁽⁸⁹⁾

El procesalista panameño Adán Amulfo Arjona, de su artículo contenido en Estudios Procesales, Volúmen II, comenta:

- Arjona le atribuye a Ada Pellegrini haber señalado los siguientes requisitos para la determinación de lo que es prueba ilícita:**
- a) Habrá prueba ilegal cuando mediante ella se violen principios**

⁽⁸⁹⁾ La Garantía Constitucional del Debido Proceso Legal, en Revista LEX, Enero – Junio 1986, Pág 112.

- de carácter material o procesal, consagrados en el ordenamiento jurídico.
- b) Por otro lado, ilegitimidad del medio probatorio cuando a través de él se vulnera una prohibición contenida en la Ley procesal; y
 - c) Habrá, finalmente, prueba ilícita cuando mediante ella se infrinja una prohibición legal de carácter sustantiva.⁽⁹⁰⁾

En atención al Fallo en comento, queda aclarado que la detención que se ordene con base a pruebas ilícitamente adquiridas, debe declararse ilegal; ya que se vulnera una prohibición contenida en la Ley adjetiva.

P. CABE RECURSO DE HECHO, DENTRO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS POR APELACIÓN DENEGADA.

Esta situación jurídica especial se da en razón de la presentación de una acción de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el cual niega la acción de habeas corpus por considerar que ya se había presentado una acción idéntica y las condiciones del detenido no habían variado, por lo que a criterio de este Tribunal Superior, había operado el fenómeno de "Sustracción de Materia". El apoderado del detenido al notificarse de la resolución que niega la acción de habeas corpus, anuncia recurso de apelación. El Tribunal Superior no admite el recurso de apelación diciendo:

⁽⁹⁰⁾ Las Pruebas Ilícitas ¿Tienen valor en el Proceso?, en Estudios Procesales Compilado por Jorge Fábrega P., Tomo II, Editora Jurídica Panameña, Pág. 1100

"La Resolución que declara la sustracción de materia no se encuentra comprendida en el catálogo de las resoluciones apelables conforme al artículo 2429 del Código Judicial, y que este "auto declarativo" no se encuentra siquiera regulado en el ordenamiento procesal, por lo que mal podría ser objeto de recurso alguno."⁽⁹¹⁾

Lo medular de esta situación recurrida, consiste en determinar si la resolución que establece la sustracción de materia tiene características de sentencia, para que pueda ser apelada.

Sobre estos términos el apelante invoca recurso de hecho, lo cual resulta poco usual y procesalmente novedoso dentro de una acción de habeas corpus.

Sobre este particular la Corte al resolver el **RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HILARIO RODRÍGUEZ UREÑA, CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EL 30 DE OCTUBRE DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA, RESOLVIÓ:**

Esta Corporación Judicial debe proceder por ende, a la determinación de si la resolución que declara

⁽⁹¹⁾ Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 30 de octubre de 1998

sustracción de materia, es o no, recurrible.

Al efecto ha de indicarse, que el profesor JORGE FABREGA en su conocida obra "Estudios Procesales" ha externado los siguientes comentarios en relación a esta figura procesal:

"Se trata de un Instituto poco examinado por la doctrina si bien la jurisprudencia se ha visto obligada a reconocerla. Es un medio de extinción de la pretensión "constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes: no pudiendo el tribunal Interviniente emitir un pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida". (Jorge Peyrano, El Proceso Atípico, pág. 129). "(FABREGA, JORGE, "La Sustracción de Materia", Estudios Procesales, Tomo II, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1988, p. 1195)

La doctrina jurisprudencial de la Corte ha venido manteniendo de manera uniforme, que nos encontramos ante un fallo inhibitorio por sustracción de materia, en aquellos casos en que efectivamente ha desaparecido el objeto jurídico litigioso base de la pretensión del recurrente, lo que imposibilita o hace totalmente ineficaz, un pronunciamiento de mérito del Tribunal requerido. En resolución de 12 de diciembre de 1994, la Corte señaló que "La naturaleza jurídica de la sustracción de materia implica una absoluta imposibilidad de pronunciarse de

manera efectiva con relación a la pretensión del recurrente.”

De lo transcrito se desprende, que el pronunciamiento de sustracción de materia requiere necesariamente, un examen de fondo a la pretensión de un recurrente, de cuya evaluación se incluye la imposibilidad de acceder o negar lo pedido.

De allí que la Corte le haya dado al pronunciamiento de sustracción de materia el carácter de sentencia, y así lo expresó claramente en sentencia de 14 de agosto de 1997 emitida por el pleno de la Sala Tercera de la Corte, cuando textualmente expresó:

“La resolución en que se declara la sustracción de materia es una sentencia. En este sentido el jurista Jorge Fábrega Ponce señala que “la razón por la cual el Juez ha de decidir este extremo en el fallo de fondo, es que, en nuestro sistema la instancia se termina mediante el fallo de fondo o mediante los supuestos especiales previstos en la Ley (caducidad; cosa juzgada; nulidad de lo actuado, etc.)” (Jorge Fábrega P., Estudios Procesales, Editora Jurídica Panameña, Segunda Edición, Panamá, 1990, Tomo II, págs. 1195 y 1196).

En virtud de lo anterior, y siendo que a la declaración de sustracción de materia se le reconoce la calidad de sentencia, resulta recurrible (apelable) en nuestro ordenamiento procesal civil y penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 1116 y 2429

**del Código Judicial, respectivamente.
(92)**

Luego del análisis de los postulados de nuestra Corte Suprema de Justicia, queda claro, y no admite otra interpretación, que la resolución judicial que resuelve la sustracción de materia, tiene carácter de sentencia.

Esta posición ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia en diferentes fallos tal como se desprende de la resolución de 24 de febrero de 1995, emitida por este Tribunal al conocer de un recurso de hecho presentado contra una resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, y donde la Corte dijo:

“En el presente negocio el Pleno de los Magistrados de esta Corte dispuso tramitar el recurso de hecho tomando en consideración que el recurso de hecho es parte del recurso de apelación”. (93)

Luego del análisis del fallo revisado, queda claro que es perfectamente viable un recurso de hecho, dentro de una acción de habeas corpus por apelación denegada.

(92) Idem

(93) Extracto de Sentencia de 24 de febrero de 1995, citado por el Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de octubre de 1998

Q. CONFLICTO DE COMPETENCIA: EN MATERIA DE MENORES Y FAMILIA, EL TRIBUNAL COMPETENTE PARA INTERPONER LA ACCION DE HABEAS CORPUS LO SERAN LOS TRIBUNALES SUPERIORES ORDINARIOS.

En materia de habeas corpus, sólo será competente para su conocimiento, los Tribunales Superiores Ordinarios, independientemente que el caso provenga de la jurisdicción especial de Familia o Menores.

Cuando se trata de detenciones de menores de edad, o derivados de asuntos que se ventilan en la jurisdicción de familia, ha existido la errónea tesis de que el Tribunal competente para la acción de habeas corpus es el Tribunal Superior de Menores.

Esta confusión surge debido a que la Corte en sentencia de 27 de julio de 1995 dijo:

“Sabido es que la Corte Suprema de Justicia ha sentado, en reciente pronunciamiento, la jurisprudencia de que las acciones de habeas corpus que se originen como consecuencia o en la esfera de la jurisdicción de menores, deben ser atendidos por los tribunales especiales creados por la ley 3ª de 1994. Este pronunciamiento se hizo con la opinión mayoritaria del pleno de la Corte Suprema, pero con tres salvamentos de voto.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en seguimiento a lo dispuesto en la referida resolución de 27 de julio de 1995, por considerar que también es aplicable al negocio de habeas corpus que se elevó a su conocimiento, ha declinado en esta ocasión, la acción de habeas corpus en el Tribunal Superior de Familia.⁽⁹⁴⁾

Con el transcurrir del tiempo, la Corte Suprema de Justicia ha cambiado este criterio, y ha establecido que la competencia le debe corresponder a los Tribunales Superiores Ordinarios. Así lo hizo saber la sentencia de 1 de noviembre de 1995, **CON PONENCIA DEL MAGISTRADO EDGARDO MOLINO MOLA, AL RESOLVER HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO BAUM MULLEN III CONTRA LA JUEZ SEGUNDA MUNICIPAL, RAMO CIVIL, APELACIÓN. (CONFLICTO DE COMPETENCIA). LA CORTE DIJO:**

Sin embargo, esta corporación judicial advierte que nos encontramos ante una acción de habeas corpus propuesta contra una orden expedida por la juez segunda municipal de la jurisdicción civil ordinaria, en funciones de su competencia, aunque el conflicto que origina la orden de arresto por desacato del señor Muller se produce dentro de un proceso de alimentos.

En consecuencia, el punto a decidir mediante la acción Instaurada, recae en la legalidad de la orden de privación o restricción de libertad corporal ordenada por una juez de los tribunales de justicia ordinarios, para

⁽⁹⁴⁾ Fallo de 27 de julio de 1995 de la Corte Suprema de Justicia citada por MOLINO MOLA, Edgardo Op. Cit., Pág. 534

lo cual el tribunal de habeas corpus deberá determinar en síntesis, si la misma cumple o no con las formalidades constitucionales y legales establecidas y si la misma tiene fundamento legal.

Si bien a través de la resolución de 27 de julio de 1995, única en estos casos hasta ahora, se adscribe competencia a los tribunales superiores de menores para conocer de las acciones de habeas corpus que involucren a menores de edad, la sentencia comentada no es analógicamente aplicable a la controversia constitucional planteada, puesto que la orden de arresto se origina en la esfera de la jurisdicción ordinaria.

En este mismo orden de ideas, resultan válidos los argumentos vertidos por el Tribunal Superior de Familia en torno a la imposibilidad de conocer en segunda instancia de una acción de habeas corpus que se originó en juzgado de circuito penal.

Esta colegiatura concluye que en el negocio sometido a decisión por parte de este Tribunal, la orden de arresto fue expedida por la juez municipal civil que conoce a prevención de los juicios de alimentos, facultada por el artículo 836 del Código de la Familia, por lo que la acción de habeas corpus se instaura contra una orden de privación de libertad proferida por una juez de la jurisdicción ordinaria en funciones que son de su competencia, por lo que al realizar un enjuiciamiento lógico-jurídico de la situación se colige que el

conocimiento de la acción compete a los tribunales ordinarios, correspondiéndole al Segundo Tribunal Superior de Justicia, en grado de apelación, conocer de la acción propuesta para prevenir la detención del alimentante declarado en desacato.” (95)

La Corte ha mantenido este último criterio de fijar la competencia a los Tribunales Superiores Ordinarios así lo dejó aclarado, en reciente fallo de 15 de diciembre de 1998, **CUANDO AL RESOLVER ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MORÁN RIVKA MAYER, MAYA RAHEL MAYER, MATAN YEHUDA MAYER, CONTRA EL JUEZ PRIMERO SECCIONAL DE MENORES. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS.**

Dijo:

El habeas corpus es una garantía de naturaleza constitucional, cuyo conocimiento el Código Judicial atribuye a los tribunales de justicia ordinaria (artículo 2602), y no a algún tribunal especializado, sobre todo el Superior de Menores, para entonces inexistente. De allí que nuestro ordenamiento jurídico no contenga una norma que designe al Tribunal Superior de Menores para conocer de demandas de habeas corpus, en los casos de menores.

Si bien es cierto que el artículo 747 del Código de la Familia creó una jurisprudencia especial de familia y de menores, en su artículo 755 establece taxativamente las atribuciones de los

(95) Fallo de 1 de noviembre de 1995 de la Corte Suprema de Justicia, citado por MOLINO MOLA, Edgardo, Op Cit., p. 533 y 534

Tribunales Superiores de Menores, entre las cuales no se incluye el conocimiento de negocios de naturaleza constitucional.

A juicio del Pleno, la competencia de esa jurisdicción no se extiende a asuntos constitucionales, sino exclusivamente a los Juzgados Municipales, Juzgados de Circuitos Penales, Tribunales Superiores y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Ello no ha sido óbice para que la Corte Suprema haya conocido, en grado de apelación, de algunas acciones de habeas corpus resueltas por el Tribunal Superior de Menores en primera Instancia, con infracción de la regla de competencia antes aludida, lo que en modo alguno implica la derogación de tal regla.

Por las razones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, **REVOCA** la decisión del Segundo Tribunal Superior y le **ORDENA** asumir el conocimiento de la demanda de habeas corpus promovida por el Licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila. ⁽⁹⁶⁾

De esta manera la Corte resuelve el conflicto de competencia existente, y adscribe la competencia para efectos de la acción de habeas corpus a los Tribunales Superiores Ordinarios.

(96) Fallo de la Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de 19998

R. LA PRUEBA EN APELACION, EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS

Hemos aclarado en este estudio que la función del Proceso Constitucional de Habeas Corpus es determinar si la detención es legal o ilegal, sin que esta valoración entre al fondo del delito que se investiga.

Pero puede darse la situación que se apele la resolución que declara legal la detención, en razón de que han surgido nuevos elementos probatorios que desvirtúan el fundamento jurídico por el cual se decretó la detención, entonces al variar el fondo de la situación jurídica controversial, también cambiaría el fundamento que mantiene la detención.

Esta situación particular la podemos analizar en, fallo de la Corte Suprema de Justicia calendado 21 de diciembre de 1998 por el cual se resolvió.

**ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOAN GUEVARA RODRIGUEZ
CONTRA LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A.
FABREGA Z.**

La Corte dijo:

En cuanto a la valoración de la declaración notarial rendida por ANDREA DEL CARMEN VILLALAZ que se acompaña con la presente acción de habeas corpus, señala el Segundo Tribunal Superior que ya ese tribunal tuvo oportunidad de pronunciarse en resolución de 30 de octubre de 1998, que examinó la legalidad de la detención de ALBERTO ABADI STESH “quien figura con JOAN GUEVARA y WALTER SANCHEZ, como sindicados en la misma causa”.

El Magistrado sustanciador dispuso, mediante providencia de 1° de diciembre de 1998, que las declarantes ANDREA DEL CARMEN VILLALAZ e ITZA VILLALAZ GONZALEZ comparezcan a los estrados del tribunal de habeas corpus, a fin de que se ratifiquen de su declaración jurada de 16 de octubre de 1998. ⁽⁹⁷⁾

Lo fundamental del fallo en comento, es que la situación jurídica controversial se da en sumarias en investigación por el delito de violación carnal, donde la ofendida, luego de la presentación de la denuncia por parte de su madre, hace una declaración jurada ante notario, donde releva de toda responsabilidad a los imputados.

Al ser negada la acción de habeas corpus, la Corte como tribunal de alzada, ordena que dichas declaraciones notariales sean investidas de

⁽⁹⁷⁾ Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de octubre de 1998

juridicidad por lo cual se requiere que las declaraciones notariales sean ratificadas ante el Tribunal de Habeas Corpus en alzada.

El Fallo en estudio reafirma la formalidad procesal de la ratificación probatoria y dice:

De la declaración antes transcrita se desprende claramente que el objeto de la encuesta penal, es decir, el delito de violación carnal, según declara bajo juramento la propia ofendida, no se dio, inclusive menciona que ha tenido relaciones sexuales con otra persona, no las aquí señaladas, liberando de toda responsabilidad al joven JOAN GUEVARA RODRIGUEZ, ALBERTO ABADI BATESH y WALTER OSORIO. Ahora bien, compartimos el criterio vertido por el Segundo Tribunal Superior, en que al momento de que se atendió el habeas corpus, cuya apelación es de conocimiento de esta Superioridad, la Declaración Notarial "no ha sido incorporado al sumario y no ha estado a disposición ni del funcionario instructor en la causa ni del funcionario juzgador a quien por ley le ha de corresponder la calificación del negocio penal". Además de que no resulta posible que el proceso constitucional de habeas corpus se convierta en un proceso paralelo al de instrucción al valorar pruebas que deberán ser de conocimiento del funcionario competente. No obstante lo anterior, el nuevo elemento incorporado, este es, la declaración notarial ha sido ratificada de los estrados de este tribunal, a

petición del Magistrado Sustanciador, tanto por la ofendida como por la madre de ésta, quien fuera que formulara la denuncia originalmente, por lo que se deberá concluir con la inexistencia del delito, y, como consecuencia de ello, las órdenes de detención impartidas quedarán sin efecto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA, la Resolución de 16 de noviembre de 1998, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, en su defecto, DECLARA ILEGAL la detención preventiva dictada contra JOAN GUEVARA RODRIGUEZ y ORDENA sea puesto inmediatamente en libertad, sino existe otra causa penal en su contra. ⁽⁹⁸⁾

Esta formalidad procesal a que se refiere el Fallo estudiado está contenido en las disposiciones generales de prueba del Código Judicial, que en el párrafo cuarto del artículo 910 dice:

Artículo 910

..... Si las declaraciones han sido recibidas fuera de proceso, ante Notario en forma de atestación, los testigos serán ratificados. Las ratificaciones no serán válidas si no se repitieren los hechos declarados, es decir, si los testigos se limitaren a decir que se afirman y ratifican, sin tener nada que añadir ni suprimir. (Lo subrayado es nuestro)

⁽⁹⁸⁾ IDEM

Así pues, queda claro el principio procesal de que las pruebas para ser valoradas tienen que ser incorporadas al proceso, y en el caso de declaraciones notariales, las mismas deben ser ratificadas en el Tribunal que realiza las investigaciones.

Del estudio del Fallo de la Corte Suprema de Justicia calendado 30 de octubre de 1998, podríamos resaltar los siguientes aspectos procesales.

- Que no es materia de la acción de habeas corpus verificar el fondo del delito que se investiga, limitándose única y exclusivamente a la legalidad de la detención.
- Que si surgen nuevos elementos probatorios, que varían la situación del imputado, y este adquiere su libertad, se cumple el principio básico del Proceso Constitucional de habeas corpus que dice que "la acción de habeas Corpus se extingue desde el momento en que el detenido adquiere su libertad por cualquier causa".
- La Corte reafirma el principio procesal de la comunidad de la prueba, que establece que la prueba no pertenece a la parte sino al proceso, razón por la cual cualquier prueba que se de fuera del expediente debe ser ratificada ante el Tribunal de la causa, para investirla de juridicidad

III. DIFERENTES CLASES DE HABEAS CORPUS:

Como ya lo ha establecido, la Corte Suprema de Justicia en reiterados Fallos, el Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus, contenido en el artículo 23 de la Constitución Nacional, no es una norma estática. La misma es desarrollada por la norma adjetiva contenida en el Código de Procedimiento, en concordancia con los diferentes pactos de Derechos Humanos que nuestro país ha ratificado y convertido en Ley de la República, que de acuerdo a la moderna "Teoría del Bloque de la Constitucionalidad", desarrolla y extienden el ámbito de la norma constitucional.

Partiendo de esta premisa, la jurisprudencia ha aceptado y reconocido, diversas modalidades de habeas corpus, que amplían el concepto cerrado del reconocimiento único del habeas corpus "reparador o clásico". En este orden de ideas la Jurisprudencia Nacional ha reconocido en adición al concepto conservador, el habeas corpus en su modalidad "Preventiva", y "Correctiva". Nosotros desde una concepción procesal más ambiciosa, consideramos se debe reconocer una novísima modalidad, conocida por la Doctrina como el "Habeas Corpus Rectificador" y retomar una modalidad que nuestra norma procesal acepta y que podríamos llamarle Habeas Corpus de Oficio".

Como un ejercicio didáctico, es imperativo hacer algunas consideraciones de las diferentes clases de habeas corpus que reconoce la jurisprudencia y la doctrina.

A. HABEAS CORPUS REPARADOR O CLASICO:

Sobre esta modalidad no debe existir ninguna duda, ya que todos los casos analizados en este Capítulo Tercero corresponden o se identifican con la modalidad "Clásica". O sea, la acción de habeas corpus contenida en el artículo 23 de la Constitución, visto y analizado con un criterio cerrado, literal y conservador. El cual se limita a reconocer la acción de habeas corpus cuando el individuo está detenido, en forma arbitraria, por una orden ilegal que tiene su fundamento en el artículo 23 de la Constitución, cuando taxativamente dice:

Artículo 23: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de la otra persona, mediante el recurso de habeas corpus que podrá ser interpuesto inmediatamente después de la detención y sin consideración de la pena aplicable. El recurso se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles.

El ala conservadora de la doctrina, critica y no acepta las otras modalidades con fundamentos que, el precitado artículo, inicia diciendo: "Todo individuo detenido", o sea que el requisito sine quanon para que se de la acción de habeas corpus es que la persona este efectivamente privada, de forma arbitraria de su libertad ambulatoria.

En adición a este criterio literal de la interpretación de la norma jurídica, lo refuerzan con otro extracto del artículo en comento cuando dice: Se podrán interponer "inmediatamente después de la detención". Lo que deja aclarado con claridad mendiana, que para que se de la figura, el agraviado tiene que estar detenido o preso un minuto después de esta situación, se podrá ejercitar la acción, de lo contrario no tendría soporte jurídico.

Nosotros sobre este aspecto aceptamos la caracterización del habeas corpus en su modalidad reparadora o clásica reconocida por la doctrina como lo concibe el representante de la vindicta pública, Licenciado Luis Alberto Martínez Sánchez que aclara:

El habeas corpus clásico, como su denominación lo indica trata del mecanismo procesal que originalmente surgió, como medio de defensa contra detenciones arbitrarias. Así, "el presupuesto fundamental de este habeas corpus

es una detención ilegítima o arbitraria".⁽⁹⁹⁾

Luego de esta conceptualización académica que hace el jurista panameño, queda aclarado el habeas corpus en su modalidad clásica, contenido en nuestra Constitución, artículo 23.

Vale la pena destacar que nosotros muy respetuosamente, discrepamos con la posición conservadora que se resiste a reconocer las otras modalidades de habeas corpus, amparados en la interpretación gramatical de la norma constitucional, ya que este no es el único criterio de interpretación de la norma que admite la doctrina, pues existen otros medios de interpretación como el histórico, el criterio del bloque o el criterio de la concordancia de la norma procesal, que tiene mayor eficacia que el simple rigor literal o gramatical de la norma jurídica.

B. EL HABEAS CORPUS PREVENTIVO

En esta modalidad especial y novísima de la acción de habeas corpus, el individuo todavía no ha sido detenido. Lo que existe es una amenaza cierta y real y fundada de que existe una orden de detención ilegal tratando de hacerse efectiva contra su persona.

⁽⁹⁹⁾ Defensa Constitucional en el Proceso Penal Panameño. Citado por González Montenegro, Rigoberto, en su obra "El Habeas Corpus", 1993, p 55

Sobre esta modalidad especial de la acción de habeas corpus se refiere atinadamente y con claridad meridiana el Profesor de Derecho Constitucional de nuestra máxima casa de estudios, Rigoberto González Montenegro, cuando en su Obra Intitulada "El Habeas Corpus", aclara:

"Para que el habeas corpus preventivo proceda, no se requiere que la libertad corporal haya sido efectivamente quebrantada, por una detención ilegítima. Basta, en este caso, que existe una amenaza real e Inminente, en perjuicio de la persona que ve su libertad en peligro de perderla". (100)

Para el mejor estudio de esta modalidad de habeas corpus, resulta abligante el análisis de dos (2) precedentes de la Corte Suprema de Justicia, que debe conocer todo profesional del Derecho interesado en este tema, como lo son la acción de amparo presentado por Constantino Juan Lekas y otros, contra el Fiscal Tercero de Circuito el 18 de noviembre de 1991, donde nace vía jurisprudencia el habeas corpus en su modalidad preventiva, y el fallo de 24 de junio de 1992 que resuelve acción de habeas corpus interpuesto por el señor Julián Melo Burbla VS el Fiscal Auxiliar que establece los requisitos que debe cumplir la modalidad de habeas corpus preventivo.

Cabe destacar al respecto que como todo lo novedoso, crea algún tipo de discrepancia, la corriente conservadora deja sentir su disconformidad con la

Sobre esta modalidad especial de la acción de habeas corpus se refiere atinadamente y con claridad meridiana el Profesor de Derecho Constitucional de nuestra máxima casa de estudios, Rigoberto González Montenegro, cuando en su Obra Intitulada "El Habeas Corpus", aclara:

"Para que el habeas corpus preventivo proceda, no se requiere que la libertad corporal haya sido efectivamente quebrantada, por una detención ilegítima. Basta, en este caso, que existe una amenaza real e inminente, en perjuicio de la persona que ve su libertad en peligro de perderla". (100)

Para el mejor estudio de esta modalidad de habeas corpus, resulta abligante el análisis de dos (2) precedentes de la Corte Suprema de Justicia, que debe conocer todo profesional del Derecho interesado en este tema, como lo son la acción de amparo presentado por Constantino Juan Lekas y otros, contra el Fiscal Tercero de Circuito el 18 de noviembre de 1991, donde nace una jurisprudencia el habeas corpus en su modalidad preventiva, y el fallo de 24 de junio de 1992 que resuelve acción de habeas corpus interpuesto por el señor Julián Melo Burbla VS el Fiscal Auxiliar que establece los requisitos que debe cumplir la modalidad de habeas corpus preventivo.

Cabe destacar al respecto que como todo lo novedoso, crea algún tipo de discrepancia, la corriente conservadora deja sentir su disconformidad con la

creación de nuevas modalidades de habeas corpus creados por la jurisprudencia. Pues sostienen los detractores de esta iniciativa, que las nuevas modalidades de habeas corpus en este caso la modalidad "Preventiva" sólo puede ser creada por medio de una modificación al artículo 23 de la Constitución Nacional.

Desde una perspectiva estrictamente didáctica, resulta curioso analizar el nacimiento de esta modalidad de habeas corpus en nuestro Derecho Constitucional. Pues resulta curioso que tal situación se da en razón de un pronunciamiento que resuelve una acción de amparo cuando al resolver la acción de:

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CONSTANTINO JUAN LEKAS, THELMA ROBERTSON Y MANUEL GAVRILIDIS EN CONTRA DEL SEÑOR FISCAL TERCERO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: CECILIO A CASTILLERO V. EN FALLO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1998. LA CORTE SE PRONUNCIA ASI:

Partiendo de una distinción que hace entre la detención física de una persona y la orden de detención preventiva que se pudiera haber dictado contra ella, alega el recurrente que el sentido literal, natural y obvio de la norma constitucional que consagra el mandamiento de habeas corpus exige como requisito previo el de que se haya dado la detención física del individuo que lo invoca, y no simplemente una orden de detención dictada en su contra, ya que para este

PANAMA, CUATRO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1994).

La Corte ha seguido dándole una caracterización procesal al habeas corpus preventivo, estableciendo una serie de caracterizaciones especiales a esta modalidad. Así lo deja plasmado en fallo de 4 de enero de 1994, cuando dijo:

El habeas corpus preventivo se concede con el fin de proteger a los individuos contra amenazas comprobadas de la libertad corporal. Se requiere que el peticionario demuestre, con certeza, la existencia de un temor fundado sobre la eventual privación o afectación de su libertad personal; dicho temor debe ser entonces actual o inminente. Por ello es de la esencia del habeas corpus preventivo: a) la existencia de una amenaza efectiva contra la libertad corporal, la que, por su naturaleza, debe constar en un mandato que ordene una detención preventiva y b) que tal mandato no se haya hecho efectivo. ⁽¹¹⁰⁾

El fallo que se examina posee calidad didáctica, pues con el se explica cuando procede el habeas corpus preventivo esencialmente. Veamos los supuestos:

⁽¹¹⁰⁾ Registro Judicial de enero de 1994 Págs. 30 y 31

último supuesto prevé la Constitución Nacional el remedio del amparo. En otras palabras, para el amparista el artículo 23 de la Constitución Nacional prevé como uno de los presupuestos esenciales del mandamiento de habeas corpus que el solicitante se encuentre privado de su libertad corporal, lo cual implica que, a su juicio, la jurisdicción constitucional nuestra no admite el llamado "habeas corpus preventivo".

Sobre el particular, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia adelanta las consideraciones siguientes:

Es evidente que desde sus orígenes el mandamiento de habeas corpus está dirigido específicamente contra las detenciones arbitrarias o ilegales y así pareciera estar consagrada en el párrafo inicial del artículo 23 de la Constitución Nacional.

En este sentido, las reformas introducidas a la Constitución Nacional no han variado en lo sustancial el texto que aparecía en el primer párrafo de la Constitución de 1946, que hace referencia al derecho que tiene "todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley", para que sea puesto en libertad a petición suya o de cualquier persona.⁽¹⁰¹⁾

⁽¹⁰¹⁾ Registro Judicial de noviembre de 1991, pág. 28 a la 39

La Corte para complementar su fuerza generadora de nuevas matices a la Norma Constitucional, hace un análisis del Derecho Comparado y continúa diciendo:

El estancamiento de nuestra legislación de cara al desarrollo que han experimentado los Derechos Fundamentales en otros países, salta a la vista si se compara el texto del artículo 23, arriba transcrito, y el artículo 2565 del Código Judicial que lo desarrolla, con el que aparece en la reciente Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, promulgada en el mes de octubre de 1989, cuyo artículo 15 reza así:

“Artículo 15. Procede el habeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, Incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto a ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio”.

Esta circunstancia ha permitido que los más autorizados comentaristas de dicha legislación consignen como producto de la evolución registrada por la acción de habeas corpus dentro de la legislación del hermano país, el reconocimiento de otros supuestos adicionales al “habeas corpus reparador” que reconocen la doctrina clásica y la Constitución

Panameña, como por ejemplo: el “habeas corpus preventivo”, que se otorga contra la amenaza de eventuales detenciones, y el “habeas corpus correctivo”, que tiene como propósito lograr “que se cambie el lugar de detención, cuando no sea el adecuado a la índole del delito cometido o la causa de la detención” (rebén Hernández Valle: La Tutela de los Derechos Fundamentales, Edit. Juricentro, San José, 1990, pág. 39).
 (102)

A la luz de este marco interpretativo de la norma constitucional, con respecto al Derecho Comparado, y a la norma adjetiva, la Corte concluye diciendo:

De allí, que, pese a este aparente estancamiento de nuestra legislación en la regulación de los derechos fundamentales la Corte Suprema de Justicia, considere que el mandamiento de habeas corpus constituye la vía procesal idónea para enervar las órdenes de detención arbitrarias o ilegales, aun en los supuestos en que la referida orden no se haya hecho efectiva. Para llegar a esta conclusión el Pleno de la Corte no solo ha tenido en cuanto al texto de los artículos 2565 y 2566 del Código Judicial, que ciertamente aluden únicamente al habeas corpus reparador, sino también al artículo 2568 del mismo Código, que alude a los dos supuestos: a la orden de detención de alguna persona o a la

(102) IDEM

privación de la libertad corporal. Siguiendo esta línea de pensamiento también habría que tener en cuenta el artículo 2573, que señala entre los requisitos formales de la demanda de habeas corpus, la mención del “nombre de la corporación, autoridad o funcionario público por quien ha sido privada o restringida su libertad...”

La intención de la Corte es clara y, a juicio del Pleno, Inobjetable: concentrar dentro del instituto de habeas corpus todas las garantías procesales que permitan al ciudadano no sólo restaurar la libertad personal allí donde ésta haya sido desconocida por actos arbitrarios o ilegales, sino también enervar las acciones igualmente arbitrarias e ilegales que restrinjan el pleno disfrute de ese derecho inalienable del ciudadano.
⁽¹⁰³⁾**(lo subrayado es nuestro)**

Notamos como la Corte crea vía jurisprudencial la modalidad del habeas corpus preventivo, la cual produjo también el inmediato pronunciamiento de la Doctrina en contra de esta iniciativa legalista de la Corte. El cual tiene su manifestación en el salvamento de voto del Maestro Cesar Quintero, quien como máximo representante de la corriente conservadora de la Doctrina, magistralmente manifiesta las siguientes conclusiones.

Pasando por alto las notorias faltas de redacción, en lo jurídico cabe observar, entre otras cosas, que el

⁽¹⁰³⁾ IDEM

confinamiento no existe como pena de nuestra legislación. De modo que resulta extraño hablar de intento de "confinar ilegalmente". Luego, el transcrito artículo alude a cualquier autoridad "que trata de llevar a cabo el confinamiento o la deportación, o ambas cosas a la vez"... de alguna persona. En cuanto a la deportación, huelga indicar que ésta sólo es aplicable a personas naturales extranjeras. Por lo que a este respecto parece tratarse de la detención o "confinamiento" previos a la deportación del ciudadano extranjero. Más lo cierto es que en este caso, por tratarse de una perentoria orden de hacer lo más efectivo sería el amparo.

Pero lo esencial con respecto al comentado artículo es que él no regula en puridad de verdad la acción de habeas corpus, sino que se refiere a una notificación judicial "que surtirá todos los efectos de un mandamiento de habeas corpus". Pues éste, llámese recurso o demanda, entraña siempre una acción y ésta no existe en el supuesto previsto por el artículo 2594 del Código Judicial, toda vez que el Juez o Tribunal sólo pueden actuar en virtud de denuncia.

En consecuencia, la extraordinaria amplitud formal y la evidente imprecisión jurídica del suscrito artículo 48 de la Constitución de Costa Rica ha dado pie a que el Legislador, en buena hora, haya establecido en ese país el habeas corpus preventivo.

Muy distinta es la situación en Panamá donde la precisión categórica del artículo 23 de la Constitución y de las normas legales que lo desarrollan no dan el menor asidero,

desafortunadamente, el establecimiento jurisprudencial del habeas corpus preventivo. Y como quiera que la adopción es deseable, sólo queda el camino de la reforma, tanto de la Constitución como del Código Judicial, lo cual en nuestro país no es cosa difícil de llevar a cabo, sobre todo en el presente momento.

Mientras dichas reformas no se efectúen, cualquier jurisprudencia, por elevada y laudable que sea, encaminada a establecer el habeas corpus preventivo, sería contra legem, bajo el obvio entendimiento de que esta locución incluye, tanto la Ley fundamental como la ordinaria.⁽¹⁰⁴⁾

El fondo del salvamento de voto de maestro Quintero se sintetiza en que la Corte no puede ir más allá del sentido literal de la Norma Constitucional.

Sobre este particular nosotros consideramos que la Constitución Nacional es mucho más que un texto rígido invariable. Razón por la cual muy respetuosamente discrepamos en esta ocasión con el Profesor Quintero, basados en el siguiente ejercicio jurídico procesal.

1. Argumentos Procesales en que fundamentamos la creación del Habeas Corpus Preventiva y Otras Modalidades.

⁽¹⁰⁴⁾ IDEM

Como es de esperar lo novedoso, siempre tiende a crear la reacción negativa de los Grupos Conservadores. Nosotros somos firmes defensores de la creación de nuevas modalidades jurídicas y basados en la interpretación extensiva del artículo 23 de la Constitución, y nuestra posición la fundamentamos en los siguientes soportes procesales:

a. El principio procesal del “Favor Libertatis”

Este principio contenido en nuestro Código Judicial vigente que en su artículo 1972, es del tenor siguiente:

Artículo 1972. Toda norma que limite la libertad personal, el ejercicio de los poderes conferidos a los sujetos del proceso o que establezcan sanciones procesales será interpretada restrictivamente. (Lo subrayado es nuestro)

Como quiera que no existe norma específica en el Código Judicial que se refiera a que medida se debe tomar cuando se amplía la libertad personal.

Entonces tendríamos que ir a la interpretación Contrario Sensu del precitado artículo, que se interpretaría así:

“Toda norma que amplíe la tutela de la libertad personal, debe ser interpretada extensivamente”.

De aquí que tendríamos un argumento de interpretación procesal de la norma jurídica, distinto a la interpretación literal. Partiendo de esta premisa el artículo 23 de la Constitución, debe interpretarse extensivamente, en concordancia con los artículos 2573 y 2594 del Código Judicial.

Sobre este controversial tema se refiere el Profesor de Derecho Doctor Carlos Cuestas, cuando en su ensayo El Habeas Corpus Preventivo dice:

Por tanto, pienso que lo que ha hecho el Constituyente al plasmar en el artículo 23 la institución del habeas corpus ha sido sólo establecer un mínimo de garantías para la tutela de la libertad personal, pero que ese mínimo ha sido desbordado en el principio del favor libertatis por el legislador ordinario que ha ido más allá que la Constitución en esa tutela.⁽¹⁰⁵⁾

b. El artículo 2573 del Código Judicial:

Si analizamos de una forma extensiva el artículo 2573 en su numeral # 1 del Código Judicial que en su letra reza así:

⁽¹⁰⁵⁾ CUESTAS, Carlos H, EL HABEAS CORPUS PREVENTIVO, Cuadernos de Educación Judicial Nº 7, Imprenta del Órgano Judicial, Panamá, 1995, pág. 12

Artículo 2573. La demanda de Habeas Corpus puede interponerla la persona agraviada o cualquier otra en su beneficio, sin necesidad de poder. Dicha acción podrá ser formulada verbalmente por telégrafo o por escrito y en ella se hará constar:

Que la persona que haga la petición o a favor de quien se hace, se halla privada de su libertad corporal; el lugar donde está detenida o presa; el nombre de la corporación, autoridad o funcionario público por quien ha sido privada o restringida su libertad, con mención del título oficial de las referidas autoridades o funcionarios y sus nombres si lo conoce y el nombre de la autoridad o agente de ésta que lo tenga bajo su poder o custodia. (Lo subrayado es nuestro).

Si analizamos el precitado artículo, salta a la vista con claridad meridiana, que el habeas corpus se dirige contra el funcionario público que ha privado o "Restringido" la libertad. Notamos que la norma contiene dos supuestos claramente definidos, separados por la conjunción asociativa "o", que indica la existencia de dos alternativas en una misma oración.

Así pues, el legislador previó dos situaciones en la norma: La primera que se da cuando el individuo se encuentra **"privado"** de su libertad, o sea que se encuentra preso, y tiene su libertad ambulatoria suspendida por una detención ilegal, y el segundo supuesto que salta a la vista en la norma es cuando el individuo tiene su derecho a la Libertad **"Restringido"**, en este caso podríamos

interpretar que precisamente cuando el individuo todavía no está detenido pero existe una orden de detención ilegal, ordenada en su contra, pendiente de ser ejecutoriada por los organismos auxiliares de captura (La Policía Nacional Judicial o la Policía Técnica Judicial)

De igual manera, sobre este aspecto se refiere el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia Doctor Carlos Cuesta cuando comenta:

El artículo 2573 del Código Judicial en su numeral 1º parece distinguir lo que es la detención efectiva, la efectiva privación de la libertad de las amenazas contra esa libertad; porque ese numeral primero establece que entre los requisitos de la acción de habeas corpus hay que indicar el nombre de la corporación, autoridad o funcionario público por quien ha sido privada o restringida su libertad.⁽¹⁰⁶⁾

Notamos, como la norma procesal delimita dos presupuestos claramente definidos en su redacción la privación de la libertad propiamente tal, y la restricción de la libertad, que es el supuesto donde cabe el Habeas Corpus en su modalidad preventiva, toda vez que la detención aún no ha sido consumada.

c. El Artículo 2594 del Código Judicial.

⁽¹⁰⁶⁾ CUESTA, Carlos H , Op Cit., Pág 9

Del análisis extensivo del artículo 2594 del Código Judicial emerge claramente, la protección a la sola intención de restringir la libertad ambulatoria de una persona, cuando el artículo dice categóricamente:

Artículo 2594. Siempre que un Juez o Tribunal competente tenga conocimiento por denuncia, de que se intenta confinar ilegalmente a alguna persona, dará orden a la autoridad o funcionario que juzgue oportuno, a fin de que la conduzcan inmediatamente a su presencia para resolver lo que corresponda en derecho.

En caso de que la autoridad, funcionario o corporación que trata de llevar a cabo el confinamiento o la deportación, o ambas cosas a la vez, estuviere presente, se le notificará la orden. Dicha notificación surtirá todos los efectos de un mandamiento de Habeas Corpus y se obliga por lo mismo, a la autoridad o funcionario de que se trate de rendir de inmediato informe del caso, que se ajustará a las formalidades consignadas en este Capítulo. (Lo subrayado es nuestro).

Notamos que el artículo expresamente regula y prevé la posibilidad de que se intente, confinar a una persona ilegalmente.

Los opositores a la creación de otras modalidades de habeas corpus a la Luz de la jurisprudencia nacional critican que la pena de confinamiento fue abolida por la Ley 71 de 1938 y que la misma no existe en nuestro ordenamiento

jurídico, ya que fue eliminada del numeral 4º del artículo 878 del Código Administrativo.

Desde una perspectiva procesal, es de rigor aclarar que el artículo 2594 del Código Judicial, no se refiere a la pena de confinamiento eliminada del Código Penal en 1922, ni al confinamiento que fue abolido en 1938 del Código Administrativo. Por el contrario se refiere al confinamiento como medida cautelar, como alternativa judicial a la detención preventiva en beneficio del Reo, regulada en el artículo 2147-B del Código Judicial en una concepción procesal moderna distinta al confinamiento que contiene el artículo 878 del Código Administrativo. La norma vigente en avanzada dice:

2147-B. Son medidas cautelares personales:

a)

b)

d) **La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente**

De esta manera queda claro que la norma procesal al referirse al confinamiento no se refiere a la concepción arcaica del confinamiento como pena, la cual ya fue superada en el Derecho Procesal Moderno. El artículo 2594, por el contrario se refiere a un concepto moderno de confinamiento, como medida cautelar alternativa a los rigores de la detención preventiva en un establecimiento penitenciario.

El Doctor Carlos Cuestas en su comentado ensayo El Habeas Corpus Preventivo, aclara este tema y dice:

Yo creo que este confinamiento ilegal puede ser remediado mediante la acción de habeas corpus. De un tipo de habeas corpus diferente del habeas corpus reparador, precisamente, de aquel previsto para enervar las amenazas arbitrarias que restringen la libertad, y es sin duda el habeas corpus preventivo que se puede interponer según el artículo 2594 para evitar esa situación también restrictiva de la libertad personal.⁽¹⁰⁷⁾

El profesor Cuestas es enfático en establecer que para este tipo de amenazas de confinamiento, lo que cabe es una acción dirigida a evitar que se haga efectiva la orden de confinamiento ilegal, y el único camino posible es el habeas corpus preventivo a la luz del artículo 2594 del Código Judicial Vigente, el cual lo introduce en nuestro Derecho positivo. La Teoría Del Bloque de la Constitucionalidad.

d. La Teoría del Bloque de la Constitucionalidad

La que fundamentalmente establece que la Carta Constitucional no debe ser un cuerpo rígido en su letra, sino por el contrario la Constitución debe interpretarse extensivamente en concordancia con los Convenios

⁽¹⁰⁷⁾ CUESTA, Carlos H, Op Cit, Pág 10

Internacionales, que son ratificados por nuestro País, y que pasan a ser Ley de la República, y desarrollan los postulados constitucionales de manera adjetiva.

En este orden de ideas, el artículo # 4 de la Constitución Nacional dice:

**Artículo 4. La República de Panamá
acata las normas del Derecho
Internacional. (lo subrayado es
nuestro)**

Siguiendo los postulados de la interpretación de la norma constitucional como un bloque concordante con la norma procesal. La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la República de Panamá, por medio de la Ley 15 de 28 de noviembre de 1977 en el párrafo segundo del artículo 7, numeral # 6, dice:

**Segundo párrafo: "En los estados
Partes cuyas leyes prevén que toda
persona que se viera amenazada de
ser privada de su libertad, tiene
derecho a recurrir a un juez o tribunal
competente a fin de que éste decida
sobre la ilegalidad de tal amenaza,
dicho recurso no puede ser
restringido, ni abolido. Los recursos
podrán interponerse por sí o por otra
persona." (Lo subrayado es nuestro).**

La norma internacional ratificada por nuestro país es clara al proteger las amenazas de restricción de la libertad, contra la cual sólo cabe el habeas corpus

preventivo reconocido por la norma internacional que forma parte de nuestro Derecho positivo. De aquí que de acuerdo a la teoría del bloque de la constitucionalidad, el artículo 23 de la Constitución Nacional, debe ser interpretado en concordancia con los pactos internacionales, los cuales reconocen con claridad la modalidad de habeas corpus preventivo, contra las "Amenazas" de ser detenido.

e. La Jurisprudencia Nacional

e.1 AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CONSTANTINO JUAN LEKAS, THELMA ROBERTSON Y MANUEL GAVRILIDIS EN CONTRA DEL SEÑOR FISCAL TERCERO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: CECILIO A. CASTILLERO V.

Este comentado fallo de la Corte Suprema de Justicia de 18 de noviembre de mil novecientos noventa y uno por medio del cual se crea por la vía jurisprudencial el habeas corpus en su modalidad preventiva, cuando nuestro máximo Tribunal dijo:

La Intención de la Corte es clara y, a juicio del Pleno, Inobjetable: concentrar dentro del instituto de habeas corpus todas las garantías procesales que permitan al ciudadano

no sólo restaurar la libertad personal allí donde ésta haya sido desconocida por actos arbitrarios o ilegales, sino también enervar las acciones igualmente arbitrarias e ilegales que restrinjan el pleno disfrute de ese derecho inalienable del ciudadano.
 (108) (Lo subrayado es nuestro)

Notamos como en este precedente la Corte extiende el radio de alcance del Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus, y lo hace extensivo a las amenazas ilegales que restrinjan el pleno disfrute del Derecho de Libertad.

e.2 RECURSO DE HABEAS CORPUS “COMO UNA MEDIDA PREVENTIVA”, A FAVOR DE JULIAN MELO BURBUA Y CONTRA “LA ORDEN DE DETENCION PROFERIDA POR EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA”, POR EL SUPUESTO DELITO DE FALSEDAD. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, 24 DE JUNIO DE 1992.

La jurisprudencia nacional después de crear el habeas corpus preventivo, mediante el comentado fallo de 18 de noviembre de 1991, ha seguido perfeccionando la figura y estableciéndole ciertos requisitos y característicos, así se deja evidenciar a fallo de 24 de junio de 1992, cuando La Corte aclara requisitos para que se de el habeas corpus preventivo y dijo:

(108) Fallo de 18 de noviembre de 1991 de la Corte Suprema de Justicia

Como quiera que el informe antes transcrito expresa que contra el señor Melo Burbua no existe orden de detención, únicamente de falsificación de Documento, se infiere claramente que el problema que se plantea mediante esta acción constitucional no se refiere a la privación de la libertad de la persona a cuyo favor se libró el mandamiento de habeas corpus, por cuanto que no existe siquiera orden de detención contra el prenombrado JULIAN MELO BURBUA que pudlra justificar, en ese caso, la acción preventiva de habeas corpus, como en este caso, sobre la cual pronunciarse. ⁽¹⁰⁹⁾

En este fallo la Corte deja aclarado que para que prospere el habeas corpus preventivo, debe existir como requisito SINE QUANON, "Una Orden de Detención", la cual no ha sido ejecutada. Pero la amenaza contra el Derecho de Libertad, no puede ser cualquier amenaza, basada en suposiciones y caracterizaciones subjetivas del supuesto afectado.

La amenaza debe ser real y jurídicamente concreta, es decir que la amenaza de la detención ilegal, debe estar contenida en una orden escrita.

e.3 RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAHFFIS CRISTOBAL COMELLYS H. Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIAN A. ECHEVERS.

⁽¹⁰⁹⁾ Registro Judicial de junio de 1992. Pág. 240 y 241

PANAMA, CUANTO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1994).

La Corte ha seguido dándole una caracterización procesal al habeas corpus preventivo, estableciendo una serie de caracterizaciones especiales a esta modalidad. Así lo deja plasmado en fallo de 4 de enero de 1994, cuando dijo:

El habeas corpus preventivo se concede con el fin de proteger a los individuos contra amenazas comprobadas de la libertad corporal. Se requiere que el peticionario demuestre, con certeza, la existencia de un temor fundado sobre la eventual privación o afectación de su libertad personal; dicho temor debe ser entonces actual o inminente. Por ello es de la esencia del habeas corpus preventivo: a) la existencia de una amenaza efectiva contra la libertad corporal, la que, por su naturaleza, debe constar en un mandato que ordene una detención preventiva y b) que tal mandato no se haya hecho efectivo. ⁽¹¹⁰⁾

El fallo que se examina posee calidad didáctica, pues con el se explica cuando procede el habeas corpus preventivo esencialmente. Veamos los supuestos:

⁽¹¹⁰⁾ Registro Judicial de enero de 1994. Págs. 30 y 31

1. La existencia de una amenaza efectiva contra la libertad corporal, la que por su naturaleza, debe constar de un mandato que ordene una detención preventiva; y,
2. Que tal mandato no se haya hecho efectivo.

Conforme al primero de los requisitos que se detallan, debemos entender que comprobada la existencia de una orden se satisfacen requisitos de la amenaza cual son la actualidad e inminencia, carga de "onus probandi" que le compete al accionante.

Respecto al segundo, podemos agregar aún cuando pueda juzgarse como ocioso que en el evento de haberse comunicado la orden de detención, la modalidad que se configura es la del habeas corpus reparador.

En cuanto al caso en sí, el Pleno desestimó la acción declarándola no viable por no existir en contra de Rahffis Cristobal Comellys H. Orden de detención.

C. EL HABEAS CORPUS CORRECTIVO

Este habeas corpus a diferencia del preventivo no trata de hacer frente a una amenaza que pesa contra la libertad individual. Aquí la detención es legal

pero se ataca o trata de mejorar las condiciones en las que éstas se pueden llevar a cabo o el trato dispensado al detenido.

Según el autor panameño Martínez Sánchez en su obra "La defensa Constitucional en el Proceso Penal Panameño":

"lo pretendido en esta modalidad de habeas corpus es cambiar el lugar en donde se lleva a cabo el hacinamiento, cuando no sea el adecuado por el delito cometido o para detener el trato indebido". ⁽¹¹¹⁾

El habeas corpus correctivo implica que aunque la detención sea legal y cumpla con las formalidades de la Ley, no pierde ciertos derechos que la Constitución y la Ley protege. De igual manera esta modalidad no está regulada ni por la Constitución ni por la Ley, lo que no impide su aplicación sin necesidad de reformar la Constitución, fundamentada en el artículo 28 referente al trato de los detenidos.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de agosto de 1993, al conocer de una acción de habeas corpus clásica o reparador, interpuesta a fin de lograr la libertad de dos personas detenidas preventivamente, que habían sido trasladados de la Cárcel Modelo a la Isla Penal de Coiba, la Corte consideró

⁽¹¹¹⁾ MARTINEZ SANCHEZ, Luis, LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE PANAMA 1993, Pág 5

que aunque la detención era legal, ameritaban el traslado inmediato de los detenidos a la Cárcel Modelo. Esta decisión se basa en el hecho que a los detenidos en la Isla Penal de Coiba se les privaría de los derechos a asistencia de abogados, desconociéndose el derecho a su defensa, infringiendo el artículo 22 de la Constitución.

Su finalidad no representa en obtener la libertad del detenido sino que se corrija el derecho fundamental infringido, no como el resultado de la detención ilegal, sino como una medida de traslado arbitrario que imposibilita el acceso de su abogado, como el tribunal que conoce de la causa por la cual se privó de su libertad corporal.

El Licenciado Ricardo Nagacane Rodríguez en su excelente trabajo de tesis intitulado "El Habeas Corpus Garantías Constitucionales de la Libertad Corporal en Panamá", comenta:

Sentencia de 30 de mayo de 1994, que decía:

"la esencia de esta modalidad de habeas corpus es la de terminar con torturas o malos tratos ocasionados a detenidos legalmente, por sus custodios, pues no es la finalidad de esa detención preventiva el infringir a los reos de malos tratos que vayan en detrimento de su integridad física o

mental, así como dificultar su readaptación a la sociedad”⁽¹¹²⁾

Posteriormente como veremos al analizar la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia ante una situación similar denominó lo que conocemos como Habeas Corpus Correctivo, iniciativa constitucional correctiva.

Sobre esta modalidad especialísima se ha pronunciado La Corte Suprema de Justicia en fallo de 20 de junio de 1997, cuando hace una clara identificación del habeas corpus correctivo, en una función casi académica la Corte explica:

**ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DOMINGO LUIS CHAVEZ
CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCION. MAGISTRADO
PONENTE: RAFAEL A. GONZALEZ. PANAMA, VEINTE (20) DE JUNIO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (1997).**

La naturaleza de esta acción es análoga a la del habeas corpus correctivo, ya que no pretende la libertad del reo, como en el habeas corpus clásico, sino impedir su traslado a una cárcel lejana a la cual sus familiares no tienen acceso. La doctrina considera que este tipo de habeas corpus-correctivo- constituye una interpretación extensiva del habeas corpus clásico, que pretende recobrar la libertad del detenido, que ha sido restringida.

⁽¹¹²⁾ **NAGAKANE RODRIGUEZ, Ricardo Noriel** EL HABEAS CORPUS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CORPORAL EN PANAMA. 1997, pág 348

Se caracteriza por tratar de “corregir” las condiciones o el trato abusivo que sufre el detenido, trasladándolo a otro centro penal.

También se origina cuando el lugar de detención no es adecuado al tipo de delito cometido. ⁽¹¹³⁾

En el precitado fallo cabe destacar como dato curioso que la acción es promovida vía fax dada la inminencia de los derechos del imputado, en este caso el traslado de la Cárcel Pública de Las Tablas a la Isla Penal de Coiba.

El Pleno reconoce la esencia de la acción y explica que constituye una interpretación extensiva del habeas corpus clásico y se caracteriza por corregir las condiciones o el trato abusivo que sufre el detenido, trasladándolo a otro centro penal. De igual forma se faculta su instauración cuando la detención se cumple en lugares inadecuados.

Estos son los supuestos de procedencia y por no haber sido plasmados en la acción, la Corte resuelve declararla no viable.

La Corte Suprema de Justicia ha seguido perfeccionando el habeas corpus en su modalidad correctiva, y estructurándolo procesalmente, así lo demostró al resolver **ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE**

⁽¹¹³⁾ Registro Judicial de Junio de 1997 Págs 102 y 103

**ENRIQUE CAMAÑO CONTRA LA FISCAL DECIMA DE SAN MIGUELITO,
MAGISTRADO PONENTE: FABIAN A. ECHEVERS. PANAMA,
VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO (1994).**

Llama la atención de este tribunal de habeas corpus el hecho de que, según consta en el proceso, el imputado se encuentra recluido en la Cárcel Modelo, mientras que en el libelo de la acción de habeas corpus se afirma que la detención se cumple en la Isla Penal de Colba.

La duda que emerge a este respecto motivó que el despacho sustanciadador requiriera que por secretaría se informara sobre el lugar donde realmente cumple el sindicado su internamiento. El Informe pertinente es del siguiente tenor:

En esta causa es importante destacar el hecho de que, mediante auto de 5 de julio de 1994, el Juzgado segundo de Circuito Penal del Segundo Circuito Judicial de Panamá Ordenó la ampliación de las sumarias Instruidas contra Camaño. A tales efectos enumeró varias diligencias que debían realizarse, entre las cuales el punto tercero Ordena que "se le practique al investigado JORGE ENRIQUE CAMAÑO, examen psiquiátrico forense" (f. 53): este mandato que el Juez dirige al agente de Instrucción impone que, con ocasión de esta iniciativa constitucional correctiva, se ordene el traslado del detenido a un centro penitenciario de la sede del Tribunal que conoce de la causa penal, con el

fin de lograr el cabal cumplimiento de la orden judicial y evitar así mayores dilaciones en el perfeccionamiento de las sumarias, todo ello en acatamiento de la garantía del derecho de defensa implícito en el artículo 2153 del Código Judicial.

"Artículo 2153: La detención preventiva a que se refiere el artículo anterior, debe cumplirse en la respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito, y en su defecto, en la cárcel del distrito correspondiente. En consecuencia, ningún imputado, preventivamente detenido, podrá ser trasladado a cárceles distintas de la sede del Tribunal que conoce de sus casos." (Destaca la Corte).

Razones harto conocidas explican la sistemática violación de ésta garantía procesal de muchos sindicados que se encuentran detenidos preventivamente, sin que por ello se pueda justificar en casos particulares como el que ahora ocupa la atención de esta Corporación de Justicia.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de Jorge Enrique Camaño Vega y ORDENA que el imputado sea trasladado inmediatamente de la Isla Penal de Colba a la Cárcel Modelo, a órdenes de la Fiscal Décima del Segundo Circuito Judicial de Panamá del Distrito de San Miguelito. ⁽¹¹⁴⁾

⁽¹¹⁴⁾ Registro Judicial de agosto de 1994 Págs 74 y 75

Conociendo como es en estos momentos, el propósito y supuesto de procedencia del habeas corpus en su modalidad correctiva, vale aclarar que en la causa "sub examine", aun cuando se declare legal la detención (puesto que lo es) el habeas corpus correctivo si cumplió su finalidad ya que el lugar donde guarda detención era inadecuado para la práctica de diligencias judiciales ordenadas al fiscal por el Juez en fase de valoración (se decretó ampliación y práctica de exámenes psiquiátricos en el imputado).

La sentencia no goza de un desarrollo muy técnico y lo decimos pues conceptuamos que bien pudo la Corte aclarar la modalidad ya que en el desarrollo del fallo evidencia haberla reconocido, facultad que ostenta según los artículos 469 y 471 del Código Judicial. Luego de ello decretar ilegal o viable el habeas corpus correctivo, o si bien quiere decretar legal la detención conforme al habeas corpus clásico e ilegal el traslado conforme al correctivo.

Para finalizar la caracterización de esta novísima modalidad de habeas corpus, resulta imperativo traer a colación la explicación que hace el Profesor de Derecho Constitucional Rigoberto González Montenegro, cuando de manera didáctica aclara:

Pues bien, en el caso de habeas corpus correctivo, ya no se trata de hacer frente a una amenaza que pesa contra la libertad corporal o de recobrar la libertad ilegalmente

restringida. En éste la detención es legal, pero las condiciones en las que ésta se lleva a cabo o el trato que se le dispensa al detenido, es abusiva e infractora de su condición humana.
(115)

Así pues, queda claro que en esta modalidad de habeas corpus no se discute si la detención es legal o no. Se parte del supuesto de que la detención es legal y el individuo está efectivamente detenido, el fin del habeas corpus correctivo es garantizar que al detenido se le respete sus Derechos Humanos, ya que su condición de reo no le disminuye su condición de Ser Humano.

D. EL HABEAS CORPUS RECTIFICADOR:

Es de especial importancia para nosotros referirnos a esta modalidad especial de Habeas Corpus, donde no se discute si la detención es legal o no, no se trata de una amenaza de detención procesalmente efectiva, ni tampoco de la vanguardia de los derechos humanos del reo. En esta modalidad de habeas corpus el individuo está legalmente detenido, cumpliendo una condena, producto de una sentencia en firme.

La situación se da cuando el detenido ha cumplido los dos tercios de su condena, ha mostrado buena conducta y readaptación social. Entonces este individuo solicita a las autoridades administrativas de corrección, el beneficio de

(115) MONTENEGRO GONZALEZ, Rigoberto **EL HABEAS CORPUS** Op Cit., Pág 62

la libertad condicional consagrada en la norma sustantiva penal en su artículo 85. Pero si los Organismos Administrativos se niegan a conceder tal derecho, debería según nuestro criterio prosperar ante la Corte un habeas corpus que rectifique que tal posición de las autoridades administrativas de corrección, y se ordene la "Libertad Condicional" del reo. Si bien es cierto en nuestro País la Corte ha mostrado cierto recelo en esta modalidad de habeas corpus, toda vez existe la tendencia en pensar que la libertad condicional es una gracia de Ejecutivo, y que es discrecional de este Organismo del estado, otorgarla o no.

Sobre esta modalidad de habeas corpus parece referirse nuestro Máximo Tribunal de Justicia, cuando al resolver la acción de **HABEAS CORPUS A FAVOR DE DIONISIO ALBERTO CASTRELLON CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCION DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIAS A. ECHEVERS. PANAMA, DOCE (12) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995). LA CORTE DIJO:**

El artículo 85 del Código Penal consagra el derecho del condenado a obtener la libertad condicional, sujeto a la satisfacción de dos requisitos, que son: a) el cumplimiento de dos tercios de la pena, b) la comprobación hecha por el Departamento de Corrección – debidamente acreditada por el director del Centro Penitenciario o del Consejo Técnico-, en el sentido de

que el internamiento se cumplió con un adecuado índice de readaptación, buena conducta y acatamiento de los reglamentos carcelarios.

Es imperativo entonces acreditar que se encuentran satisfechos los dos requisitos exigidos por ley, lo que indica que no basta el mero transcurso del plazo de las dos terceras partes de la pena impuesta para que opere ipso jure, como es la pretensión del demandante, la consecuencia de la libertad condicional, sin la verificación que corresponde a los otros factores condicionantes del beneficio penal. Con el objeto de hacer eficaz esta modalidad concreta de la tutela legal, instituida en respeto del bien jurídico de la libertad individual, se plantea la necesidad de que por la vía administrativa se implementen con suficiente antelación los medios para que, al vencimiento del plazo que señala la ley, se pueda resolver de inmediato sobre el reconocimiento de la medida liberatoria.

De cualquier modo, no se puede desconocer que se trata de una atribución presidencial, que no del Departamento de Corrección, por lo que este último tramo de la gestión administrativa no tiene fecha cierta de cumplimiento. Si las cosas, mal no puede, entonces, imputar a la autoridad demandada en esta acción responsabilidad alguna por la alegada demora en conceder la libertad condicional al detenido.

Por las anteriores consideraciones LA CORTE SUPREMA, PLENO administrando justicia en nombre de

**la República y por autoridad de la Ley,
DECLARA NO VIABLE la acción de
habeas corpus presentada a favor de
Dionisio Alberto Castrellón.**

En este caso se trata de la interposición de una acción de habeas corpus con el propósito, como es la naturaleza de la acción, de obtener la libertad ambulatoria del reo; sin embargo, no se impugna la reducción de la libertad por el hecho de que se haya violado alguna disposición legal, o que se hayan omitido algunos de los requisitos que la ley exige para la aplicación de la medida, se refiere a lo que la doctrina y la jurisprudencia patria califican como "Habeas Corpus Rectificador".

Sobre esta novísima modalidad de habeas corpus, se refiere nuestro Profesor de Maestría y Director de Tesis el Doctor Molino Mola, cuando comenta:

Finalmente yo creo que hay que crear legislativamente el habeas corpus rectificador, y mientras no se haga, la Corte Suprema puede, al igual que lo ha hecho con el habeas corpus preventivo y el habeas corpus correctivo, hacer efectivo el habeas corpus rectificador. Cuándo se puede decir que procede el habeas corpus rectificador. Cuando una persona por una deficiencia legislativa, que debe ser corregida, ha pesar de que ha cumplido las dos terceras partes de la condena, ha mostrado un índice de readaptación, ha observado buena

conducta y el cumplimiento de los reglamentos carcelarios, como establece el artículo 85 del Código Penal, sigue detenida, si el Órgano Ejecutivo no le otorga la libertad condicional como lo exige el artículo 86 del mismo Código. Consideramos que debe haber una Comisión permanente que esté evaluando constantemente la conducta de los presos y que pueda observar cuando se cumplen las condiciones del artículo 85 del Código Penal y establecido que efectivamente esa persona ha cumplido con las condiciones allí exigidas, previa evaluación, en un término no mayor de diez días, cumplidas las condiciones, de que esa persona merece ser puesta en libertad, se le debe conceder la misma, sujeta a las obligaciones establecidas en el artículo 86 del Código Penal. Si no se le pone en libertad, dada las circunstancias expresadas, debería prosperar un habeas corpus rectificativo.⁽¹¹⁶⁾

Notamos en este análisis que nos hace el Profesor Molino Mola, que en el habeas corpus rector lo que se pretende es corregir una situación en la que la privación de la libertad ha sido legalmente decretada; sin embargo, las condiciones que justificaban la medida han cesado y se produce entonces un encierro injusto.

⁽¹¹⁶⁾ MOLINO MOLA, Edgardo CONFERENCIA MAGISTRAL TITULADA "EL ESTADO ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PANAMÁ, SU PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES" Pronunciada el 10 de abril de 1987 en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Págs. 38, 39 y 40

Mediante esta acción se pretendía hacer efectiva la libertad de una persona que cumplió las dos terceras partes de la pena impuesta, con fundamento en lo que establece el artículo 85 del Código Penal. No obstante, esta posibilidad de libertad condicional depende de la concurrencia de otro elemento, el cual es una certificación del Consejo Técnico o del Director del Centro de que la parte de la pena cumplida se logró con indicios de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelanos.

No solo se requiere el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena, además no es una obligación con fecha cierta de cumplimiento como lo señala el fallo por lo que la negativa del mismo es congruente.

La Corte se ha mantenido firme en este criterio de que la libertad condicional es una gracia especial que le da la ley al Órgano Ejecutivo, donde no cabe injerencia del Órgano Judicial, así lo manifiesta categóricamente en reciente fallo de 13 de marzo de 1997.

Jurisprudencia: “Por otra faz, cabe recordar que la libertad condicional es una institución de individualización administrativa de la pena, cuya competencia exclusiva es del Órgano Ejecutivo y no del Judicial”. ⁽¹¹⁷⁾

⁽¹¹⁷⁾ Registro Judicial de Marzo de 1997 Pág. 338

Ante esta posición de la Corte, consideramos que al transcurrir el tiempo nuestro Primer Tribunal de Justicia tendrá que cambiar este criterio cerrado de la interpretación literal de la norma sustantiva, y es imperativo la creación del *habeas corpus* rectificador en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero haciendo un análisis de tipo académico salta a la vista un problema a la luz de la interpretación de la Corte sobre que la libertad condicional es un problema exclusivo del Organo Ejecutivo y no del Judicial.

Si partimos de este orden de ideas, estaría claro que cuando se dan los supuestos del artículo 85 del Código Penal de que el detenido ha cumplido dos terceras partes de su condena, ha mostrado readaptación, buena conducta y otros requisitos de tipo administrativo. La potestad de darle la gracia de la libertad condicional es materia privativa del Ejecutivo, de esto parece no existir discusión.

Pero que pasa si el detenido ha cumplido la totalidad de la pena y aún se mantiene detenido. En esta situación consideramos que si estamos ante una situación eminentemente jurisdiccional y no administrativa, donde perfectamente se puede solicitar se rectifique esta privación de la libertad, mediante un *habeas corpus* rectificador.

Así, las cosas desde una perspectiva didáctica podríamos perfectamente esgrimir la tesis de que el habeas corpus rectificador tiene dos vertientes en la Praxis: La primera de carácter administrativo:

1. Cuando se den las condiciones del artículo 85 del Código Penal, y es potestativo del Organo Ejecutivo dar la libertad.

Y la segunda de carácter jurisdiccional: cuando el individuo ha cumplido un día más del término de su condena, donde cabe perfectamente ante la Corte Suprema de Justicia un habeas corpus que rectifique esta privación ilegal de libertad ambulatoria.

E. EL HABEAS CORPUS DE OFICIO

Dentro de la clasificación, tenemos como última modalidad lo que podríamos llamar el habeas corpus de oficio.

Esta modalidad de habeas corpus se encuentra contenida en nuestra norma adjetiva en el artículo 2540 del Código Judicial, donde el espíritu de la norma es permitirle oficiosamente al Juez o Magistrado, que en sus visitas periódicas a las cárceles, cuando se percaten que una persona se encuentra recluida en el Centro Penitenciario, sin que medie orden de detención debidamente expedida por autoridad competente, deberá ordenar inmediatamente su libertad.

Esta modalidad especial de habeas corpus se encuentra contenida en el referido artículo 2540 del Código Judicial que reza así:

Artículo 2540. En la visita deben ser leídas las listas de los negocios en que actúen los distintos funcionarios, las que expresarán el día de su iniciación, los nombres de los imputados o procesados, los delitos de que se les sindicó y el estado actual de cada proceso en la fecha de la visita. Si hubiere algunos detenidos no comprendidos en las listas mencionadas, se averiguará desde qué fecha está en el establecimiento, por orden de qué autoridad y por qué motivo. El presidente de la visita se encargará de investigar las causas de la detención y si no existe orden escrita de alguna autoridad, dictará inmediatamente la orden de libertad respectiva. (Lo subrayado es nuestro).

La norma en análisis es clara y no admite otra interpretación, al establecer que el que preside la visita carcelaria, al percatarse que existe detenido un individuo sin orden de detención expedida conforme a derecho, debe oficiosamente y sin más trámite ordenar su libertad.

Perfeccionándose lo que la doctrina siempre ha identificado como habeas corpus de oficio.

Decimos que la doctrina siempre ha reconocido esta modalidad, ya que el artículo 16 de la Ley 2 de 1908 facultaba a cualquier Juez o Tribunal, con conocimiento de una detención ilegal, para que actuase de oficio y lograse la libertad del detenido. El texto de este artículo fue el siguiente:

Artículo 16. Cuando un Juez o un miembro de un Tribunal autorizado por esta ley para librar mandamiento de Habeas Corpus tenga pruebas de que cualquier persona se halla ilegalmente detenida ó presa dentro de su Jurisdicción, expedirá sin dilación el mandamiento para socorrerla aún cuando no se haya hecho petición con ese propósito."

De esta manera notamos como esta modalidad de habeas corpus, no es una figura nueva en nuestro ordenamiento jurídico, pues ha existido, desde la primera ley adjetiva en materia de habeas corpus que existió en la República.

Lo que deja aclarado la existencia y vigencia de esta modalidad, a través de nuestra codificación en materia de habeas corpus, pues también la modalidad de oficio, fue recogida por la Ley 46 de 1952, cuando en su artículo 31 decía:

"Artículo 31. Siempre que un Juez o Tribunal competente tenga conocimiento por denuncia de que se intenta confinar ilegalmente a alguna persona, dará las ordenes necesarias para impedirlo y conminará a la

autoridad o funcionario que juzgue oportuno a fin de que la conduzca inmediatamente a su presencia para resolver lo que corresponde en derecho.”

Lo que viene a reforzar nuestra teoría de incluir dentro de la clasificación didáctica del habeas corpus la modalidad de habes corpus de oficio.

Nosotros siempre pensamos en un carácter de interpretación más amplio de la norma procesal, consideramos que además de aquel individuo que está detenido sin una orden legal, también debe ser beneficiado con el habeas corpus de oficio, aquel individuo que ya ha cumplido la totalidad de su condena y más, el Juez en su visita carcelaria, debería ordenar la inmediata libertad de esta individuo, como ejemplo del máximo umbral del habeas corpus, en su modalidad de oficio.

De esta manera culminamos este Tercer Capítulo de nuestro Trabajo de Investigación, donde hemos analizado los principales postulados de la jurisprudencia en torno al Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus, y hemos hecho una clasificación de las diferentes clases de habeas corpus, más cónsonas con la realidad procesal que vive nuestro país.

CAPITULO IV

LA ACCION DE HABEAS CORPUS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

..."Considerando esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".

"Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado, en la Carta, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos en hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad"...

(Extracto del Preámbulo de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)

En este cuarto y último capítulo de nuestro trabajo de investigación, revisaremos la norma internacional de protección al Derecho de Libertad contenida en los diferentes pactos de Derechos Humanos, que han sido ratificados por nuestro País, y elevados a la categoría de leyes de la República, en defensa y protección de las detenciones ilegales.

Para iniciar este análisis es imperativo revisar los instrumentos internacionales que protegen y garantizan la libertad física de los individuos, de esta manera comenzaremos analizando estos instrumentos procesales que protegen los Derechos Humanos.

I. LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD FÍSICA EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Con las ideas contemporáneas, el individuo particular ha sido considerado como sujeto de derecho internacional y merecedor por lo tanto de los instrumentos procesales para la protección de los derechos reconocidos en documentos internacionales. Como dice el maestro Fix-Zamudio en su Ensayo "La Protección Procesal de Garantías en América Latina":

"En esta segunda posguerra numerosos postulados que se consideraban intocables se hallan actualmente sujetos a revisión y entre ellos precisamente el concepto de

derecho subjetivo público que de acuerdo con el criterio tradicional solo era posible frente a las autoridades nacionales, ya que en el Derecho Internacional clásico únicamente los Estados tenían personalidad jurídica y los particulares no podían acudir a los órganos supranacionales para hacer la defensa de sus derechos. Sin embargo, con mucha timidez ya se empieza a transformar este postulado. Ya poco a poco se va concediendo a los particulares, acceso a dichos órganos inclusive los de carácter judicial. ⁽¹¹⁸⁾

Hasta la promulgación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas no se encuentra un reconocimiento internacional de estos derechos fundamentales que forman parte de la jurisdicción constitucional, si analizamos el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas cuando dice:

ARTICULO 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Uno de los propósitos de las Naciones Unidas en el artículo primero de la Carta, es realizar la cooperación internacional en el desarrollo y el estímulo del

⁽¹¹⁸⁾ **FIX ZAMUDIO, Héctor** "PROTECCION PROCESAL DE GARANTIAS EN AMERICA LATINA" Revista de la Comisión Internacional de Juristas México D F, Diciembre de 1988, Vol 9, N° 2

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Si analizamos la Carta de las Naciones Unidas, en ella no se hace referencia expresa a ningún mecanismo procesal de tutela de los derechos humanos. En lo referente al Habeas Corpus, revisaremos si existe alguna disposición que pudiera interesarnos.

A. La Declaración universal de Derechos Humanos

La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 10 de Diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos con el propósito de subsanar la falta de una lista completa de los derechos humanos que permitiera la protección y promoción de estos que proveía la Carta.

De esta manera, por primera vez en la historia, la comunidad internacional aceptó formalmente, la responsabilidad de velar por la protección y el cumplimiento de los derechos humanos.

La Declaración Universal se compone de treinta artículos que comprenden derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El artículo noveno de la Declaración incorpora el derecho a la libertad física. Dispone este numeral:

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Con el objetivo de que la Declaración Universal no fuera meramente teórica o abstracta, sino que tuviera aplicación práctica y concreta, se buscaron reglas de carácter sustancial, para que las legislaciones nacionales establecieran un recurso efectivo que otorgara competencia a los tribunales de cada país con el objetivo de que toda persona sea amparada contra actos que violan los derechos fundamentales reconocidos también por el Derecho Interno.

Con este fundamento, en el artículo octavo establece:

Artículo 8: "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por ley".

Al habernos dicho numeral de "recurso" los procesalistas hemos aclarado que al referirse al habeas corpus, estamos frente a una acción contra actos violatorios de la Constitución y de la ley, eleva a rango de norma de derecho internacional la garantía de Habeas Corpus.

La Declaración no concede a los individuos un derecho de acción o de petición ante los órganos de la ONU que asegure la efectiva realización de los derechos en cuestión, repetidamente mencionada como una de sus tareas.

Esta situación se debe a que la Asamblea General de la ONU solo tiene competencia, en principio, para hacer "recomendaciones" por lo que el asunto constituye un problema de la obligatoriedad moral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su significación jurídica, es definitivamente, la de una pauta de inspiración para las naciones suscriptoras.

B. El Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos

Para reforzar la Declaración Universal y conseguir para los derechos tutelados en ella una fuerza vinculante, se encargó a la Comisión de Derechos Humanos que elaboran una declaración ulterior.

Los pactos se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque los derechos que abarca no son idénticos.

De esta forma, las Naciones Unidas en esta búsqueda de nuevas normas y directrices para el pleno goce de sus postulados enumerados, repite el principio consagrado en el artículo nueve de la Declaración en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, firmado

en Nueva York el 16 de diciembre de 1966. Reconocido por la República de Panamá mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1976, contenido en la gaceta oficial # 18,269 de 4 de febrero de 1977.

El Pacto prevee en su artículo 25, un Comité de Derechos Humanos de 18 miembros encargados de examinar si son o no acatadas las disposiciones incluidas en él.

En el numeral noveno de dicho Pacto se incluyen disposiciones de extraordinaria importancia. Su existencia introduce un nuevo factor en la realidad internacional al plantear los principios filosóficos que inspiran un Habeas Corpus Internacional.

Dispone el artículo noveno:

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. (lo subrayado es nuestro)
Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella.
Toda persona detenida o presa a causa de infracción penal será

llamada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgadas no debe ser la regla general, pero podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y en su caso, para la ejecución del fallo.

Toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene libertad si la prisión fuera ilegal. (lo subrayado es nuestro)

Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. (lo subrayado es nuestro)

Definitivamente, y a pesar de no hacer referencia expresa a la acción de habeas corpus como tal, es Innegable la presencia del habeas corpus como la piedra angular del Pacto.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos para aseguramiento de los logros y propósito del pacto, establece en su artículo segundo:

“Con sujeción a lo dispuesto en el artículo primero, todo individuo que alegue una violación de cualquiera de

sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la consideración del Comité una comunicación escrita”.

Normas como estas, integradas al Ordenamiento Jurídico Internacional, universalizan la garantía de Hábeas Corpus, extendiendo sus efectos a todo el ámbito mundial para otorgar un necesario pragmatismo a sus normas.

C. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Ratificada por la República de Panamá mediante ley N° 15 de 28 de octubre de 1977 contenida en la Gaceta Oficial N° 18,468 de 30 de noviembre de 1977, la cual entró en vigencia el 18 de junio de 1978.

En el artículo séptimo del Pacto de San José, como también se le conoce, se incorpora el derecho a la libertad personal cuando dice:

“Artículo 7:

- 1. Toda persona tiene derecho a libertad y a la seguridad personal.**
- 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las Leyes dictadas conforme a ellas.**

3. **Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.**
4. **Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora del cargo o cargos formulados contra ella.**
5. **Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparencia en el juicio.**
6. **Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.
Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.**
7. **Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de los deberes alimentarios.**

Es interesante observar que el inciso sexto de este artículo establece el procedimiento a seguir ante la violación de cualquiera de los derechos que

consagra este pacto, incluyendo lógicamente, el derecho a la libertad física que dispone el artículo siete antes citado. Por su parte el artículo 25 establece el derecho a un recurso efectivo ante un Tribunal competente que ampare contra la violación de derechos fundamentales. A su vez el artículo 25 establece "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que lo ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por persona que actúe en ejercicio de sus funciones oficiales.

A su vez el artículo 8 expresa que **"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente"** con lo que establece el debido proceso.

Se crean también dos organismos competentes para conocer las demandas: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

D. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

La declaración Americana de mayo de 1948 que antecede a la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en la ciudad de

Bogotá durante la IX Conferencia Internacional Americana, con adhesión de la República de Panamá desde el momento de su firma en 1948.

Se caracteriza este instrumento porque no solo consagra derechos, sino también deberes a las personas, lo cual se hace sentir en su preámbulo que dice:

PREAMBULO

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan,

Es deber del hombre servir al espíritu con toda sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría.

Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu.

Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más

noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre.

En lo que respecta a la libertad señala el artículo 1º:

“Todo ser humano tiene derecho a la libertad”.

E. Las Reglas Mínimas Sobre Tratamiento De Los Reclusos

En Ginebra en 1955 se adoptó en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento de los Reclusos.

Las Reglas Mínimas constan de dos parte: Reglas de Aplicación General” (primera parte) y “Reglas Aplicables a categorías especiales (segunda parte), y de un título nominado “Observaciones Preliminares” indistintamente a todos los individuos sin consideración a su color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera.

La Reglas Mínimas establecen medidas para el tratamiento de los reclusos y de las personas detenidas o en prisión preventiva o encarcelados sin cargo en su contra.

Por lo que respecta a las personas detenidas o en prisión preventiva, los derechos que se establecen a favor de estos son: la presunción de inocencia (84.2); el derecho a estar separados de los reclusos condenados (81.1); el derecho de los acusados jóvenes a estar separados de los adultos (85.2); el derecho de los acusados de dormir en celdas individuales (86); derecho a alimentarse por su propia cuenta si lo desean (87) procurándose alimentos del exterior; la autorización para sus propias prendas personales siempre que estén aseadas y decorosas (88-10); derecho de ofrecerle la posibilidad de trabajar si desea (89); y a recibir remuneración; derecho a recibir objetos del exterior tales como libros, periódicos (90); el derecho de ser visitado, a ser atendido por su médico personal si lo desea (91); derecho a avisar a su familia de su detención y de recibir sus visitas (92); el derecho a solicitar un defensor de oficio y a recibir visitas de su abogado y a no ser escuchada la conversación con éste, por ningún funcionario o personal del establecimiento penitenciario (93).

Sobre los derechos de los reclusos detenidos o encarcelados sin haber cargos en su contra, se establece que estas personas gozarán de lo previstos en el Pacto en el art. 9º y de la protección consagrada en la primera parte y en la sección C (derecho de la persona detenida preventivamente) de la segunda parte y las previstas en la sección A de la segunda parte. (regla 95).

F. Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes

La presente convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 39/46 de 1 de Diciembre de 1948 ratificado por la República de Panamá mediante ley 5 de 6 de junio de 1987, contenido en la Gaceta Oficial # 20,830 de 25 de junio de 1987, contiene 33 artículo, divididos en tres partes, en donde proclama la prohibición de la tortura y establece medidas legislativas, administrativas y judiciales que deben adoptarse a fin de eliminarla. Esta convención protege en su artículo 14 a todas las personas acusadas o detenidas. Por otra parte, la convención reconoce a las víctimas, el derecho a reparación, y a indemnización en caso de tortura.

II. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA. CASO GODINEZ SENTENCIA DEL 20 DE ENERO DE 1989.

En esta sentencia contra el Estado de Honduras, por la desaparición del ciudadano Hondureño Saúl Godínez Cruz, la Corte Interamericana de justicia emitió una serie de criterios jurisprudenciales en relación con el agotamiento de los recursos internos de gran importancia para la defensa de los derechos humanos en América Latina.

En relación con la alegación del Estado sobre el no agotamiento de los recursos internos de la Corte ha dicho"

...si un Estado que alega el no agotamiento, prueba la existencia de determinados recursos internos que deberían haber utilizado, corresponderá a la parte contraria de mostrar que esos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del artículo 462..." la sentencia: Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como ya lo señaló la Corte en su sentencia del 26 de junio de 1987 cuando afirmó: la regla del previo agotamiento de los recursos internos de la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención.

En efecto, según ella, los Estados Parte se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentra bajo su jurisdicción (artículo 1) (caso Godínez Cruz Excepciones Preliminares).

En artículo 46.1 a) de la Convención remite: "a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos". Esos principios no se refieren a la existencia formal de esos recursos, sino también a que estos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2"

En cuanto al derecho a un recurso efectivo, establece: "...Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idóneo para proteger la situación jurídica restringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo..."

"...De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o Hábeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida, por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y llegado el caso, lograr su libertad..." En cuanto al recurso de Hábeas Corpus estableció ... pero, si el recurso de exhibición personal exigiera, como lo afirmó el Gobierno, identificar el lugar de detención y la autoridad respectiva, no sería adecuada para encontrar a una persona detenida clandestinamente por las autoridades del Estado, puesto que, en estos casos solo existe prueba referencia de la detención y se ignora el paradero de la víctima.

"...Un recurso debe ser, además eficaz es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable. Si de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resultan peligroso para los interesados

intentarlo, o no se aplica imparcialmente....”

“.... El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recurso son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de las necesidades de agotar recursos internos que, en la práctica, no puede alcanzar su objeto....”

En cuanto a la prueba la Corte dijo “.... La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas. “... El procedimiento ante la Corte, como tribunal internacional que es, presenta particularidades y carácter propios por la cual no le son aplicables, automáticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos. “... Esto, que es válido en general en los procesos internacionales, lo es más aún en lo referente a la protección de los derechos humanos ...”

“.... a diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre

violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de alegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado....”

Sobre la responsabilidad del Estado ha señalado que: “.... El estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de las misma aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno...., agrega además: “... un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad Internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.....”

Establece la Corte la obligación del Estado de “... investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención.

Si el aparato del Estado actúan de modo tal que tal violación queda impune y no se restablezca en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido

cuando se tolera que los particulares o grupos de ellos actúen libre e impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención... ..”

En cuanto al **PRINCIPIO DE LA IDENTIDAD DE LA CONTINUIDAD DEL ESTADO**, la Corte opinó. “... según este principio de Derecho Internacional la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo, y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquel en que ella es declarada.

Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron...”

En resumen, se establecen una serie de criterios de suma importancia en cuanto al agotamiento de los recursos internos, reafirmando las excepciones del artículo 46.2 de la Convención Americana, la importancia de la evidencia circunstancial en el caso de los desaparecidos, la responsabilidad internacional del Estado por actos de sus agente o de particulares en relación con la violación de los derechos humanos, el deber del Estado de investigar las violaciones y tomar medidas efectiva para proteger los derechos humanos en los términos

establecidos por la Convención Americana, y el principio de continuidad de la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos.

III. OPINIÓN CONSULTATIVA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL HÁBEAS CORPUS BAJO SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultativa sobre interpretación de los artículos 25,1 (Protección Judicial) y 7.6 (Acción de Habeas Corpus) de la Convención Americana en relación con la última frase del artículo 27.2 (Excepciones a la suspensión de Garantía) de la misma.

Se formuló la siguiente consulta. ¿Puede el recurso de Habeas Corpus suspenderse por un Estado Parte de la Convención Americana de acuerdo a la parte final del párrafo 2 del artículo 27 de esta Convención? Que dice:

Artículo 27. Suspensión de garantías.

- 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales**

- disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivo de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. Las disposiciones precedentes no autorizan la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (Derecho a la vida); 5 (Derecho a la integridad personal); 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (Principio de la legalidad y retroactividad); 12 (Libertad de la conciencia y de la religión); 17 (Protección de la familia); 18 (Derecho al nombre); 19 (Derechos del niño); 20 (Derecho a la nacionalidad), y 23 (Derecho político), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Al respecto la Corte estimó que: “Los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituye garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición.

Una de las consideraciones de la Corte fueron: “el Habeas corpus para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación

de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el Habeas Corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la interminación de su lugar de detención , así como para protegerla contra la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanas o degradantes....”

La Corte concluye que: “... los procedimientos de Habeas Corpus y de Amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además para preservar la legalidad en una sociedad democrática.

Por último la Corte se pronuncia en cuanto a la legislación y aplicación del Habeas Corpus, desde la perspectiva de los derechos humanos: nos interesa destacar algunos aspectos esenciales inherentes al Habeas Corpus, a saber: el cumplimiento de términos brevísimos y perentorios lo cual tiene que ver con su rapidez y efectividad, que cumpla requisitos formales mínimos, que se aplique a la mayor cantidad posible de formas arbitrarias de privación de libertad, que está vinculada a garantizar toda una serie de otros derechos humanos. Debe ampliarse el número de hipótesis de privación de libertad o amenaza a la libertad, como el derecho que tiene el

detenido de una orden escrita y motivada por el juez correspondiente dentro de las 24 horas, el derecho a no ser Incomunicado salvo que resultare indispensables para esclarecer las existencias del delito en la forma y tiempo previsto por la ley, y el de ser asistido por un abogado defensor desde que es citado o detenido por la autoridad.

El aspecto fundamental esgrimido por la Corte en esta parte final resalta la necesidad de que los jueces tengan atribuciones legales que les permitan imponer sus requerimientos y ordenes a cualquier autoridad.

Sobre el tema central de la consulta elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la suspensión del Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus en casos de "Estado de Sitio" o "Estado de Urgencia" como lo establece el discutido artículo 51 de nuestra Carta Magna.

Sobre este tema se refiere y explica claramente la Licenciada Karina Molina Ortega cuando en su trabajo de tesis intitulada "El Habeas Corpus en la Legislación y la Jurisprudencia Panameña, Explica:

"La Constitución Política Vigente, reformada por acto Constitucional de 1983, si bien mantuvo lo que en la doctrina del constitucionalismo se conoce como "estado de sitio", sin embargo, apartándose de sus antecesoras sustituyó el término por el de "estado de urgencia", adicionando el texto original con dos

nuevos párrafos. Pero el cambio y la sustitución en nada afecta la finalidad jurídica que la norma constitucional persigue y sus efectos en el ámbito de las Garantías Fundamentales consagradas en la Constitución, al producirse dentro del Estado de Derecho situaciones como de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público.

Las únicas causas, por tanto, que conforme a nuestro sistema constitucional justifican el "estado de urgencia" y, por ende, la suspensión de los efectos de los artículos 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 44 de la Constitución, son las indicadas en el citado y transcrito artículo 51 de la Carta Política.

El estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las antes aludidas normas constitucionales es temporal y de modo parcial o total; y corresponde al Órgano Ejecutivo mediante Decreto en Consejo de Gabinete hacer esa declaración.⁽¹¹⁹⁾

Si contraponemos la norma constitucional vigente, frente a la norma Internacional entraríamos nuevamente al análisis del bloque de la constitucionalidad, y siempre encontraríamos posiciones a favor y en contra. Sin ánimo de producir esta confrontación, mi opinión inclina la balanza por la interpretación del bloque, y la interpretación extensiva de la norma internacional, sobre este orden de ideas, es importante traer a colación la opinión de la Doctora Aura Emérita Guerra de Villaláz, en seminario celebrado en 1991, con

⁽¹¹⁹⁾ MOLINA ORTEGA, Karina. Tesis para Optar por el Título de Licda. En Derecho, "EL HABEAS CORPUS EN LA LEGISLACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA PANAMEÑA". 1991, pág. 55 y 58

motivo de los 35 años de la fundación del Centro de Investigaciones Jurídicas.

La Doctora de Villaláz dijo:

Es la Convención Americana la que regula esta materia sobre derechos humanos en donde establece que las normas sobre habeas corpus no pueden ser suspendidas durante los períodos de excepción o estados de sitio, eso es una gran conquista y se estima que eso es muy importante, que se haya establecido así, y Panamá debe no solamente incorporarlo, es decir aceptarlo a través de la ley interna, sino incorporarlo a las disposiciones como el Código Judicial, que ha desarrollado el recurso de habeas corpus, debe tener una norma con un párrafo que tenga los principios generales que establezca, y reitere el principio, de que durante los períodos de excepciones el recurso de habeas corpus no pueden ser suspendido durante los períodos de excepciones o estados de sitio, eso es una gran conquista y se estima que es muy importante, que se haya establecido así. ⁽¹²⁰⁾

La exmagistrada Aura Emérita Guerra de Villaláz, es clara en su planteamiento, en cuanto a que el procedimiento de habeas corpus, no debe suspenderse, ni en períodos de estado de urgencia, siguiendo los

⁽¹²⁰⁾ Conferencia Magistral dictada por la Magistrada Aura Emérita Guerra de Villaláz, Titulada **"EL RECURSO DE HABEAS CORPUS"**, con motivo de los 35 años de Fundación del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho, junio, 1991

planteamientos del artículo 27 numeral # 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, posición esta con la cual coincidimos y apoyamos plenamente.

Con este comentario de nuestra Profesora de Maestría la Doctora Aura Eménta Guerra de Villaláz, al cual nos allanamos plenamente, concluimos este cuarto y último capítulo, con una revisión general de las normas y Pactos Internacionales que regulan el Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus, esperando que este trabajo de investigación y recopilación sirva de consulta obligatoria a nuestros estudiantes de Derecho, investigadores, colegas y demás personas interesadas en el estudio de uno de los Derechos más preciados por el ser humano, "El Derecho a la Libertad".

SECCION CUARTA
ASPECTOS METODOLOGICOS

ASPECTOS METODOLOGICOS

Luego de haber culminado la fundamentación teórica que se inicio prima fase, con el análisis conceptual y luego con la revisión preliminar del muestreo que consistió, en el análisis de la jurisprudencia de 1908 a 1971, recopilada en los anales de las actas de diario debate de la Asamblea Legislativa y diversos fallos de la época comentados en diferentes trabajos de investigación revisados.

A. MUESTREO

La base fundamental del muestreo para llevar a cabo este trabajo, consistió en la revisión integral y sistemática de la mayoría de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en materia de Habeas Corpus desde enero de 1990 a agosto de 1998. El cual se llevó a cabo con la revisión sistemática de las características judiciales existentes de estos periodos, con especial énfasis en los tres (3) últimos años y nueve (9) meses donde extraímos y comentamos los fallos de mayor trascendencia procesal, en la aplicación de la acción de Habeas Corpus, resaltamos el Comportamiento y la tendencia de nuestro máximo tribunal de justicia en crear vía jurisprudencial nuevas modalidades de la acción de Habeas Corpus tales como: El Habeas Corpus Preventivo, Correctivo y Rectificador.

B. MEDIOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESARROLLO DE LA MUESTRA:

Todo el desarrollo del trabajo de campo, investigación, recopilación, obtención del muestreo, y otros lo llevamos a cabo con recursos propios, producto de nuestros ingresos como abogado litigante.

C. VARIABLE INDEPENDIENTE:

Nuestro ordenamiento jurídico requiere de instrumentos procesales novedosos tales como la creación, ya sea vía jurisprudencia, o por iniciativa legislativa, de nuevas modalidades de Habeas Corpus con el preventivo, correctivo y especialmente el Habeas Corpus Rectificador, para aliviar el problema del hacinamiento en nuestro precario sistema carcelano.

D. VARIABLE DEPENDIENTE:

La tendencia mostrada por los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia, se inclina por la creación vía jurisprudencial de nuevas modalidades de la acción de Habeas Corpus como el preventivo el cual en la práctica jurídica de hoy día tiene plena vigencia, el correctivo, el cual también tiene una gran utilidad práctica y el Habeas Corpus Rectificador, el cual en estos momentos está en su fase de valoración y discusión de si es jurídicamente viable o no

Para los efectos de determinar el universo de la muestra, es importante dejar aclarado que para la época en que realizamos esta valoración del muestreo, el último registro judicial que habla expedido la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia es el de noviembre de 1998, fecha en la cual cerramos el universo de nuestro muestreo.

SECCION QUINTA
RESULTADOS Y DISCUSION

RESULTADO Y DISCUSIÓN

En el análisis de la muestra, obtenido mediante la revisión de los registros Judiciales de enero de 1990 a agosto de 1998, podemos concretizar el cumplimiento de La Hipótesis, consistente en la posibilidad de crear nuevas modalidades de Habeas Corpus, de acuerdo a las normas internacionales, el Código Judicial y la Jurisprudencia. El resultado del Muestreo fue que efectivamente el comportamiento jurídico de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, fue precisamente crear nuevas modalidades de Habeas Corpus. Si analizamos los resultados tendríamos que hasta agosto de 1998: se tramitaron 372 Habeas Corpus Reparadores, 10 Habeas Corpus Preventivo y 1 Correctivo.

En el año 1997 se tramitaron 572 Habeas Corpus Reparadores, 16 Preventivos y ninguno Correctivo.

En 1996 se tramitaron 582 Habeas Corpus Reparadores, 15 Preventivos y ninguno Correctivo.

En 1995 se tramitaron 621 Habeas Corpus Reparadores, 9 Preventivos y 2 Correctivos.

En el año 1998 se admitieron desistimiento de 86 acciones de Habeas Corpus, se confirmaron 59, se decretaron legal la detención 181, y se declararon no viable 13.

En el año 1998 los funcionarios más demandados con acciones de Habeas Corpus por detenciones ilegales fueron: La Fiscalía Primera especializada en delitos relacionados con droga con 66 acciones en su contra. La Fiscalía Segunda especializada en delitos relacionados con droga 73. El director de la Policía Técnica Judicial con 37, el Director General de la Policía Nacional con 54, el Director Nacional de Migración con 29, la Dirección Nacional de Corrección con 57 y el Fiscal Auxiliar de la República con 23 recursos Habeas Corpus en su contra.

La medición de estos parámetros la analizaremos en la sección de anexos donde presentamos una serie de gráficas que explica la distribución del muestreo.

SECCION SEXTA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Luego de culminar nuestro trabajo de investigación en un análisis crítico del Instituto Procesal Constitucional del Habeas Corpus, a la luz de la Doctrina y la jurisprudencia nacional para optar por el título de Maestría en Derecho Procesal, podemos arribar a las siguientes consideración a manera de conclusión del tema:

1. Que desde el nacimiento de nuestro país como República, el instrumento protector de la libertad corporal por excelencia, ha sido la acción de habeas corpus
2. Que en la actualidad, se ha superado la concepción arcaica de considerar al Habeas Corpus, como un "Recurso". El derecho procesal moderno lo enmarca como una acción, incluso los procesalistas más contemporáneos, van más haya, y lo enmarca dentro del Derecho Procesal Constitucional, como "El Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus", el cual pretende convertir las garantías constitucionales en verdaderos instrumentos de protección procesal de los derechos humanos, con rango constitucional.
3. Que la nueva corriente Procesal busca en la acción de Habeas Corpus, la magnificencia del Principio de Economía Procesal, caracterizado en su procedimiento sumárisimo con independencia de quien lo solicite. Donde confluyen necesariamente otros principios Procesales como la

inmediación del juzgador y la concentración. La Acción de habeas Corpus, regulado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, se interpone ante un tribunal en caso de una detención arbitraria, y tiene como propósito de obtener la libertad corporal, y procede en aquellos casos donde una persona es detenida sin fundamento legal. Esta petición puede ser verbal o escrita ante la autoridad correspondiente. La autoridad que ordene la detención de una persona debe hacerlo por escrito y entregar copia de ésta al interesado al momento de practicar esta detención. Estos requisitos fundamentales del Derecho de Libertad, son vulnerados a diario por funcionarios que se resisten a los últimos postulados de la jurisprudencia.

- 4 El procedimiento de Habeas Corpus es oral y puede ser interpuesto por el propio agraviado u ofendido o por cualquier persona en su nombre sin necesidad de ser abogado. En una acción que no requiere mayores formalidades, se debe señalar el nombre del detenido y a ordenes de quien se encuentre la persona detenida y otras consideraciones en torno a la ilegalidad aducida. (Si desconoce alguna circunstancia deberá mencionarse). La acción de Habeas Corpus puede ser interpuesta en cualquier momento u hora, y el Tribunal del Habeas Corpus debe declararse en sesión permanente hasta que se declare la legalidad o la ilegalidad de la detención.
5. Que al resolverse la acción de habeas corpus no corresponde a la Corte calificar la investigación realizada, ni señalar cuáles son las normas

específicas en que se encuadra la conducta imputada, sólo corresponde al Tribunal constatar si la privación de la libertad se llevó a cabo con los requisitos que la ley determina. Sin embargo, antes de valorar el hecho de que en la detención haya llenado o no la concurrencia de los requisitos de Ley, es decir, que la orden fuera emitida por autoridad competente, por escrito y que se trate de la violación de una norma que tipifica una conducta delictiva, cabe destacar que si la pena establecida para dicha conducta punible tiene pena mínima menor de dos años no cabe dicha detención preventiva.

- 6 La acción de Habeas Corpus, procede básicamente, contra una orden de detención que no sigue los postulados de la Constitución y la Ley, o que sea emitida por una autoridad que no tenga la competencia para ordenar detenciones. Sobre este aspecto queda claro que las Resoluciones Judiciales que ordenan la práctica de determinadas diligencias judiciales en la fase sumaria, que obligan al imputado a concurrir al proceso, como lo es la orden de conducción, la cual no constituye una detención, sino un mecanismo procesal coactivo, para que la persona sobre la cual se ha hecho señalamientos directos en el proceso presente sus descargos
- 7 Para que la medida cautelar de detención preventiva proceda, es indispensable que se señalen las pruebas que operan en contra del encartado, para que se dé el principio de contradictorio y el imputado pueda ejercitar los descargos; si no se lleva a cabo este cruce de material probatorio y se omite esta valoración en la resolución que ordena la

detención preventiva, es elemento suficiente para invalidar la resolución que ordena la detención.

8. En materia de drogas sólo procederá la detención preventiva, cuando la cantidad de droga, sea mayor a la medida posológica que ha establecido la Medicatura forense para el consumo personal, por lo que resulta un error procesal calificar la conducta del imputado como posesión agravada, ya que la jurisprudencia ha dejado aclarado que se debe calificar el delito como posesión simple, sobre la cual no cabe detención preventiva.
9. Normalmente existe la tendencia equivocada de considerar que siempre que se sorprenda al imputado en flagrante delito, procede la detención independientemente de la pena mínima aplicable. Sobre este aspecto es imperativo dejar aclarado que la flagrancia tiene dos requisitos en el orden procesal que son: 1) que el sindicado esté en posesión física de la sustancia, y 2) que haya disponibilidad del infractor para hacer uso de la misma. Y además es requerimiento verificar las cantidades posológicas de sustancia incautada.
10. A nuestro modo de ver la Corte no muestra inconveniente en aceptar la solicitud de habeas corpus hecha telefónicamente, toda vez que la norma adjetiva en su artículo 2573, establece que la acción se puede solicitar verbalmente, (entendiendo por verbal cualquier medio electrónico transmisor del sonido de la voz) que puede ser el teléfono, o el telégrafo. Sobre este aspecto si adecuamos la norma a la actualidad de las comunicaciones y al desuso que ha tenido el telégrafo en los últimos años

producto del facsímil. Podríamos añadir que también debería aceptarse el habeas corpus por medio de Fax, ya que en la mayoría de los despachos judiciales cuentan con este aparato.

11. En cuanto a los modos de interponer la acción de Habeas Corpus no nos debe parecer extraño la interposición de la acción de habeas corpus de manera verbal siguiendo el patrón tradicional, por teléfono, por telégrafo; o por fax, y con un criterio más de avanzada consideramos que también se puede interponer por medio de una llamada telefónica, o por internet, lo cual resultaría desde una perspectiva procesal más ambiciosa, el máximo umbral del principio de Economía Procesal.
12. En cuanto al Poder de coerción que entre otros caracteriza al juzgador moderno, para que éste tenga más participación en el proceso, y no sea un simple convidado de piedra, debe de gozar de cierta facultad coercitiva, con la cual elimina los obstáculos que empañen o puedan oponerse al cumplimiento de la misión del juzgador, especialmente en el cumplimiento de sus ordenes. Sin este poder la función jurisdiccional no tendría real eficacia, es imperativo dejar sentado que si bien es cierto no prospera la acción de habeas corpus cuando se trata de arresto ordenado por el juzgador, haciendo uso del poder de coerción que lo enviste. Si proceden las atenuantes que establecen la norma adjetiva
13. En cuanto a la detención preventiva existen algunos funcionarios del Ministerio Público, que todavía en los albores de un nuevo siglo, se resisten a entender, que la detención preventiva, debe ser una medida

“Extrema y Ultima”, cuando ya no exista alternativa de decretar otra medida sustitutiva, ya sea por la calidad y modo en que se ejecute el hecho punible, o por la clara peligrosidad del imputado. Pero cuando no se trate de estas situaciones excepcionales no se deberían de dictar detenciones preventivas.

14. Para los efectos de que una mujer embarazada o en el período de post-parto, se le encuentre suficientes elementos que la vinculen con el hecho punible, dicha detención es legal, pero es obligación del Tribunal de Habeas Corpus reemplazar la orden de detención por las otras medidas cautelares de carácter personal que establecen los literales a, b y c del artículo 2147-B del Código Judicial, en razón del fuero penal de que disfruta la mujer embarazada, fuero penal que consiste en “El deber del Estado de procurar las mejores condiciones para que la criatura que se desarrolla en el claustro materno, pueda nacer con un soporte médico y un ambiente digno”.
15. El artículo 2600 del Código Judicial que en raras ocasiones vemos su cumplimiento, establece que si hay suficientes motivos para sancionar al funcionario que emitió la orden de detención ilegal se debe compulsar copias, para iniciarle una investigación de oficio. Lastimosamente esto pocas veces se hace, y las remotas veces que el Tribunal de Habeas Corpus, ordena que se compulse copias para abrir una investigación al funcionario que ordenó la detención ilegal. Esta investigación termina sin

aplicarle NINGUNA sanción a la autoridad infractora del derecho de libertad.

16. En materia procesal existe la conocida teoría de "Los Frutos del Arbol envenenado", que establece que las pruebas ilícitamente adquiridas, vician de nulidad el proceso, y en consecuencia, vician las demás pruebas adquiridas, en función de las adquiridas ilícitamente. Queda aclarado que la detención que se ordene con base a pruebas ilícitamente adquiridas, debe declararse ilegal, ya que se vulnera una prohibición contenida en la Ley adjetiva.
17. El habeas corpus preventivo se concede con el fin de proteger a los individuos contra amenazas comprobadas a la libertad corporal. Se requiere que el peticionario demuestre, con certeza, la existencia de un temor fundado sobre la eventual privación o afectación de su libertad personal; dicho temor debe ser actual e inminente. Es por ello que la esencia del habeas corpus preventivo es: a) la existencia de una amenaza efectiva contra la libertad corporal, la que por su naturaleza debe constar en un andato que ordene una detención preventiva y b) que tal mandato no se haya hecho efectivo.
18. Podemos concluir entonces que en el Habeas Corpus Correctivo a diferencia del preventivo no se trata de hacer frente a una amenaza que pesa contra la libertad individual. Aquí la detención es legal pero se atacan las condiciones en las que éstas se pueden llevar a cabo o el trato dispensado al detenido, la esencia de esta modalidad de habeas corpus

es la de terminar con torturas o malos tratos ocasionados a personas detenidas legalmente, pues no es la finalidad de esa detención preventiva el infringir a los reos con malos tratos que vayan en detrimento de su integridad física o mental, así como dificultar su readaptación a la sociedad.

19. El Habeas Corpus Rectificador, se da cuando el detenido ha cumplido dos tercios de su condena, ha mostrado buena conducta y readaptación social. Entonces este individuo solicita a las autoridades administrativas de corrección, el beneficio de la libertad condicional consagrada en la norma sustantiva penal en su artículo 85. Pero si los Organismos Administrativos se niegan a conceder tal derecho, debería según nuestro criterio prosperar ante la Corte Suprema de Justicia un habeas corpus que rectifique tal posición de las autoridades administrativas de corrección, y se ordene la "Libertad Condicional del reo". Si bien es cierto en nuestro País la Corte ha mostrado cierto recelo en aceptar esta modalidad de habeas corpus, toda vez existe la tendencia en pensar que la libertad condicional es una gracia del Organo Ejecutivo, y que es discrecional de este Organo del Estado, otorgarla o no.
20. Igualmente podríamos concluir la clasificación didáctica con una última modalidad conocida como Habeas Corpus de Oficio, esta modalidad de habeas corpus se encuentra contenida en nuestra norma adjetiva en el artículo 2540 del Código Judicial, donde el espíritu de la misma es permitirle oficiosamente al Juez o Magistrado, que en sus visitas

periódicas a las cárceles, cuando se percaten que una persona se encuentra recluida en el centro Penitenciario, sin que medie orden de detención debidamente expedida por autoridad competente, se deberá ordenar inmediatamente su libertad.

- 21 El Derecho Internacional con el objetivo de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fuera meramente teórica o abstracta, sino que tuviera aplicación práctica y concreta, se buscaron reglas de carácter sustancial, para que las legislaciones nacionales establecieran un recurso efectivo que otorgara competencia a los tribunales de cada país con el objetivo de que toda persona sea amparada contra actos que violan los derechos fundamentales reconocidos también por el Derecho Interno, los procesalistas hemos aclarado que al referirse al habeas corpus, estamos frente a una acción contra actos violatorios de la Constitución y de la ley, elevando al rango de norma de derecho internacional la garantía de Habeas Corpus.
22. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que los procedimientos de Habeas Corpus y de Amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además para preservar la legalidad en una sociedad democrática.

RECOMENDACIONES

Al culminar nuestro trabajo de investigación estamos en capacidad de hacer las siguientes recomendaciones, para tratar de corregir ciertas incongruencias de tipo procesal que se dan en el Desarrollo de la Acción de Habeas Corpus.

SE DEBE UNIFORMAR LA DENOMINACION DE HABEAS CORPUS COMO UNA ACCION

1. Es imperativo que se reforme el artículo 23 de la Constitución Nacional, con la finalidad de adecuarlo a la Doctrina Procesal, en cuanto a cambiar la denominación de "Recurso", por "Acción", y así lograr coherencia doctrinal y una uniformidad jurídica entre la Constitución y el Código Judicial.

SE REQUIERE QUE EL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS ESTE EN SESION PERMANENTE

2. Es urgente que se rescate y se le de especial cumplimiento, a lo referente a que el Tribunal de Habeas Corpus debe estar en sesión permanente incluso en horas y días inhábiles. Esto solo se puede corregir creando un sistema de turnos semanales para jueces y magistrados en Materia de

Habeas Corpus, lo mismo que funcionarios del Ministerio Público, que tendrían como función principal darle trámite expedito a las solicitudes de Habeas Corpus en las horas de medio día, después de finalizada la jornada judicial, los fines de semana y los días feriados e inhábiles. Postenormente este tiempo del turno será pagado con tiempo compensatorio, u otra medida administrativa.

SE DEBE SANCIONAR AL FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE ORDENO LA DETENCION ILEGAL

3. Es de suma importancia que el tribunal de habeas corpus, le de vigencia al artículo 2600 del Código Judicial, elevándolo a rango Constitucional, de manera que se sancione al funcionario que ordena la detención ilegal. Toda vez que la norma exige que si se justifica que se le abra una investigación a la autoridad o funcionario que ordenó la detención ilegal, se deben compulsar copias para abrir dicha investigación , la cual debe culminar en una sanción. En la práctica esto resulta letra muerta, razón por la cual recomendamos que cada vez que se decreta ilegal una detención, la misma resolución debe ordenar la apertura de la investigación al funcionario infractor, y si la detención es manifiestamente improcedente sancionar inmediatamente al funcionario infractor.

**SE DEBE EXCLUIR AL HABEAS CORPUS DE LAS GARANTIAS
SUCEPTIBLES DE SER SUSPENDIDAS EN LOS ESTADOS DE URGENCIA**

4. Recomendamos modificar el artículo 51 de la Constitución, en cuanto a que se excluya como supuestos que pueden ser suspendidos en el llamado Estado de Urgencia, el Derecho de Libertad Corporal (Artículo 21), y la acción de Habeas Corpus (artículo 23), pues como esta contenido en la actualidad esta en franca contradicción con la Convención Americana de Derechos Humanos.

**SE DEBE PROMULGAR UNA LEY QUE DESARROLLE LOS DERECHOS
DEL DETENIDO**

5. Es urgente se desarrolle por medio de una norma adjetiva, la reservar legal contenido en el artículo 22 de la Constitucional que consagra los derechos del detenido.

**ES NECESARIO REINCORPORAR EL ARTICULO QUE ESTABLECIA
SANCIONES A LAS ACCIONES DE HABEAS CORPUS TEMERARIAS**

6. Recomendamos reincorporar a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 39 de la Ley 46 de 1952, el cual inexplicablemente fue eliminado por el codificador en el nuevo Código Judicial, en el cual se establecían

sanciones pecunarias por razón de promover acciones de Habeas Corpus Temerarias, y manifiestamente improcedentes.

SE REQUIERE LA MODIFICACION DEL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION, Y SE INCLUYAN TODAS LAS MODALIDADES DE HABEAS CORPUS

7. Es de suma urgencia se modifique la constitución y se cambie la redacción del Artículo 23, cosa de que quede claramente establecido de que la acción de habeas corpus se da cuando el individuo ha sido detenido por una orden ilegal (Habeas Corpus Reparador), o cuando exista una amenaza actual e inminente de que se intenta vulnera ilegalmente la libertad (Habeas Corpus Preventivo), o cuando el individuo se encuentre detenido y se vulneren sus derechos humanos (Habeas Corpus Corrector); y cuando el individuo ha cumplido más de 2/3 parte de su condena y (Habeas Corpus Rectificador) de manera que se incluyan en la norma constitucional todas las modalidades de Habeas Corpus que reconocen la doctrina y la jurisprudencia en la mayoría de los países.

ES NECESARIO QUE SE CUMPLA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCION Y PERMITIR LA APELACION DEL RECURSO POR PARTE DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

8. Desde una perspectiva estrictamente procesal, es de rigor recomendar que se establezca el recurso de apelación en efecto devolutivo, en beneficio de la autoridad demandada cuando la resolución judicial que decide el procedimiento de Habeas Corpus declara ilegal la detención. Aún cuando esto puede confrontar el sistema de urgencia y sumariedad que conlleva la acción de Habeas Corpus, en materia procesal es imperativo que se dé el contradictorio.

EL DETENIDO ILEGALMENTE DEBERIA PODER RECLAMAR SUS DAÑOS Y PERJUICIOS

9. Recomendamos incluir en las normas de Habeas Corpus un artículo que permita a la persona detenida ilegalmente a entablar un juicio por daños y perjuicios contra el funcionario o autoridad que ordenó la detención por conculcar arbitrariamente su libertad corporal.

ES NECESARIO SE CUMPLA EL PRINCIPIO DE INMEDIACION EN LA AUDIENCIA POR DELITOS POLITICOS

10. Recomendamos que en los delitos políticos, por su naturaleza especial, debería lograrse la comparecencia del detenido al despacho del juez del habeas corpus. En otras palabras, no se debe prescindir de la

celebración de la audiencia en estos casos aunque sobre este existieren sumarias instruidas.

EN OTRAS CLASES DE DELITOS POR ECONOMIA PROCESAL, LA AUDIENCIA DEBE SER DISCRECIONAL DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

11. Recomendamos la conveniencia de permitir al juzgador decidir de oficio o discrecionalmente la posibilidad de celebrar audiencias de Habeas Corpus, o prescindir de ésta, aún cuando la Ley le señale la prescindencia de la primera por razón de que sobre el detenido existiere un proceso, actuación o sumario.

SE DEBEN PROHIBIR LAS DETENCIONES PREVENTIVAS LOS DIAS VIERNES

12. Queremos culminar recomendando de manera especial, que se introduzca un artículo en el Código Judicial, donde se prohíba expresamente que se dicten detenciones preventivas los días viernes, ya que por el cierre de las oficinas públicas los fines de semana, el individuo detenido permanece 48 horas en total indefensión, ya que la sesión permanente del tribunal de Habeas Corpus en días feriados e inhábiles, es letra muerta en la práctica judicial.

SECCION SEPTIMA

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

- BERNAL V.**, Miguel Antonio y **BERRIOS H.**, Julio Elías. **SÍNTESIS DEL CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO**, Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 1980, 91 p.p.
- BISCARETTI DI RUFFIA**, Paolo. **DERECHO CONSTITUCIONAL**. Madrid: Editorial TECNOS, S.A. 1973.
- CASTAN TOBEÑAS**, José. **LOS DERECHOS DEL HOMBRE**. Instituto Editorial Reus, S.A., Madrid, 1985. 308 p.p.
- CRUZ RÍOS**, Rogelio. **EL AMPARO DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN PANAMÁ**, 1990, Panamá, República de Panamá. 287 p.p.
- FABREGA P.**, Jorge. **ESTUDIOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO**, Editorial Texto, San José, Costa Rica, 1987, 975 p.p. **Instituciones de Derecho Procesal Civil**, Editorial Serviprenta, S.A., 1976, 376 p.p. **DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL PANAMEÑO**, Estudios de Derecho Constitucional Panameño (Jorge Fábrega P., Compilador), p.p.
- FIX SAMUDIO**, Héctor. **LATINOAMERICA: CONSTITUCIÓN. PROCESO Y DERECHOS HUMANOS**, Editorial Miguel Angel Porrúa, S.A., México, 1988, 550 p.p.
- GARCÍA BELAUNDE**, Domingo. **EL HABEAS CORPUS EN EL PERÚ**. Lima, Editorial UNMSM, 1ª edición, 1973.
- GUERRA DE VILLALAZ**, Aura E. "LA DETENCIÓN PREVENTIVA: PROLONGACIÓN DE UNA INJUSTICIA QUE DEBE ERRADICARSE", **Anuario de Derecho**, No. 12, Universidad de Panamá, 1983.
- GONZÁLEZ FERRER**, Campo Elías. **EL DERECHO DE DEFENSA**, Comentarios al artículo 22 de la Constitución Panameña, Madrid, 1984, 20 p.p.
- GUERRA MORALES**, Silvio. **INSTITUCIONES DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL**, Editorial Lerner, Santa Fé de Bogotá – Colombia, 1994.
- HERNANDEZ VALLE**, Rúben. **"LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES"**, Edit. Juricentro, Costa Rica, 1990.
- HITTERS**, Juan Carlos. **"EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL"**, Estudios de Derecho Constitucional Panameño, (Jorge Fábrega P. Compilador), Editorial texto, Ltda., San José, C.R., 1987, 20 p.p.

MARTÍNEZ SANCHEZ, Luis Alberto. "LA DEFENSA CONSTITUCIONAL EN EL PROCESO PENAL PANAMEÑO: EL HABEAS CORPUS", Panamá, 1993

MOLINO MOLA, Edgardo. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PANAMÁ. (EN UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO), Editorial Biblioteca Jurídica Dike, Medellín – Colombia, 1ra. Edición, 1998.

ORTENCHO VILLENA, Víctor Julio. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Marsol Perú Editores, S.A., p.p.

PÉREZ LUÑO, Antonio E.. DERECHOS HUMANOS. ESTADO DE DERECHO Y CONSTITUCIÓN. Edit. Tecnos, España, 1984.

QUINTERO, César. "LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PANAMÁ", Estudios de Derecho Constitucional Panameño, (Compilado por Jorge Fábrega P.) Edit. Texto, San José, C.R., 1987.

EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE PANAMÁ. ESTUDIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PANAMEÑO. (Jorge Fábrega P., Compilador), Editorial Texto, Ltda., San José, C.R., 1987, p. 21

RICORD, Humberto. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, México, Impresiones Modernas, S.A., 1970.

SAGUES, Néstor P. EL HABEAS CORPUS. Buenos Aires. Editorial FEDYE, 1ª, edición, 1981.

HABEAS CORPUS. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y PROCESAL EN LA NACIÓN Y PROVINCIAS, Fondo Editorial de Derecho y Economía, Bernardino Rivadavia, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Octubre 1981, 411 p.p.

SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos. EL HABEAS CORPUS. GARANTÍA DE LA LIBERTAD. Buenos Aires, Editorial Perrot, 2ª edición, 1956.

EL HABEAS CORPUS. LA LIBERTAD Y SU GARANTÍA, Editorial Librería Jurídica, Buenos Aires, 1927, 223 p.p.

EL HABEAS CORPUS, Argentina: Editor Valerio Abeledo, 1927.

SIERRALTA, Morris. DE LOS RECURSOS DE AMPARO Y HABEAS CORPUS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL VENEZOLANO. Caracas, Ediciones Jurídicas, 1ª edición, 1961

VIVES ANTÓN, Tomás S. y GIMENA SENDRA, José Vicente. LA DETENCIÓN. Edit. Bosch, España, 1997.

ZAMORA-PIERCE, Jesús. GARANTÍAS Y PROCESO PENAL. Edit. Porrúa, México, 1993

TESIS

ALEXANDER GONZALEZ, Mario. LA ACCION DE HABEAS CORPUS EN EL DERECHO PARAMENÓ. Trabajo de Graduación, Facultad de derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1990.

ALI BONILLA, Aurelio. EL HABEAS CORPUS COMPARADO. Trabajo de Graduación. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, 1962.

MOLINA ORTEGA, Karina Edith. EL HABEAS CORPUS EN LA LEGISLACION Y EN LA JURISPRUDENCIA PANAMEÑA. Trabajo de Graduación. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, 1991

NAKAGANE RODRIGUEZ, Ricardo Noriel. EL HABEAS CORPUS, GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD CORPORAL EN PANAMA. Trabajo de Graduación, Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías (ULACIT), Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 1991.

VALDERRAMA GALLARDO, Raúl. EL HABEAS CORPUS (EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN PANAMÁ). Trabajo de Graduación, Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 1991.

DICCIONARIOS

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires, Editorial Heliasta, S.R. L., 16ª edición, 1983.

DE SANTOS, Víctor. Diccionarios de Derecho Procesal. Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 1998, 9.203

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Editorial Heliasta, S.R.L., 1974.

REVISTAS

ANUARIO DE DERECHO NO. 4, Universidad de Panamá, Organo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, año IV, 1959-1960.

ANUARIO DE DERECHO NO. 12, Universidad de Panamá, Organo de información de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, año XII, 1983.

LEX (Revista del Colegio Nacional de Abogados de Panamá). Enero – Junio, 1986.

CONSTITUCIONES

Constitución Política de la República de Panamá de 1904.

Constitución política de la República de Panamá de 1941.

Constitución Política de la República de Panamá de 1946.

Constitución Política de la República de Panamá de 1972.
Reformada por los Actos Reformativos de 1978 y por Acto Constitucional de 1983.

LEYES

Ley 46 de 24 de noviembre de 1956.

Ley 29 de 25 de octubre de 1984. (Código Judicial de 1987.)

Ley 2 del 24 de Septiembre de 1908. Leyes expedidas por la Asamblea Nacional de Panamá en sus sesiones de 1906 y 1907, Edición Oficial, Panamá, Tipografía "Diario de Panamá", 1909.

Ley 8 de 30 de Octubre de 1914. Leyes expedidas por la Asamblea Nacional de Panamá en sus sesiones de 1914-1915, Edición Oficial, Panamá, Imprenta Nacional, 1915

Ley 15 de 28 de Octubre de 1977 (Convención Americana sobre Derecho Humanos). Gaceta Oficial 184.68 de 30 de Noviembre de 1977.

Proyecto de Ley preparado por el Organo Ejecutivo, por el cual se recomienda la creación de la Sala de Garantías Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y el Nombramiento de Tres Magistrados que la conformarían. 1° de marzo de 1999, anunciado por el Presidente de la República en la instalación del último periodo de sesiones de este Organo Legislativo.

JURISPRUDENCIAS

Registro Judicial, 1909.

Registro Judicial, 1910.

Registro Judicial, 1911.

Registro Judicial, 1912.

Registro Judicial, 1913

Registro Judicial, 1914.

Registro Judicial, 1915.

Registro Judicial, 1917.

Registro Judicial, 1921.

Registro Judicial, 1925.

Registro Judicial, Julio a Diciembre 1941.

Registro Judicial, 1945.

Registro Judicial, 1950.

Registro Judicial, Mayo 1961.

Repertorio Jurídico, Mayo 1961.

Registro Jurídico No. 11, Noviembre 1961.

Repertorio Jurídico, Diciembre 1961.

Repertorio Jurídico, Febrero 1962.

Registro Judicial, Mayo 1962.

Repertorio Jurídico, Mayo 1962.

Repertorio Jurídico, Junio 1962.

Registro Judicial, Agosto 1962.

Repertorio Jurídico, Febrero 1963.

Repertorio Jurídico, Septiembre 1963.

Registro Judicial, Noviembre 1963.

Registro Judicial, Junio 1964.

Repertorio Jurídico, Junio 1964

Registro Jurídico No. 7, Julio 1964.

Registro Judicial, 1970.

Registro Judicial, 1973.

Registro Judicial, 1974.

Registro Judicial, Diciembre 1981.

Registro Judicial, Septiembre 1982.

Registro Judicial, Enero 1983.

Registro Judicial, Noviembre 1983.

Registro Judicial, Junio 1984.

Registro Judicial, Noviembre 1987.

Registro Judicial, Septiembre 1989.

Registro Judicial, Noviembre 1991.

Registro Judicial, Junio 1992.

Registro Judicial, Noviembre 1992.

Registro Judicial, Enero 1994.

Registro Judicial, Mayo 1994.

Registro Judicial, Agosto 1994.

Registro Judicial, Septiembre 1994.

Registro Judicial, Diciembre 1996.

Registro Judicial, Marzo 1997.

Registro Judicial, Junio 1997.

Registro Judicial, Julio 1997

Registro Judicial, Noviembre 1997.

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 6 de octubre de 1950.

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 18 de julio de 1996.

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de 11 de julio de 1993.

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 5 de agosto de 1998.

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 30 de octubre de 1998.

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 15 de diciembre de 1998.

Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 21 de diciembre de 1998.

OTRAS FUENTES

Seminario Sobre Amparo y Habeas Corpus. México D.F., 1962, p. 6, Cancio, Hiram R.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A, No. 8

Acta de Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del 11 de Septiembre de 1908.

Acta de Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del 17 de Septiembre de 1908.

Acta de Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del 6 de Octubre de 1914.

Acta de Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del 16 de Noviembre de 1956.

Conferencia Magistral expuesta por el Doctor Edgardo Molino Mola, titulada: "El Estado Actual de la Administración de Justicia en Panamá", su problemática y soluciones", pronunciada por el Auditorium de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el 10 de enero de 1987, 42 p.p.

Conferencia Magistral expuesta por la Doctora Aura Emérita Guerra de Villaláz, con motivo de los 35 años de fundación del Centro de Investigaciones Jurídicas titulada "El Recurso de Habeas Corpus", Panamá, 1991, 12 p.p.

ANEXO

**MODELO BÁSICO PARA LA REDACCIÓN
DE UNA ACCION DE HABEAS CORPUS**

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS
(Modelo Básico)

(NOMBRE DEL DETENIDO)
VS

Director de la Policía Técnica Judicial

HONORABLE MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN PLENO

Con mi acostumbrado respeto, yo, _____, varón, panameña, mayor de edad, abogado en ejercicio, con oficinas ubicadas en Justo Arosemena Edificio _____, Calle _____, de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal No. _____, actuando en nombre y representación del señor, _____, varón, norteamericano, mayor de edad, comerciante, con domicilio de New York _____, Estados Unidos, y portador del pasaporte No. _____, de paso por esta ciudad, por este medio interpongo **FORMAL DEMANDA DE HABEAS CORPUS** a favor de mi representado y en contra del Señor **DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL**, a objeto de que se ordene la libertad de mi representado (Nombre del Detenido)

FUNDAMENTAMOS NUESTRA ACCION DE MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE HECHO Y DE DERECHO:

PRIMERO: Mi representado, _____, se encuentra detenido y privado de libertad corporal en las celdas de la Policía Técnica Judicial desde el día _____ de _____ de 199____.

SEGUNDO: Mi representado se encuentra detenido a órdenes de la Policía Técnica Judicial y bajo la custodia o poder del señor Director de la Policía Técnica Judicial, _____.

TERCERO: Mi representado se encuentra detenido, sin que exista orden de detención expedida por autoridad competente.

CUARTO: Mi representado se encuentra detenido por más de veinticuatro horas, sin acusación formal en su contra, y sin haber sido puesto a órdenes de autoridad competente, (Artículo 21 de la Constitución)

QUINTO: Mi representado ha sido amenazado con la deportación a pesar de no resultar indicios de delito o de la comisión de delito.

Según consta en las diligencias que obran en las oficinas de la Sección de Seguridad de la Policía Técnica Judicial, mi representado arribó al país el día de 19____ en horas de la mañana, en compañía de un ciudadano norteamericano, cuyas generales desconozco, y en compañía de un ciudadano francés, cuyas generales también desconozco, pero quien se encuentra también detenido.

Ingreso al país, mi representado en compañía de los otros dos sujetos se hospedó en el Hotel _____ de esta ciudad donde mi representado y sus acompañantes recibieron una carta "con amenaza de muerte", razón por la cual uno de los sujetos decidió abandonar el país, no así mi representado _____ y el otro ciudadano de nacionalidad francesa.

Para sorpresa de mi representado, a eso de las _____ p.m. del día _____ de _____ de 199____, fue detenido en el Hotel

_____ de esta ciudad por funcionarios de la Policía Técnica Judicial y confinado en las celdas de la mencionada institución sin cargo o acusación alguna en su contra.

Los hechos arriba mencionados hacen temer por la seguridad física y por la vida de mi representado.

SOLICITUD ESPECIAL Y URGENTE:

En virtud de los hechos expuestos solicito:

1. Se libre el mandamiento de Habeas Corpus contra el funcionario demandado.
2. Se ordene al demandado enviar la actuación y rendir el informe correspondiente.
3. Se le ordene al acusado poner a mi representado a órdenes de la Corte Suprema de Justicia.
4. Que se ordene la celebración de la audiencia conforme establece el Artículo 2590 del Código Judicial y se presente el detenido ante el Tribunal de Habeas Corpus

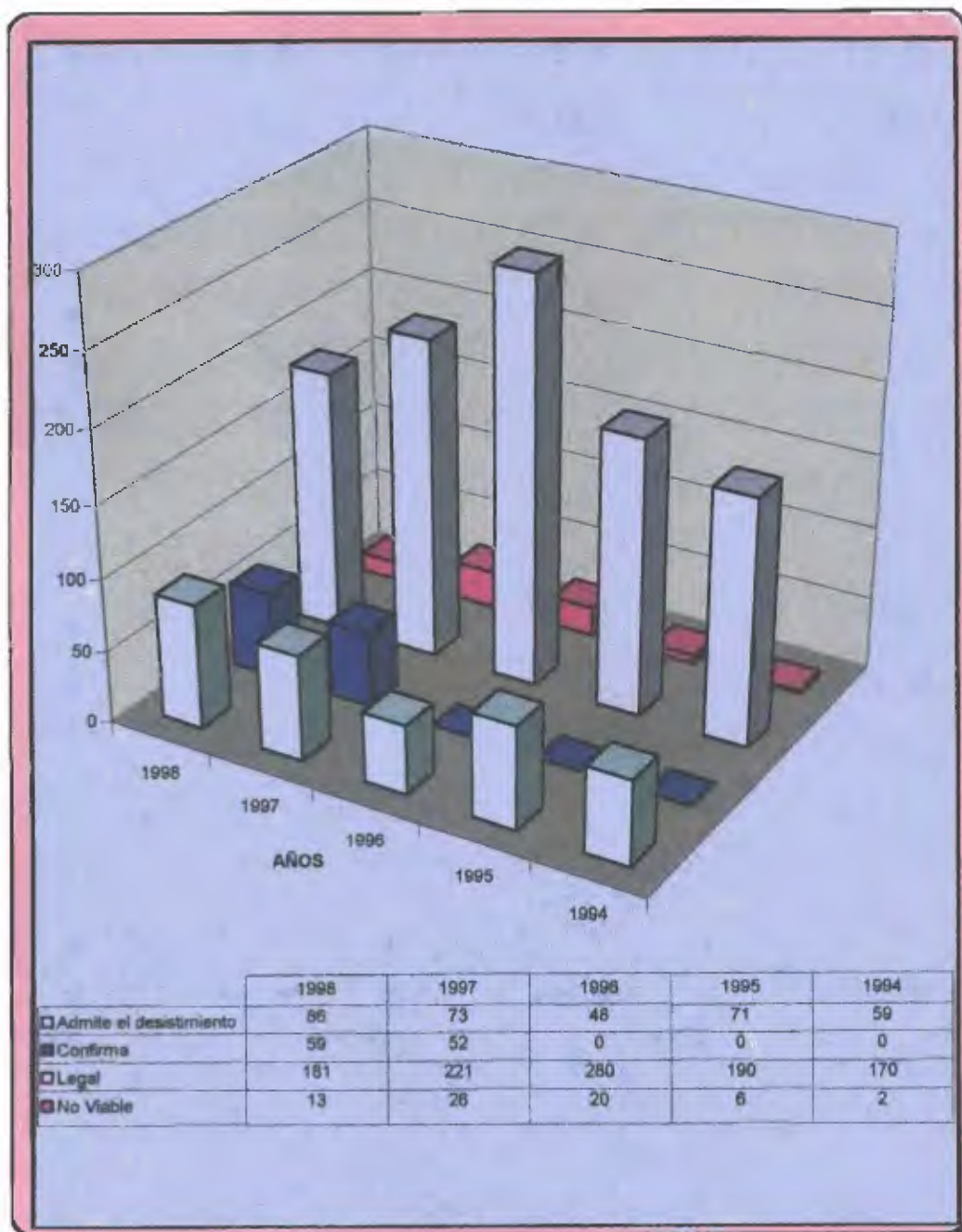
PRUEBAS: Como no existe orden escrita de detención no se puede acompañar.

DERECHOS: Arts. 21, 22 y 23 de la Constitución Nacional y Artículos 2565, 2566, 2567, 2568, cc y ss del Código Judicial.

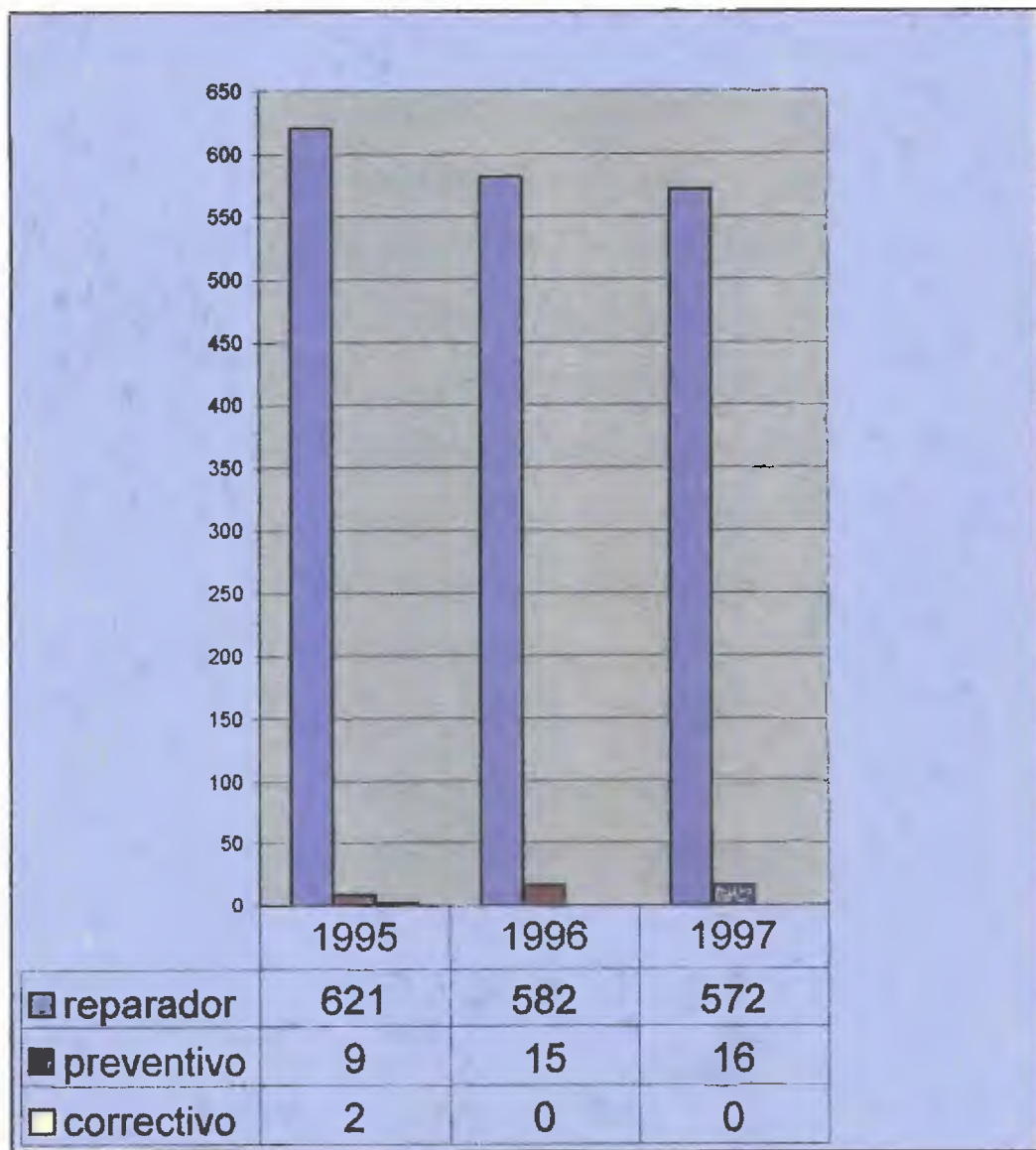
Panamá, 5 de Marzo de 1999.

GRAFICAS

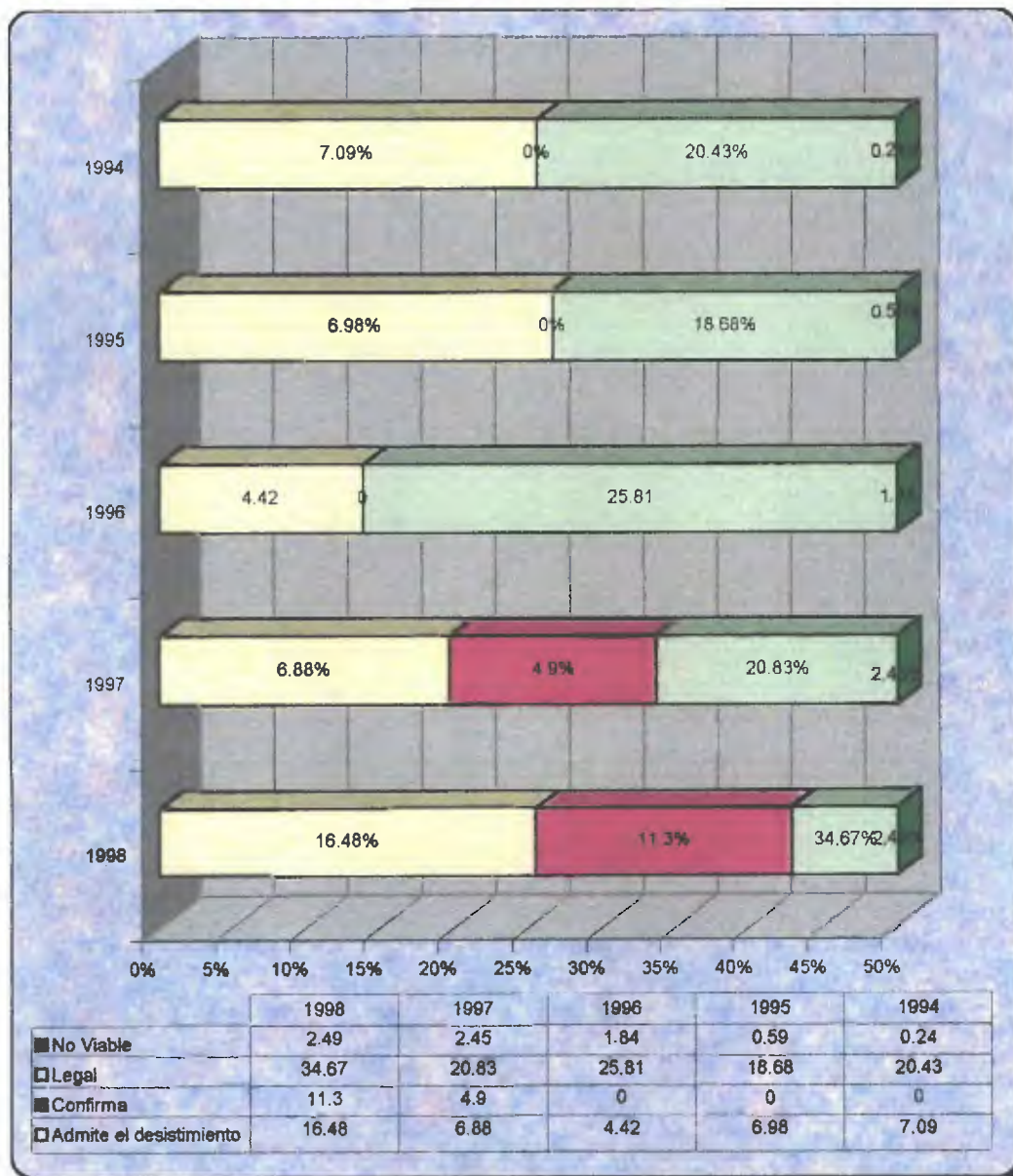
GRAFICA # 1
ACCIONES DE HABEAS CORPUS CONFIRMADAS Y NEGADAS DURANTE
1994 A 1998



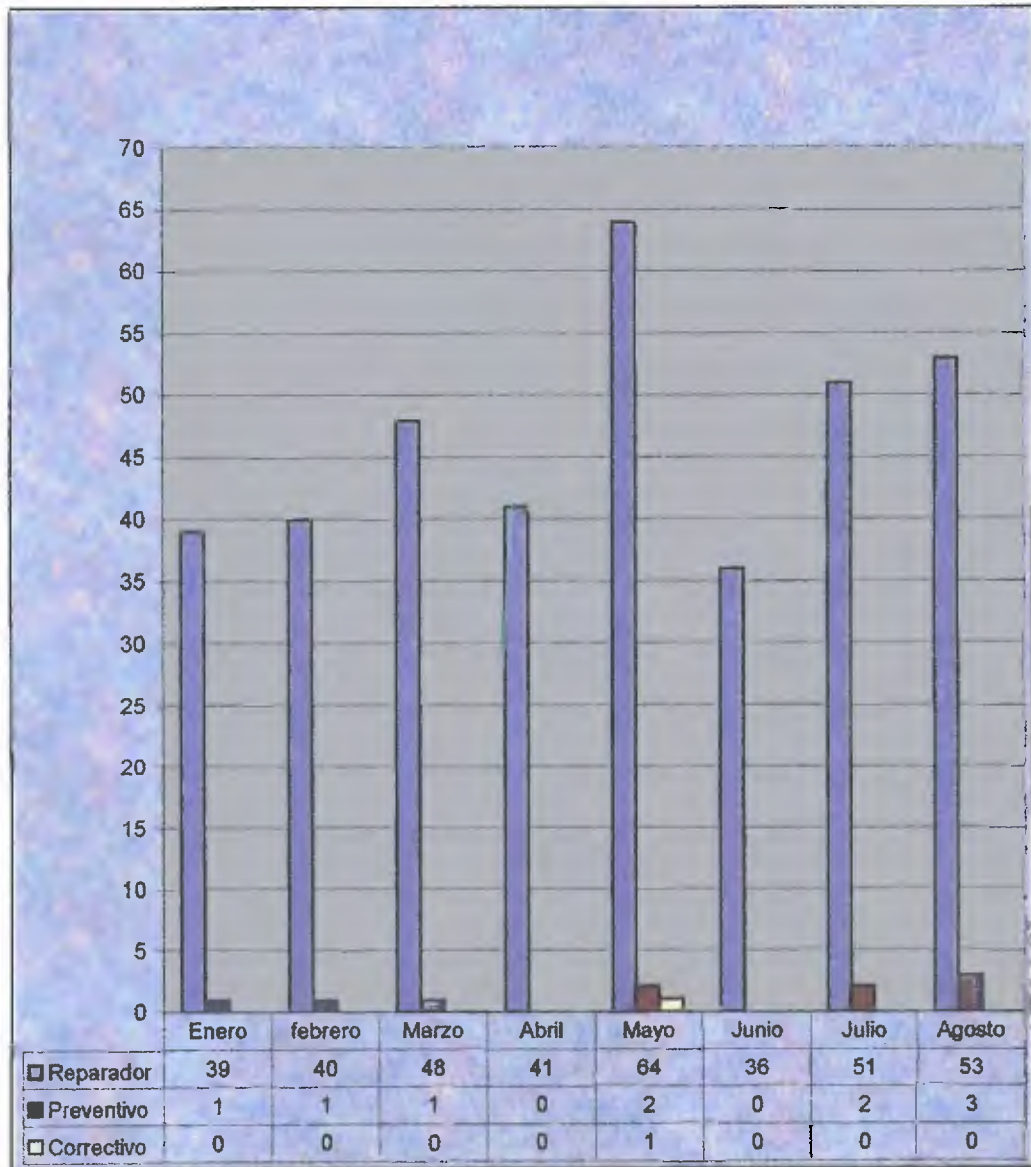
GRAFICA # 2
CLASES DE ACCIONES DE HABEAS CORPUS
ADMITIDAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DURANTE LOS AÑOS 1995 A 1997



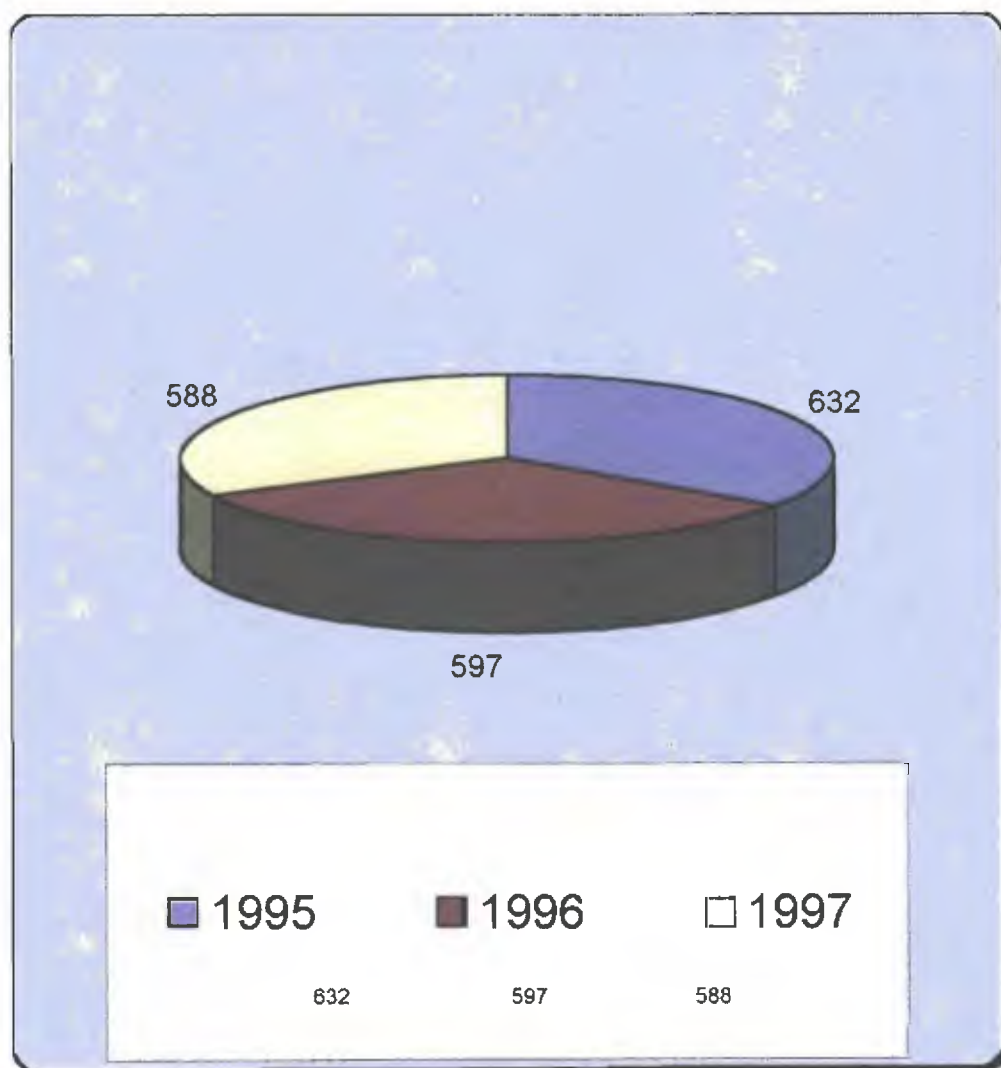
GRAFICA # 3
CUADRO PORCENTUAL DE LAS ACCIONES DE HABEAS CORPUS
CONFIRMADAS, NEGADAS Y DESISTIDAS POR LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA EN LOS AÑOS 1994 A 1998



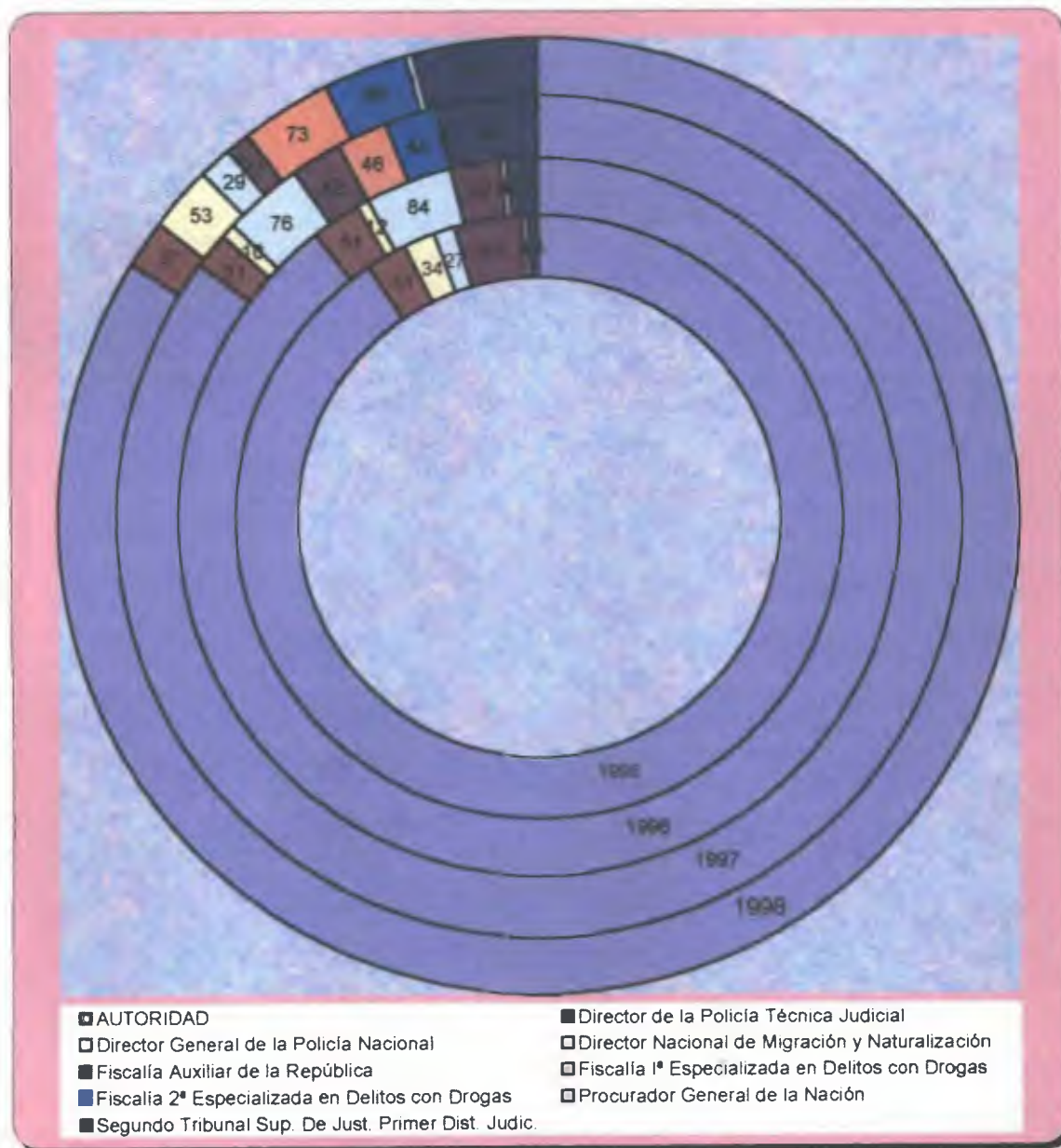
GRAFICA # 4
PROMEDIO DE ACCIONES DE HABEAS CORPUS
TRAMITADAS POR MES POR LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA EN EL AÑO 1998



GRAFICA # 5
TOTAL DE ACCIONES DE HABEAS CORPUS
ADMITIDAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
EN LOS AÑOS 1995, 1996 Y 1997



GRAFICA # 6
AUTORIDADES CONTRA LAS CUALES SE INTERPUSIERON LA MAYOR
CANTIDAD DE ACCIONES DE HABEAS CORPUS EN LOS AÑOS 1995 A
1998



PROYECTO DE LEY

Presentación. 17.3.99

Hora 11:11 AM

A Debate

A Votación

2 de marzo de 1999

Aprobada Votos

Rechazada Votos

Señor Presidente:

Abstención Votos

Tengo el honor de dirigirme por su digno conducto a la Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de la autorización otorgada por el Consejo de Gabinete, para presentar a la consideración de este Organó del Estado el Proyecto de Ley "POR LA CUAL SE CREA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA SALA QUINTA DE INSTITUCIONES DE GARANTIA Y DE CASACION LABORAL, SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CODIGO JUDICIAL Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual merece la siguiente Exposición de Motivos.

Los esfuerzos para modernizar la sociedad panameña en sus aspectos sociales y económicos deben pasar necesariamente por actualizar las instituciones e instrumentos jurídicos que tiendan a hacer más eficiente y eficaz la administración de justicia en Panamá, ya que la profundización de este proceso de cambios no resultaría viable si no lleva aparejado el mejoramiento de este sistema, que constituye el soporte de toda forma democrática de gobierno

El aumento que registran las demandas de Habeas Corpus y de Amparo de Garantías Constitucionales que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2602 y 2607 del Código Judicial, está llamado a conocer y decidir el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, requiere que los Magistrados que lo

Honorable Legislador
GERARDO GONZALEZ VERNAZA
Presidente
Asamblea Legislativa
E. S. D.

integran deban utilizar para el cumplimiento de este mandato legal, horas de trabajo requeridas para la sustanciación de otros negocios que, en atención a su especialización, les corresponde atender dentro de cada una de las Salas a las que pertenecen. Ello resta agilidad y eficacia a nuestro sistema judicial.

El Proyecto de ley que con fundamento en el párrafo final del artículo 200 de la Constitución Política, me permito presentar en esta fecha a vuestra consideración, propone la creación de una nueva sala dentro de la Corte Suprema de Justicia, sobre la cual recaerá la responsabilidad de conocer y decidir sobre las demandas Habeas Corpus y de Amparo de Garantías Constitucionales que actualmente corresponden al Pleno, y los Recursos de Casación Laboral que, de acuerdo a la competencia que le atribuye el Código Judicial, son elevados a la Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo

En relación con esta última categoría de negocios, cuya competencia el Proyecto de Ley atribuye a esta nueva Sala, resulta importante destacar que en el campo del derecho laboral, el Gobierno Nacional adquirió el compromiso de fortalecer la Jurisdicción Especial de Trabajo y asegurar de esta manera una administración de justicia laboral, sistemática y coherente, que sea garantía de equidad y eficiencia

La evolución del Derecho del Trabajo, como una de las principales garantías de los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución Política, tiene hoy día relevancia nacional e internacional al punto que, en razón del Principio de Especialización, el actual sistema estructurado en los Juzgados Seccionales de Trabajo, las Juntas de Conciliación y Decisión y los Tribunales Superiores de Trabajo, reclama que el mismo culmine en un organismo colegiado del más alto nivel, exclusivamente dedicado a esta

rama del Derecho, con igual jerarquía que la reconocida tradicionalmente a otras disciplinas jurídicas como el Derecho Civil, el Derecho Penal y el Derecho Administrativo, logrado con la creación de las tres salas especializadas con las que se integró la Corte Suprema de Justicia

La experiencia positiva registrada en países como España, que al dictar el nuevo régimen orgánico del poder judicial en el año 1985, creó la Sala Cuarta de lo Social en el Tribunal Supremo, o Colombia, en donde a partir del año de 1956 se incorporó el Antiguo Tribunal Superior del Trabajo a la Corte Suprema de Justicia, o en Costa Rica, que en 1948, a raíz de las profundas reformas introducidas en los Organos del Poder Público, creó la Sala de Casación Laboral como parte integrante de la Corte Suprema de Justicia, indican una tendencia dentro de la legislación comparada en apoyo a la decisión del Organo Ejecutivo de recomendar la aprobación de este Proyecto de Ley, mediante el cual se deroga la Corte de Casación Laboral, creada en el año de 1972 por el Código de Trabajo, para convertirla en una nueva Sala de la Corte Suprema de Justicia, que dentro de su competencia se especialice en el conocimiento y la decisión de los asuntos laborales

Por lo que se refiere particularmente a otros aspectos del contenido de este Proyecto de Ley, se designan tres nuevos Magistrados y sus respectivos Suplentes, para atender los negocios propios de las instituciones de garantía y de la jurisdicción laboral que actualmente conocen en el Pleno y la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente. Además, se adiciona una nueva Sección al Título III del Capítulo I del Libro Primero del Código Judicial, con el objeto de incorporar la Sala de Quinta de Instituciones de Garantía y de Casación Laboral a la Corte Suprema de Justicia y fijar la competencia de la misma

Igualmente, en cumplimiento del principio que contempla el artículo 200 de la Constitución Política, el Proyecto de Ley establece como fecha de inicio de funciones de esta Sala, el 1 de julio de 1999, al igual que el sistema escalonado que regirá para los Magistrados Principales y sus Suplentes, que sean designados inicialmente por el Consejo de Gabinete para integrar la misma; los cuales, ejercerán sus cargos durante un período de cinco, ocho y diez años, respectivamente.

Con motivo de la competencia que se atribuye a esta nueva Sala de la Corte Suprema de Justicia en materia de controversias derivadas de la relación laboral, este Proyecto de Ley también propone la modificación de los artículos 107 y 114 de la Ley No.19 de 11 de junio de 1997 "Por la cual se organiza la Autoridad del Canal de Panamá, con el propósito de dar competencia a dicha Sala para conocer de los recursos que se presenten contra los laudos arbitrales mediante los cuales se resuelvan administrativamente las controversias laborales en esta entidad estatal y para decidir sobre las apelaciones a que den lugar las decisiones de la Junta de Relaciones Laborales creada por mandato de la referida excerta legal

La aprobación, de esta Propuesta de Ley por parte de la Asamblea Legislativa, dotará al Órgano Judicial de un ente especializado, requiendo durante largo tiempo, que servirá para perfeccionar en nuestro país la aplicación de la justicia en materia de instituciones de garantía y en la esfera del Derecho laboral, con el consecuente beneficio para la sociedad en general, por razón del mejoramiento en la calidad de las decisiones que se adopten dentro de estas jurisdicciones.

Por lo expuesto y debido a la importancia que reviste para nuestro sistema de Administración de Justicia, solicito respetuosamente a los miembros de esta augusta cámara considerar bajo la condición de urgencia notoria el Proyecto de Ley que hoy presento a vuestra consideración, para que una vez se cumpla el proceso constitucional y legal correspondiente, se convierta en Ley de la República.


MARIELA SAGEL

Ministra de Gobierno y Justicia.

PROYECTO DE LEY No. _____
(de de de 199)

**" POR LA CUAL SE CREA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; LA SALA -
QUINTA DE INSTITUCIONES DE GARANTIA Y DE CASACION LABORAL, SE
MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CODIGO JUDICIAL Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES "**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA :

ARTICULO 1 : Se crea en la Corte Suprema de Justicia, la Sala Quinta de Instituciones de Garantía y de Casación Laboral, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

ARTICULO 2 Se modifica el artículo 71 del Código Judicial, el cual queda así

" ARTICULO 71 . La Corte Suprema de Justicia se compone de doce Magistrados elegidos conforme lo señala la Constitución Política "

ARTICULO 3 . Se modifica el artículo 73 del Código Judicial, el cual queda así .

" ARTICULO 73 . La Corte Suprema de Justicia tendrá cinco Salas ; la primera de lo Civil; la segunda de lo Penal, la tercera de lo Contencioso Administrativo, la cuarta de Negocios Generales y la quinta de Instituciones de Garantía y de Casación Laboral "

ARTICULO 4 . Se modifica el artículo 74 del Código Judicial, el cual queda así

"ARTICULO 74. Cuando los intereses de la administración de justicia lo aconsejen, el Pleno de la Corte podrá, con el voto de siete Magistrados, por lo menos, hacer una nueva distribución de los miembros permanentes de las Salas Primera, Segunda, Tercera y Quinta "

ARTICULO 5 : Se modifica el artículo 75 del Código Judicial, el cual queda así .

" ARTICULO 75 : En el mes de octubre de cada dos años la Corte Suprema de Justicia elegirá, por mayoría de votos, el Presidente y Vicepresidente de la Corporación.

El Presidente tendrá, además de las atribuciones que le señala esta Ley, la de presidir el Pleno, la Sala a que pertenece y la de Negocios Generales. Las otras tres Salas elegirán en el mismo acto y en la misma forma, el respectivo Presidente, uno de los cuales será elegido como Vicepresidente de la Corporación "

ARTICULO 6 . Se adiciona el siguiente párrafo al artículo 78 del Código Judicial

" ARTICULO 78 :

Si el Magistrado impedido es el Sustanciador, el negocio se repartirá nuevamente entre los otros Magistrados del Pleno o de la Sala respectiva, para que la penencia siempre corresponda a uno de los Magistrados titulares, salvo el caso de impedimento de todos los Magistrados principales, en cuyo caso, el negocio se repartirá entre todos los Suplentes del Pleno o de la Sala respectiva, para que el Suplente escogido sea el Sustanciador "

ARTICULO 7 Se modifica el artículo 102 del Código Judicial, el cual queda así .

"ARTICULO 102: Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los Presidentes de las Salas Primera, Segunda, Tercera y Quinta, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos, de instituciones de garantía o casación laboral y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de este acto "

ARTICULO 8 : Se modifica el artículo 114 del Código Judicial, el cual queda así :

" ARTICULO 114 . En toda decisión del Pleno y de las Salas es necesaria mayoría absoluta de votos.

En caso de empate, el Presidente de la Corte decidirá la votación mediante la expedición de un voto adicional "

ARTICULO 9. Se adiciona la siguiente Sección al Título III del Capítulo I del Libro Primero del Código Judicial, sobre Organización Judicial .

Sección 7ª

Sala Quinta de Instituciones de Garantía y de Casación Laboral

ARTICULO 101A . A la Sala Quinta corresponde conocer de lo siguiente

- 1. De la acción de Habeas Corpus, sean éstos reparadores o preventivos, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o dos o más provincias, que no formen parte de un mismo distrito judicial,**
- 2 De la acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se trate de actos que procedan de autoridades o funcionarios o corporaciones que tengan jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias;**
- 3. De la acción de Habeas Corpus o de Amparo de Garantías Constitucionales contra los Magistrados, Tribunales Superiores y Fiscalías de Distrito Judicial,**
- 4 De las apelaciones contra los recursos de Habeas Corpus y Amparo de Garantías Constitucionales, procedentes de los Tribunales Superiores;**
- 5 Del recurso de Casación Laboral, a que se refiere el Capítulo IV, Título VIII, Libro IV del Código de Trabajo;**
- 6 En una sola instancia, de las cuestiones de competencia suscitadas entre los Tribunales Superiores de Trabajo;**

Asimismo, la Sala Quinta ejercerá todas las demás atribuciones que el Código de Trabajo confiere a la Corte de Casación Laboral y las otras facultades que le confiera la Ley.

ARTICULO 101B : Las sentencias que dicte la Sala Quinta, en virtud de lo dispuesto en esta Sección, son finales, definitivas y obligatorias y no admiten recurso alguno

ARTICULO 10: Los Magistrados que integran la Sala Quinta serán nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, con sujeción a la aprobación del Organó Legislativo, para un período de diez años.

PARAGRAFO TRANSITORIO : Los nombramientos de los tres primeros Magistrados de la Sala Quinta y sus respectivos Suplentes, se harán a partir del 1 de julio de 1999 y sus períodos son los siguientes.

Un Magistrado Principal y su Suplente, quienes ejercerán el cargo desde el 1 de julio de 1999 al 31 de diciembre de 2003.

Un Magistrado Principal y su Suplente, quienes ejercerán el cargo desde el 1 de julio de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2005

Un Magistrado Principal y su Suplente, quienes ejercerán el cargo desde el 1 de julio de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2008

ARTICULO 11 . El Estado, por conducto del Organó Ejecutivo, tomará las medidas necesarias a fin de dotar al Organó Judicial de los recursos indispensables para el funcionamiento de la Sala Quinta, hasta tanto el Organó Judicial la incluya en su Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones para el año 2,000.

ARTICULO 12 . Se modifica el numeral 1 del artículo 2602 del Código Judicial, el cual queda así .

“ARTICULO 2602 :

1 La Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o dos o más provincias ”

ARTICULO 13 Se modifica el numeral 1 del artículo 2607 del Código Judicial, el cual queda así .

"ARTICULO 2607 :

1. La Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o dos o más provincias. ".

ARTICULO 14: El artículo 107 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997 quedará así:

"ARTÍCULO 107. No obstante lo establecido en el artículo 106, los laudos arbitrales podrán ser recurridos ante la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, dentro del término de 30 días hábiles, contado desde la notificación del fallo correspondiente. Dicho recurso, que será en el efecto suspensivo, sólo procederá cuando el laudo arbitral esté basado en una interpretación errónea de la Ley o los reglamentos, por parcialidad manifiesta del árbitro o incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del arbitraje."

ARTICULO 15: El artículo 114 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997 quedará así:

"ARTÍCULO 114: La Junta de Relaciones Laborales tramitará, con prontitud, todo asunto de su competencia que se le presente y, de conformidad con sus reglamentaciones, tendrá la facultad discrecional de recomendar a las partes los procedimientos para la resolución del asunto, o de resolverlo por los medios y procedimientos que considere convenientes.

Las decisiones de la Junta de Relaciones laborales serán apelables, salvo que sean contrarias a esta Ley, en cuyo caso la apelación se surtirá ante la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión será definitiva y obligatoria."

ARTICULO 16: Se deroga el numeral 3 del artículo 1064 del Código de Trabajo, el artículo 91 y los numerales 13 y 14 del artículo 98 del Código Judicial; se modifican los artículos 71, 73, 74, 75, 114; el numeral 1 del artículo 2602, el numeral 1 del artículo 2607 del Código Judicial y los artículos 107 y 114

PROYECTO DE LEY No _____

Página No 6

de la Ley No.19 de 11 de junio de 1997, se adiciona el artículo 78 y los artículos 101A y 101 B del Código Judicial

ARTICULO 17: La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Panamá, a los ~~14~~ días del mes de ~~Marzo~~ mil novecientos noventa y nueve (1999)

PROPUESTO A LA CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, hoy ~~14~~ de ~~Marzo~~ de 1999, por la suscrita **MARIELA SAGEL**, Ministra de Gobierno y Justicia, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete, otorgado en su sesión de 15 de enero de 1999.


MARIELA SAGEL

Ministra de Gobierno y Justicia

I. ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY

Encontrándonos en la fase final para la sustentación de nuestro trabajo de tesis, para optar por el título de maestría en derecho procesal, surge el día 17 de marzo de 1999 de manera repentina e inesperada, la presentación al Pleno de la Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley **“POR EL CUAL SE CREA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA SALA QUINTA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍA Y DE CASACIÓN LABORAL, SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO JUDICIAL, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”**.

Como quiera que el proyecto presentado con urgencia notoria a la Asamblea Legislativa, por iniciativa legislativa de la Ministra de Gobierno y Justicia, tiene especial relevancia con el estudio que hemos realizado del Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus, toda vez que el proyecto recomienda cambiar la competencia de las acciones de Habeas Corpus, que en la actualidad son del conocimiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

A. GENERALIDADES DEL PROYECTO:

El proyecto presentado al Pleno de la Asamblea Legislativa, el cual fue remitido a la comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, y distinguido con el número 88, tiene las siguientes características.

1. El Proyecto tiene como finalidad principal la creación de la sala quinta de garantía constitucionales y de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia.
2. El proyecto pretende elevar de nueve (9) a doce (12) el número de magistrados de la Corte Suprema, con sus respectivos suplentes y deroga el actual Tribunal de casación laboral, creado por el Código de Trabajo en 1972, el cual nunca se implementó, ni tuvo vida jurídica.
3. Esta nueva Sala de la Corte, tendría como labor principal, conocer de las acciones de Habeas Corpus y amparos de Garantías Constitucionales, que actualmente conoce y decide el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
4. Este despacho judicial, también asumiría la competencia sobre los recursos de casación laboral, que actualmente son de competencia privativa de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia.
5. Además de las acciones de Habeas Corpus y amparo de garantías y de los asuntos de casación laboral. El proyecto propone que la nueva sala tenga competencia para conocer de los recursos contra los fallos arbitrales y las apelaciones o decisiones de la junta de relaciones laborales que contemplan la ley de la autoridad del Canal de Panamá, para resolver las controversias laborales en esta entidad estatal.
6. El proyecto propone un sistema escalonado para el nombramiento de los tres (3) nuevos magistrados, con periodos contemplados entre diez (10), ocho (8) y cinco (5) años, respectivamente.

B. CRITICAS AL PROYECTO:

Desde el momento en que el proyecto fue presentado al Pleno de la Asamblea Legislativa, y ser difundido a la comunidad jurídica, inmediatamente se hicieron sentir las voces más representativas del foro, criticando la forma en que ha sido presentado el proyecto, la intensión manifiesta de aprobarlo a tambor batiente, Y a la vez se critica que el mismo contiene graves imprecisiones de fondo, entre las críticas que se le han hecho al proyecto # 88 de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa tenemos:

1. Que el proyecto de Ley No. 88, ha surgido a la palestra pública sin haber sido sometido a las consultas más mínimas y elementales, ya que ni siquiera se le tomó en cuenta al Colegio Nacional de Abogados, ni tampoco a las facultades de Derecho de las diferentes Universidades de la República
2. El proyecto le da excesivas facultades al ejecutivo para que este discrecionalmente nombre a tres (3) magistrados, cuando nuestra tradición jurídica indica que le corresponde a cada órgano del Estado el nombramiento de un (1) magistrado.
3. Que la Corte Suprema de Justicia tiene iniciativa legislativa propia, y si el proyecto cambia la estructura interna de la Corte Suprema de Justicia, es lógico que este proyecto debió ser preparado, discutido, y aprobado por la mayoría de los Magistrados actuales y

sobre todo debió ser presentado a la Asamblea Legislativa por iniciativa propia de la Corte, y no por la Ministra de Gobierno y Justicia.

4. El Proyecto ha sido muy criticado por la opinión pública, ya que el momento político que vive el país, próximo a las Elecciones populares del 2 de mayo de 1999. Hoy por hoy, no existen las condiciones necesarias para nombrar tres (3) nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que en estos momentos en que el Presidente está en los últimos días de su mandato, estas designaciones responderían a criterios políticos y no a criterios de intelectualidad, de conocimientos, de formación y otros que son los que se deben tener en cuenta para nombrar un Magistrado. Y precisamente el requisito que más sobresale en un año pre-electoral es el de ser amigo o no del Presidente de la República.
5. El Proyecto, en su apresurada redacción, y en su evidente inconsulta, no recogió los últimos avances en materia de habeas corpus que ha reconocido la Corte, ya que el Proyecto al referirse al Instituto Procesal Constitucional de Habeas Corpus, lo llama demanda de Habeas Corpus o "Recurso" de Habeas Corpus. (Ver exposición de motivos y la recomendación de la creación del artículo 101 A del Proyecto).

No entendemos esta imprecisión procesal, cuando a estas alturas ya es un tema superado por la doctrina y la Corte Suprema de Justicia ha dejado aclarado casi a regañadientes que el habeas corpus es una "Acción" y no un "Recurso", y siempre ha sido motivo de grandes preocupaciones procesales, la adecuación de la redacción constitucional, con la redacción del Código Judicial, y no entendemos como un Proyecto de Ley presentado a la Asamblea el 17 de marzo de 1999, todavía tenga estas imprecisiones procesales, cosa que ya la doctrina, la jurisprudencia y la Ley han superado.

6. El Proyecto al recomendar la creación del artículo 101 A en su numeral # 1 dice:

ARTICULO 101 A: A la Sala Quinta corresponde conocer de lo siguiente:

1. De la acción de Habeas Corpus, sean estos reparadores o preventivos, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o dos o más provincias, que no formen parte de un mismo distrito judicial; (lo subrayado es nuestro)

Los redactores del Proyecto de Ley, parecen ignorar que la Corte Suprema de Justicia en Fallos de 11 de agosto de 1993, 30 de mayo de 1994, 20 de junio de 1997 y 24 de agosto de 1994, ha

reconocido la modalidad de habeas corpus **CORRECTIVO** “el cual tiene como esencia terminar con torturas o malos tratos ocasionados a detenidos legalmente, por sus custodios, pues no es la finalidad de esa detención preventiva el infligir a los reos de malos tratos que vayan en detrimento de su integridad física o mental, así como dificultar su readaptación a la sociedad”. Tal como ha sido presentada la redacción del numeral # 1 del artículo 101 A del Proyecto de Ley, no incluye la acción de habeas corpus en su modalidad correctiva. Consideramos que por la experiencia jurisprudencial, el artículo de la Ley debería dejar abierta la posibilidad de que se incluyan otras modalidades de habeas corpus, y debería decir:

ARTICULO 101 A: A la Sala Quinta corresponde conocer de lo siguiente:

- 1. De la acción de habeas corpus, sean estos reparadores o clásicos, preventivos, correctivos, rectificadores o de oficio, o cualquier otra modalidad que pueda crear la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.**

Así de esta manera adecuaríamos el Proyecto de Ley a la realidad jurídica de los últimos avances de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de habeas corpus.

7. El Proyecto al crear una Sala con tres (3) Magistrados, traería un problema en cuanto a la aplicación de sus decisiones, porque dos (2) de ellos haciendo mayoría, son los que van a decidir sobre la legalidad o ilegalidad de una detención o de un amparo de garantías.
8. El proyecto otorga facultades excesivas al Organo Ejecutivo para designar tres nuevos magistrados y sus respectivos suplentes, elevando así la cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto posee una característica especial, ya que inexplicablemente ignora el principio legislativo de la "Vacatio Legis" y le impone como fecha cierta para el inicio de las funciones de los nuevos magistrados el día 1 de julio de 1999, razón por la cual fue presentada con la solicitud de "Urgencia Notoria"
9. El proyecto violenta la prelación legislativa, ya que no tiene explicación lógica, que a este proyecto se le dé el trámite legislativo especial de urgencia notoria, ya que en el orden cronológico actual de la Secretaría Legislativa existe una gran cantidad de proyectos de mayor trascendencia popular, que se han quedado sin discutir y todavía aún en este ultimo periodo, no han podido ser enviados a la comisión respectiva para el primer debate.

Es bien sabido que en materia parlamentana, para dar trámite de urgencia notoria a un proyecto de ley, se dan 3 situaciones especiales:

- a. La norma general establece que los proyectos deberán debatirse de acuerdo al orden cronológico en que han sido presentados a la Secretaria General de la Asamblea Legislativa.
 - b. Se exceptúa a este rigor el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado, en razón de que por mandato constitucional debe ser aprobado antes del 31 de Diciembre del año en que se debate.
 - c. El otro caso en el que se puede dar trámite de urgencia notoria a un Proyecto de Ley, sería cuando se trate de una calamidad pública, pero a nuestro modo de ver el nombramiento de tres (3) magistrados adicionales de la Corte Suprema de Justicia nada tiene que ver con una necesidad urgente, que se requiere la creación de una nueva sala para evitar un peligro inminente o una calamidad pública. Por lo tanto rechazamos el trámite con que se ha acogido dicho proyecto en la Asamblea Legislativa.
10. En la elaboración del Proyecto no se tomó en consideración a ninguna de las facultades de derecho de las distintas Universidades del país, tampoco se consultó a organismos tales como el Colegio Nacional de Abogados, ni fue revisado por ningún experto Constitucionalista Nacional.

C. NUESTRA OPINION

Luego de analizar los puntos más sobresalientes del Proyecto de Ley N° 88, consideramos que la creación de la Sala Quinta de Instituciones de Garantías, podría ayudar de alguna manera a descargar la justicia ordinaria penal, civil y administrativa, ya que estos Magistrados tendrían más tiempo para resolver sus casos, aunque somos de la firme convicción de que lo ideal para el tratamiento de los asuntos constitucionales sería la creación de una Corte Constitucional.

En nuestra opinión, aunque una nueva sala podría aliviar la carga de los procesos que se ventilan en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Proyecto # 88 ha sido presentado al Pleno de la Asamblea Legislativa en el momento más inoportuno, ya que la ciudadanía se encuentra inmersa en una Vorágine Pre-electoral, lo que a todas luces viciaría de objetividad el nombramiento de los nuevos Magistrados, los cuales responderían a criterios políticos del Gobernante de turno